

Activismo en contextos autoritarios

Activism in authoritarian contexts

Coords. | Johanna Cilano
Inés M. Pousadela
María Isabel Puerta



copérnico

ACTIVISMO EN CONTEXTOS AUTORITARIOS

ACTIVISM IN
AUTHORITARIAN CONTEXTS

Coordinadoras / Coordinators

Johanna Cilano / Inés M. Pousadela / María Isabel Puerta



copérnico



Primera edición: diciembre de 2023

© Alexander Lukashuk

© Engy Moussa

© Silvio Prado

© Isabella Picón

© Sello editorial Copérnico

© Grupo Editorial Traveler S.L.

C/ Cepas, 9

28270, Madrid

www.editorialtraveler.com

E-mail: info@editorialtraveler.com

Depósito legal: M-2535-2024

ISBN: ISBN 978-84-127487-1-0

Este libro es producto de la colaboración
junto a Gobierno y Análisis Político AC, y CIVICUS.

Queda prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del
copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier
medio o procedimiento, así como la distribución de ejemplares.

Impreso por Podiprint

Impreso en España



El papel utilizado para la impresión de este libro
está calificado como papel ecológico.

ÍNDICE

Prefacio	11
----------	----

LA SOCIEDAD CIVIL

EN CONTEXTOS AUTORITARIOS	15
---------------------------	----

Introducción	15
--------------	----

Panorama del espacio cívico	18
-----------------------------	----

Tendencias globales	20
---------------------	----

Espacio cívico y régimen político	26
-----------------------------------	----

Trayectorias autoritarias	30
---------------------------	----

Bielorrusia: represión más allá de las fronteras	34
--	----

Egipto: la revolución que no fue	39
----------------------------------	----

Nicaragua: democratización interrumpida	46
---	----

Venezuela: muerte de una democracia consolidada	52
---	----

Conclusión esperanzada	58
------------------------	----

REFERENCIAS	60
-------------	----

ANEXOS	64
--------	----

BELARUS CIVIL SOCIETY: SECRET

ORCHARD OR MIRAGE IN A DESERT?	69
--------------------------------	----

Before the 2020 revolution	72
----------------------------	----

Limits of authoritarian cooptation	74
------------------------------------	----

Loyalty vs. effectiveness	77
---------------------------	----

Digital oxygen	79
----------------	----

New players	80
-------------	----

Beginning of the end	83
----------------------	----

Russian accent	85
----------------	----

The purge of civil society	87
----------------------------	----

Nobel prize for civil society	89
-------------------------------	----

Mirage or goal	92
REFERENCES	93

ACTIVISTS' JOURNEY UNDER AUTHORITARIAN RULE: LESSONS FROM THE ARAB UPRISINGS	95
The journey of activism	97
A deliberate lack of political awareness	100
Poor political vision and weak commitment	104
CONCLUSION	111
REFERENCES	113

NICARAGUA, ACTIVISMO SOCIAL ENTRE LA REPRESIÓN Y LA DISPERSIÓN	117
La sociedad civil antes de 2018	118
Densidad	119
Autonomía	120
Autorregulación	122
El cierre de los espacios	124
El Informe GHREN	127
La dispersión	128
El reto del fortalecimiento de las capacidades	131
REFERENCIAS	136

ACTIVISMO EN CONTEXTOS POLÍTICOS RESTRICTIVOS: EL CASO DE VENEZUELA	139
¿A qué nos referimos con «un contexto político restrictivo» en el caso venezolano?	141
Régimen híbrido	142
Regresión democrática	148
La vocación totalitaria del chavismo	151

Retos y prácticas de los activismos en Venezuela	159
El reto de cambiar el marco de acción colectiva	161
A modo de conclusión	165
REFERENCIAS	167
DATOS DE LOS AUTORES/AS	173

Prefacio

Este libro es el resultado del seminario virtual sobre desafíos del activismo en contextos políticos restrictivos, desarrollado entre marzo y abril de 2023 por iniciativa de Gobierno & Análisis Político AC (GAPAC) en colaboración con CIVICUS: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana. En el curso de 6 sesiones, especialistas de Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, México, Nicaragua y Venezuela analizaron las amenazas que pesan sobre la existencia y la labor de activistas y organizaciones de la sociedad civil en países con regímenes autoritarios —Bielorrusia, Región Árabe, Nicaragua y Venezuela— en los que el espacio para la sociedad civil se encuentra fuertemente restringido.

La iniciativa reunió a una audiencia plural y diversa de estudiantes, activistas y académicos, sobre todo latinoamericanos, en sesiones de libre acceso de dos horas de duración. En todos los casos, a la presentación del ponente siguió un rico intercambio con las personas participantes. Los capítulos que conforman esta publicación, también de libre acceso, fueron elaborados sobre la base de las presentaciones y los insumos surgidos del debate.

El hilo conductor que atraviesa a todos los capítulos que integran este libro, centrados en cuatro países de tres continentes que se caracterizan por tener historias, trayectorias y experiencias políticas muy diferentes, es el de la reacción autoritaria de cierre del espacio cívico frente a la movilización de la ciudadanía en reclamo de libertades democráticas.

Para desempeñar cabalmente todo el amplio abanico de sus roles, la sociedad civil precisa de la vigencia plena de las libertades de asociación, expresión y reunión pacífica, es

decir, de un espacio cívico íntegro y habilitante. Pero justamente allí donde su presencia es más necesaria, la sociedad civil enfrenta las restricciones más severas. Los regímenes autoritarios la perciben, con toda razón, como el último obstáculo que se interpone entre ellos y el poder absoluto, empujándola a una posición defensiva. A sabiendas de que en ello se juega su propia existencia, la sociedad civil resiste con uñas y dientes. Pone al servicio de esta lucha altas dosis de creatividad, innovación y compromiso cívico. De la convicción de que la solidaridad internacional democrática es hoy más necesaria que nunca nace esta obra.

Las editoras

Preface

This book is the result of a virtual seminar on the challenges of activism in restrictive political contexts, conducted between March and April 2023 by Government & Political Analysis AC (GAPAC) in collaboration with CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation. Over the course of six sessions, experts from Argentina, the United Kingdom, the United States, Mexico, Nicaragua, and Venezuela analyzed the threats that weigh on the existence and work of civil society activists and organizations in countries with authoritarian regimes —Belarus, the Arab region, Nicaragua, and Venezuela— where the space for civil society is heavily constrained.

The initiative brought together a diverse audience of students, activists, and scholars, primarily from Latin

America, in two-hour open-access sessions. In all cases, the speaker's presentation was followed by a rich exchange with the participants. The chapters that make up this publication, also freely accessible, were developed based on the presentations and inputs that emerged from the discussions.

The common thread that runs through all the chapters in this book, focusing on four countries from three continents that are characterized by very different histories, trajectories, and political experiences, is the authoritarian reaction to close the civic space in response to citizens' demands for democratic freedoms.

To fully carry out the wide range of their roles, civil society requires the effective realization of the freedoms of association, expression, and peaceful assembly—in other words, a healthy and enabling civic space. But precisely where its presence is most needed, civil society faces the most severe restrictions. Authoritarian regimes rightly perceive it as the last obstacle standing between them and absolute power, pushing it into a defensive position. Knowing that their very existence is at stake, civil society resists with determination. It brings high doses of creativity, innovation, and civic commitment to this struggle. This book was born out of the conviction that international democratic solidarity is now more necessary than ever.

The editors

LA SOCIEDAD CIVIL EN CONTEXTOS AUTORITARIOS

Inés M. Pousadela¹

Introducción

La sociedad civil es tan importante que si no existiera habría que inventarla. Tal como hizo notar Jürgen Habermas (1996), los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil tienen la capacidad de funcionar como sensores de situaciones críticas. Enraizados en el mundo de la vida, son más sensibles que los sistemas político y administrativo para percibir nuevos problemas, identificarlos y proveer los marcos interpretativos que necesitamos para hacerles frente. De ahí que fueran esos movimientos y orga-

¹ Inés M. Pousadela es Especialista Senior de Investigación de CIVICUS: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, donde además codirige CIVICUS Lens y coproduce el Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil. También se desempeña como profesora de las asignaturas Política Comparada y Sociedad Civil Global en la Universidad ORT de Uruguay. Este capítulo utiliza insumos del CIVICUS Monitor, de los informes anuales de CIVICUS sobre el estado de la sociedad civil y de la plataforma CIVICUS Lens, así como de otras fuentes primarias y secundarias, entre las que destacan entrevistas con actores de la sociedad civil de los países analizados.

nizaciones —y no los funcionarios públicos o los líderes políticos— los que llevaron a la agenda pública los grandes temas de las últimas décadas, desde el peligro nuclear hasta la amenaza ecológica, pasando por la desigualdad de género, las disfuncionalidades de la globalización y las complejidades del multiculturalismo. La sociedad civil sigue marcando el rumbo en todos estos temas.

La sociedad civil desempeña muy bien una serie de funciones, y en el ejercicio de algunas de ellas resulta verdaderamente insustituible. Ni el más democrático de los Estados está adecuadamente equipado para controlarse a sí mismo; de ahí la importancia de la sociedad civil como guardiana de derechos y libertades. No es casual que encontremos a la sociedad civil en los orígenes mismos del Estado liberal, un Estado que encontró en ella los límites al ejercicio de su poder. La sociedad civil impone límites y exige explicaciones: llama a los poderosos a rendir cuentas.

Es imposible sobreestimar la contribución de la sociedad civil al desarrollo de la arquitectura global de derechos humanos —instituciones, agencias, tratados, acuerdos, normas, estándares— y a su funcionamiento continuo. Una altísima proporción de los insumos que procesan los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas procede de la sociedad civil. En su ausencia, ¿quién llamaría a los Estados a rendir cuentas de sus actos allí donde las instancias domésticas se han agotado? Se trata, sí, de mecanismos insuficientes, pero ¿quién sino la sociedad civil batalla sin pausa para dotarlos de uñas y dientes?

Además de monitorear el cumplimiento de las obligaciones estatales, reportar violaciones de derechos, asistir a las víctimas y exigir reparaciones, la sociedad civil cobija

a innumerables personas expertas que aportan a la política pública; cerebros innovadores capaces de idear soluciones para los desafíos de nuestro tiempo, desde la desigualdad y la pobreza hasta el cambio climático y el conflicto violento; así como comunicadores con herramientas para traducir la jerga técnica al lenguaje llano del ciudadano de a pie y llevar la perspectiva de éste a los foros de toma de decisiones.

Allí donde los Gobiernos la perciben como una aliada, más que como una amenaza, la sociedad civil colabora con la administración pública con su experiencia, saber técnico y conocimiento del terreno, para que pueda producir resultados que beneficien a la ciudadanía. En cambio, allí donde los Gobiernos de turno la ven como un obstáculo que se interpone entre ellos y el poder absoluto, la sociedad civil se ve empujada a una posición defensiva centrada en la preservación de las condiciones de su propia existencia.

Para desempeñar su amplio abanico de roles, la sociedad civil precisa de un contexto habilitante: un espacio cívico íntegro y saludable. Pero justamente allí donde su presencia es más necesaria, en tanto que motor propulsor de la democracia y los derechos humanos, más restricciones enfrenta para operar.

Este capítulo introductorio ofrece un panorama global del espacio cívico para luego analizar el contexto de los cuatro países —Bielorrusia, Egipto, Nicaragua y Venezuela— en que se centran los estudios de casos que componen el resto del presente volumen. Dichos capítulos desmenuzan los desafíos que enfrenta el activismo en diversos contextos políticos restrictivos o autoritarios.

En esta introducción no abordamos todas las formas de activismo, sino específicamente el activismo de la sociedad

civil. Tampoco abarcamos la totalidad de los desafíos que enfrenta dicho activismo, que en diferentes contextos pueden ir desde la producción de liderazgos y la selección de tácticas efectivas y narrativas convincentes hasta el acceso a los recursos y la represión estatal. Nos concentramos, en cambio, en una clase específica de desafíos que tienen que ver con las restricciones que pesan sobre el ambiente en que se mueve la sociedad civil: el espacio cívico.

Panorama del espacio cívico

El espacio cívico está estructurado por tres libertades fundamentales —las libertades de asociación, de reunión pacífica y de expresión— y es de carácter tanto físico como virtual. Cabe subrayar que las restricciones sobre su componente virtual han ido en aumento a la par del desplazamiento del activismo al terreno de internet y las redes sociales, y en la misma medida en que las herramientas virtuales han enriquecido las tácticas de los movimientos sociales, por ejemplo, al amplificar convocatorias a la movilización callejera, con palpables efectos reales.

El Estado tiene no solo la obligación de respetar las libertades que componen el espacio cívico, sino también el deber de preservarlo de las intromisiones de actores no estatales. La evidencia empírica permite concluir que, si bien la mayor parte de las restricciones del espacio cívico sigue procediendo de actores estatales, hay una cantidad creciente de restricciones que son impuestas por un amplio abanico de actores no estatales: desde corporaciones privadas y seguridad contratada por empresas extractivas y grupos paramilitares o grupos de civiles armados afines al partido

gobernante hasta grupos supremacistas blancos o fundamentalistas religiosos (Pousadela y Perera, 2021).

Para evaluar la integridad del espacio cívico contamos con una herramienta en línea, el CIVICUS Monitor, que analiza las condiciones en que trabaja la sociedad civil en cada país y rastrea su evolución a lo largo del tiempo. Se trata de un índice compuesto que recoge una multiplicidad de indicadores para tres variables —libertad de asociación, libertad de expresión y libertad de reunión— y cuenta con un puntaje de base que experimenta periódicos ajustes en vivo, en función del monitoreo que realizan unos 20 socios de investigación, típicamente organizaciones de la sociedad civil que trabajan a nivel subregional. Estas organizaciones remiten, a intervalos regulares, la evidencia empírica que obtienen mediante la revisión de fuentes primarias y secundarias, incluida la consulta con actores relevantes de la sociedad civil local.² Para los países donde CIVICUS no cuenta con socios de investigación, la evaluación se basa en otras fuentes nacionales, regionales e internacionales. Las actualizaciones así obtenidas son trianguladas, verificadas, etiquetadas y sistematizadas por el equipo de CIVICUS.

En función del puntaje obtenido, el espacio cívico de cada país se clasifica en una de estas cinco categorías: abierto, estrecho, obstruido, represivo y cerrado.³

² Por ejemplo, durante el año 2022 los socios de investigación produjeron 493 actualizaciones que forman la base de datos referenciada en este capítulo.

³ Esta clasificación se basa en una metodología que combina datos cuantitativos y cualitativos procedentes de diversas fuentes. El puntaje en que se basan las calificaciones combina un puntaje de base y ulteriores actualizaciones en vivo. El puntaje de base tiene tres componentes: un puntaje clave —datos del componente E del

Tendencias globales

En 2022, en un contexto que se puede caracterizar como de regresión democrática (CIVICUS, 2023), el CIVICUS Monitor registró problemas sistémicos en el espacio cívico en 117 de 197 países y territorios de todo el mundo. Según sus cálculos, el 28,5% de la población mundial vive en países con espacio cívico cerrado, la cifra más alta desde la puesta en marcha de esta herramienta. El 42,2% reside en países con espacio cívico represivo y el 14,9% en países con espacio cívico obstruido. Apenas el 3,2% habita en países donde el espacio cívico es abierto, es decir, donde hay disfrute pleno de las libertades de asociación, expresión y protesta (CIVICUS Monitor, 2023b).

Lo que es aún más preocupante, se están observando restricciones graves del espacio cívico incluso en países donde éstas raramente solían ocurrir. En los países con espacio cívico estrecho las agresiones contra periodistas están casi tan extendidas como en los países con espacio cívico obstruido o represivo. Llamativamente, 25 de los países donde ha habido manifestantes detenidos tienen espacio cívico abierto o estrecho. En ese sentido, Europa Occidental es un ejemplo claro de que nadie es inmune a este mal: la mayoría de sus países mantienen un espacio cívico abierto, pero están registrando

Índice de Libertad en el Mundo de Freedom House para libertad de asociación, datos del indicador de asamblea pacífica de Variedades de Democracia (V-Dem) para libertad de reunión, y datos del Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras para libertad de expresión—, análisis de CIVICUS y análisis claves (informes narrativos de otras tres organizaciones). Para más detalle, véase CIVICUS Monitor (2023a).

mayores restricciones que en el pasado. En los últimos cinco años, ocho países europeos han bajado de categoría, y dos fueron recientemente degradados a la categoría «obstruido». Se trata, en suma, de un recordatorio de que los derechos no se pueden dar por ganados de una vez y para siempre; son, en cambio, un perpetuo campo de batalla.

A nivel global, el listado de los diez tipos de restricciones del espacio cívico más frecuentes durante 2022 fue encabezado por el acoso (documentado en 106 países), definido como la reiteración de conductas indeseadas contra personas defensoras, periodistas u organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de hacerles desistir de su trabajo y de disuadir a otros de emprenderlo. Le siguieron, en orden de magnitud, la detención de manifestantes (en al menos 90 países), la intimidación de personas defensoras y periodistas (82 países), las leyes restrictivas (84 países), los ataques contra periodistas (71 países), la interrupción de protestas (89 países, en 57 de los cuales se registró también uso excesivo de la fuerza), la censura, la criminalización de personas defensoras, la detención de personas defensoras y la detención de periodistas.

Llama la atención que varias de las restricciones más frecuentes tengan vínculo con las protestas, lo que revela el hecho singular de que 2022 fue un año repleto de manifestaciones.⁴ Empujada por el aumento de los precios de los alimentos y los combustibles, la gente se movilizó incluso en sitios donde el espacio cívico no resulta conducente a la expresión del disenso en las calles, por lo cual raramente

⁴ Sobre el tema específico del estado de la libertad de reunión pacífica a nivel global, véase CIVICUS Monitor (2022a).

se producen protestas. Muchas veces las protestas acabaron revelando problemas mucho más profundos de corrupción o abuso de poder, lo cual las tornó tanto más amenazantes, colocándolas en el punto de mira de la represión. Hossain y Hallock (2022) documentaron más de 12 500 protestas relacionadas con el aumento del costo de vida en 148 países de todos los niveles de desarrollo económico. También el CIVICUS Monitor (2023) verificó la ocurrencia de protestas en 132 países durante 2022.

Cabe señalar asimismo que las referidas tácticas restrictivas no son utilizadas en forma aislada, sino que se suelen aplicar de manera coordinada para limitar el activismo. Por ejemplo, si bien sólo dos de las restricciones mencionadas se vinculan explícitamente con la protesta, encontramos toda una batería de tácticas para limitar la movilización, e incluso para evitar que ésta siquiera tenga la posibilidad de emerger. Cuando las protestas ocurren de todos modos, no solamente son disueltas con fuerza excesiva y manifestantes detenidos, sino que les sigue la aplicación de tácticas de criminalización del activismo, con lo cual muchos casos de detención de personas defensoras de hecho se vinculan con su participación en protestas. Los datos del CIVICUS Monitor (2023) indican que en los últimos cinco años la cantidad de países que han procesado a activistas por su labor de defensa de derechos casi se ha duplicado, con casos en 68 países documentados en 2022.

De igual modo, el acoso y la intimidación a menudo apuntan a prevenir la recurrencia de las protestas. Y también los ataques contra periodistas se producen con frecuencia en el contexto de manifestaciones. Es usual que, en el

acto de cubrir manifestaciones, el periodismo y los trabajadores de los medios sean agredidos por la policía, por grupos afines al partido de Gobierno, e incluso por manifestantes que los perciben como alineados con uno u otro bando. No se trata de que los periodistas sean víctimas colaterales de la violencia o la represión de las manifestaciones: son un blanco deliberado de ataques allí donde los Gobiernos, además de impedir que ocurran manifestaciones o de dispersarlas cuando ocurren, tratan de evitar que el mundo se entere de lo que está sucediendo.

En cuanto al uso de leyes restrictivas, se puede tratar tanto de la implementación de legislación restrictiva de la libertad de asociación —las llamadas «leyes de ONG», que imponen requisitos excesivos y entregan a las autoridades facultades para denegar reconocimiento e incluso disolver organizaciones— como de leyes que limitan la protesta, por ejemplo, con el argumento de preservar el derecho a la libre circulación vehicular.

Si bien la aprobación de nuevas leyes restrictivas es menos frecuente que el uso de otras restricciones, el uso de estas leyes es clave para entender los procesos de cierre del espacio cívico que están ocurriendo en países como Nicaragua, donde el cierre de centenares de organizaciones de todo tipo y calibre resultó en 2021 en un cambio de calificación, de represivo a cerrado.

Asimismo, cabe destacar un tipo específico de leyes restrictivas —las llamadas «leyes de agentes extranjeros»—, que se han difundido como un reguero de pólvora desde que Rusia adoptara su primera versión en 2012. Según estas leyes, toda organización o medio de comunicación que reciba fondos del exterior y realice —a juicio de las autori-

dades, y sobre la base de definiciones vagas, ambiguas o laxas— actividades «políticas», debe registrarse como «agente extranjero», cumplir con múltiples obligaciones de reporte, someterse a escrutinio y limitar sus actividades a las permitidas por el régimen. Los cuatro países analizados en este volumen cuentan con regulaciones de este tipo (Coda, 27 de julio de 2021).

La crisis del espacio cívico (CIVICUS Monitor, 2023b) es un fenómeno global: actualmente se observan retrocesos en países muy variados en lo que se refiere tanto a la apertura de su espacio cívico como a la naturaleza de su régimen político. En el último año, han sido más numerosos los países que sufrieron retrocesos que aquellos que experimentaron avances. Pero el fenómeno no es uniforme ni lineal: se trata de una crisis desigual. Más que una reducción general del espacio cívico, se observan conjuntos de restricciones que son impuestas, en distintos contextos, sobre diferentes actores y con un propósito determinado (Transnational Institute [TNI], 2017).

En primer lugar, el espacio cívico no es uniforme desde el punto de vista territorial. Es frecuente que en un mismo país el activismo sufra restricciones sólo en algunos espacios locales, o que en diferentes espacios enfrente diversos tipos de restricción procedentes de distintas fuentes.

En segundo lugar, los datos recabados por el CIVICUS Monitor (2023b) muestran que las restricciones no afectan a todo el activismo por igual. El 36% de las actualizaciones que mencionan a algún grupo específico señala como blanco predilecto de restricción a los grupos que defienden los derechos de las mujeres y a las mujeres defensoras de derechos humanos, que además suelen experimentar formas

de violencia que tienen componentes específicos de género. Otros grupos mencionados con regularidad como blanco de restricciones son los sindicatos, los grupos ambientalistas, el activismo LGBTQI+ y el activismo juvenil. La prominencia de este último grupo parece tener vinculación con el rol desproporcionado que la juventud ha tenido en los últimos años en el activismo ambiental y contra el cambio climático, aunque también se ha destacado al frente de muchas otras luchas: desde los movimientos prodemocracia en Hong Kong e Irán y las movilizaciones contra el racismo sistémico en los Estados Unidos hasta las luchas por los derechos sexuales y reproductivos, y específicamente el derecho al aborto, en América Latina, y los movimientos LGBTQI+ de todo el mundo.

La visión general de las tácticas utilizadas y los grupos a los que van dirigidas nos devuelve por la negativa una imagen bastante exacta del activismo y sus impactos en distintos contextos. En efecto, es frecuente que las restricciones del espacio cívico se impongan de forma reactiva, es decir, en respuesta a la acción de la sociedad civil. No es mera coincidencia que el momento actual sea de gran efervescencia al mismo tiempo que de grandes restricciones. Estamos frente a movimientos sociales muy activos en diferentes terrenos, incluidos los de la igualdad de género y la justicia racial, la búsqueda de respeto por la diferencia, la promoción de la democracia y la protección del medio ambiente. La sociedad civil desempeña roles fundamentales de freno y contrapeso del poder tanto de actores estatales como de actores privados que reaccionan imponiendo restricciones para limitar acciones que interfieran con sus intereses.

Este fenómeno ha sido crecientemente subrayado por activistas que sostienen que los Gobiernos estudian las tácticas que emplea con éxito la sociedad civil para volverlas en su contra, transformándolas en delitos para criminalizarla y perseguirla. Así lo expresa Marta María Ramírez, periodista y activista feminista cubana, en referencia a la reciente reforma del Código Penal de su país:

Con el objeto de proteger al régimen del disenso, todas las tácticas que utiliza el activismo han sido transformadas en delitos de desorden público y contra la seguridad del Estado y se penaliza la financiación extranjera de organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación. Así se busca ahogar a los medios disidentes, porque ¿cómo se va a financiar en Cuba un medio que no esté alineado con el Estado? (Ramírez, 2 de junio de 2022).

Adicionalmente, la restricción del espacio cívico no es un proceso lineal, porque el espacio cívico es un campo de batalla. El CIVICUS Monitor registra no solamente retrocesos, sino también mejoras en la calidad del espacio cívico. Éstas pueden venir en forma de decisiones administrativas, fallos judiciales o avances legales, pero suelen tener un denominador común: constituyen victorias de la sociedad civil, para la cual la defensa del espacio cívico no es otra cosa que una lucha por la supervivencia.

Espacio cívico y régimen político

Los países con mayor calidad democrática tienen espacio cívico abierto. Esto no resulta sorprendente porque las liber-

tades cívicas forman parte de toda definición de democracia que no se limite al procedimiento electoral sino que, aún centrándose en las elecciones como elemento sine qua non de todo régimen democrático, atienda a la vigencia efectiva de aquellos derechos y libertades que hacen a las elecciones libres, justas y verdaderamente competitivas.

En el extremo opuesto, todos los países con espacio cívico cerrado son autocracias. Sin embargo, la relación entre espacio cívico y democracia no es lineal, como se observa en la tabla del Anexo, que presenta las codificaciones del CIVICUS Monitor y del Índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU, 2023) para 167 países y territorios.⁵

Este índice⁶ identifica 24 democracias plenas, 15 (62%) de las cuales tienen espacio cívico abierto – entre ellos los 14 países a los que la EIU asigna la mayor calidad democrática. Las restantes democracias plenas se colocan en la categoría inmediatamente inferior (espacio cívico estrecho), a excepción del Reino Unido, que a causa de la fuerte criminalización de la protesta ha sido

⁵ Este índice no proporciona datos para 30 países y territorios —en su mayoría microestados y pequeños Estados insulares— que sí están cubiertos por el CIVICUS Monitor. De ahí que las cifras diverjan de las del CIVICUS Monitor (2023b), que arroja 38 casos de espacio cívico abierto, 42 estrechos, 40 obstruidos, 50 represivos y 27 cerrados.

⁶ El Índice de Democracia de la EIU abarca cinco componentes interrelacionados: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del Gobierno, participación política y cultura política. Las libertades civiles, que incluyen las libertades de expresión, reunión y asociación, forman parte de su definición de democracia.

recientemente degradado a la categoría «obstruido». Si se observa en sentido inverso, 15 de los 21 países con espacio cívico abierto (71%) son democracias plenas.

En el extremo opuesto, 27 de los 28 países con espacio cívico cerrado son regímenes autoritarios. El caso desviado es Hong Kong, que según la EIU conserva un régimen híbrido, aunque está siendo cada vez más subsumido por China, cuyo régimen totalitario por diseño no contempla espacio alguno para la sociedad civil.

Asimismo, 54 de los 59 regímenes autoritarios que registra la EIU se distribuyen en partes iguales entre las dos peores categorías de espacio cívico: cerrado y represivo. Los cinco restantes tienen espacio cívico obstruido, pero no están lejos de caer en la categoría inmediatamente inferior.

En la zona gris encontramos 36 regímenes híbridos y 48 democracias defectuosas. Entre los primeros, 19 (53%) tienen espacio cívico obstruido y 13 (36%) espacio cívico represivo. De las segundas, 23 (48%) muestran espacio cívico estrecho y otras 13 (27%) espacio cívico obstruido. Seis tienen espacio cívico abierto y otras tantas tienen espacio cívico represivo. Esta dispersión se explica por las combinaciones específicas de rasgos democráticos y autoritarios que componen cada régimen híbrido, así como por la localización de las debilidades o defectos que padece cada democracia defectuosa. Pero ninguna democracia, por más defectuosa que sea, tiene espacio cívico cerrado.

El panorama actual de la democracia es, como el del espacio cívico, de regresión. Ciertamente, tanto la democracia como los derechos civiles y las libertades individuales que componen el espacio cívico son invenciones relativamente

recientes en la escala de la historia humana y, en ese sentido, siguen siendo un proyecto de largo plazo, todavía en construcción. Pero en el corto plazo en el cual transcurren nuestras pequeñas vidas humanas están experimentando reveses de vastas consecuencias.

El más reciente informe de la EIU (2023) sostiene que el progreso democrático se ha estancado: en 2022 la puntuación media mundial se mantuvo prácticamente sin cambios en relación con el año anterior. Pero este estancamiento esconde un retroceso, ya que 2021 había sido un año extremadamente negativo para la democracia, resentida por las restricciones de derechos impuestas con el argumento de la lucha contra la pandemia. Si bien 2022 fue un mejor año que 2021 en relación con la cantidad de países que mejoraron sus puntajes, más de la mitad de los países cubiertos por el índice se estancaron o retrocedieron.

Las conclusiones de V-Dem (2023) son aún más lapidarias. Según su último informe, para fines de 2022 los avances realizados en los últimos 35 años se habían esfumado. El 72% de la población mundial vive hoy bajo regímenes autocráticos, frente al 46% de diez años atrás. Por primera vez en más de 20 años, el mundo cuenta hoy con más autocracias cerradas que democracias liberales.⁷ El dato es aún más espeluznante si se calcula en porcentajes de población:

⁷ V-Dem clasifica a los países en cuatro categorías (democracia liberal, democracia electoral, autocracia electoral y autocracia cerrada), pero las definiciones subyacentes y los límites entre categorías no coinciden con las de la EIU, con lo cual numerosos países, sobre todo los que no se sitúan en ninguno de los extremos del índice, son ubicados por uno y otro en categorías que no necesariamente son equivalentes.

mientras el 13% de la población mundial vive en democracias liberales, el 28% lo hace en autocracias cerradas. Los indicadores de deterioro más destacados —aumento de restricciones a la libertad de expresión, cultural y académica, recrudecimiento de la censura y represión de las organizaciones de la sociedad civil, además del descenso de la calidad de las elecciones— confirman que la crisis del espacio cívico es un factor de peso en este retroceso democrático.

Para entender hacia dónde nos dirigimos, debemos observar no sólo la instantánea del momento, sino también el sentido de las trayectorias. En ese sentido, el panorama es poco alentador: según V-Dem, actualmente hay apenas 14 países en vías de democratización, la cifra más baja desde 1973, mientras que 42 se encuentran en proceso de autocratización. Este recorrido transita por dos vías típicas: la acumulación desmedida de poder, el vaciamiento institucional y el desmantelamiento del imperio de la ley por parte de líderes democráticamente electos, conducente a la autocracia electoral; y los más tradicionales golpes militares, conducentes a la autocracia cerrada.

Trayectorias autoritarias

Los cuatro países analizados en este volumen se encuentran actualmente bajo regímenes autoritarios. Todos ellos son colocados por V-Dem en la categoría de autocracias electorales, en la cual han estado instalados al menos durante la última década, aunque en los casos de Egipto y Nicaragua se observa la existencia de elementos de incertidumbre que podrían colocar a estos países en la categoría inferior de autocracias cerradas.

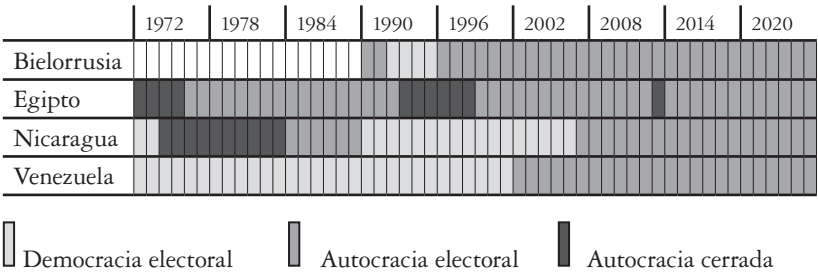
Como se observa en el Gráfico 1, no sería la primera vez que estos países retroceden en esa dirección: Nicaragua atravesó esa experiencia en los años setenta del siglo pasado, mientras que Egipto lo hizo también en esa década y nuevamente en los noventa. Este país también fue recatalogado como autocracia cerrada por un breve período en los años 2010, en el marco de una reacción brutal frente a la abortada revolución democrática de comienzos de esa década.

En el caso de Egipto salta inmediatamente a la vista también la ausencia de experiencia democrática previa. Este es un elemento destacado en la reflexión de Engy Moussa recogida en este volumen sobre las limitaciones que enfrenta el activismo en ese país. En efecto, la autora señala tres obstáculos para el crecimiento de un activismo prodemocracia fuerte y eficaz: una limitada conciencia política, la ausencia de un claro proyecto democrático y la falta de compromiso firme y de la voluntad de sacrificio que es necesaria en períodos críticos y de alto riesgo. Puede que en estos factores radicarán las principales razones por las cuales la llamada «Primavera Árabe» no logró desencadenar un proceso de democratización tras haber generado tanta expectativa en ese sentido.

La ausencia de un pasado democrático parece ser un componente clave de la explicación del contraste entre el destino de la mayoría de las democracias de la «tercera ola» (Huntington, 1994) en América Latina, que lograron persistir en el tiempo, y las que se instalaron en otras regiones del sur global, que en general corrieron con peor suerte. Esta falta también se hace sentir en numerosas exrepúblicas soviéticas, incluida Bielorrusia. El Gráfico 1 presenta únicamente la experiencia de Bielorrusia como estado independiente, pero no

se debe olvidar que durante casi 70 años el país estuvo gobernado por el régimen totalitario de la Unión Soviética, una forma específica de autocracia cerrada. Como muestra el Gráfico 1, durante sus primeros años de vida independiente Bielorrusia adoptó las formas de una democracia electoral, pero tal como expresa Alexander Lukashuk más adelante en este volumen, las primeras elecciones libres y competitivas, en las que resultó elegido presidente el actual autócrata Alexander Lukashenko, fueron también las últimas.

Gráfico 1. *Historia de los regímenes políticos, 1972-2022.*



Fuente: V-Dem (2023)

En el caso de Nicaragua, la experiencia democrática fue más prolongada. Se inició en 1990, al frustrarse el intento reeleccionista del entonces y actual presidente, Daniel Ortega. Éste se encontraba desde 1979 al frente del régimen instalado por la Revolución sandinista, que se convirtió en una autocracia electoral tras los comicios de 1984. Cuando Ortega fue derrotado inesperadamente en las urnas por la líder de la oposición se produjo un hito sin precedentes: la alternancia pacífica. Pero el régimen retomó su deriva autoritaria en 2006, cuando Ortega logró recuperar el poder y

tomó las medidas necesarias para asegurar que no volvería a perderlo. Concentró el poder en su persona y convirtió al Estado en propiedad familiar. El espacio para el disenso se fue encogiendo cada vez más, hasta el giro trágico de 2018 que desde entonces ha hecho más que profundizarse. Esta situación plantea la interrogante de si nos encontramos actualmente frente a una autocracia cerrada.

El caso de Venezuela, por su parte, resulta atípico y particularmente trágico. El país, que se democratizó en 1958 tras el fin de una dictadura militar, fue una de las grandes excepciones durante la oleada de rupturas autoritarias que atravesó la región en los años sesenta y setenta. Fue tierra de acogida de innumerables exiliados de las dictaduras instaladas en el Cono Sur durante esas décadas, y recién en los tempranos 2000 comenzó a deslizarse hacia el autoritarismo. Se convirtió en una autocracia electoral bajo los liderazgos de Hugo Chávez y su sucesor, el actual presidente Nicolás Maduro.

Estos cuatro regímenes autoritarios tienen signos políticos variados, pero el denominador común es su forma de ejercer el poder, un poder que se concentra en la cúspide y no admite contradictores. Todos ellos han combatido el pluralismo político y constreñido el espacio que la sociedad civil necesita para operar, volviéndose tanto más restrictivos cuanto más amenazados se han sentido. En Egipto, el espacio cívico es catalogado como cerrado desde por lo menos 2018. Bielorrusia y Nicaragua permanecieron en la categoría de espacio cívico represivo hasta 2020; a partir de 2021 fueron rebajados a la categoría de espacio cívico cerrado, en ambos casos a causa de la dura reacción estatal frente al desafío de las calles. Venezuela, finalmen-

te, permanece en la categoría de espacio cívico represivo, pero con puntajes descendentes que la colocan al borde de ser degradada a la categoría más baja.

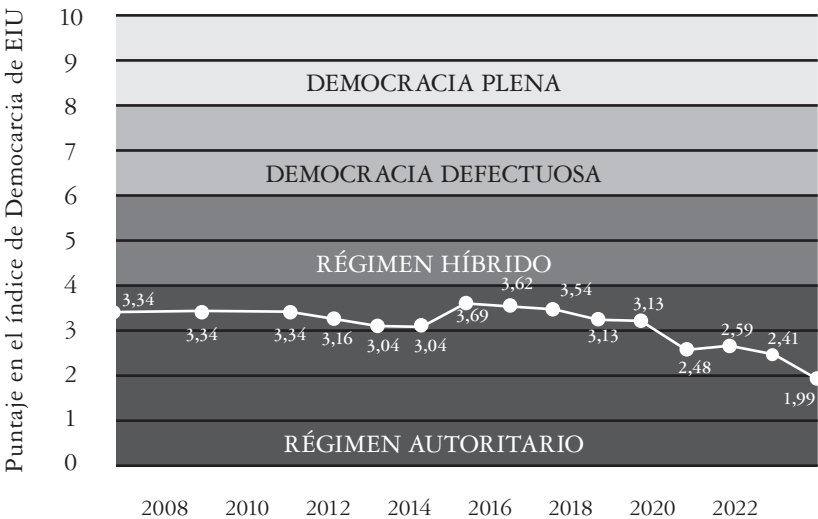
Estas tendencias se corroboran en el Índice de Libertad en el Mundo de Freedom House (2023), que computa las libertades cívicas y democráticas e incluye numerosas dimensiones adicionales, como el derecho de propiedad y la libertad religiosa. En este índice, los cuatro países son catalogados como «no libres»: Bielorrusia con 8 sobre 100 puntos, Venezuela con 15, Egipto con 18 y Nicaragua con 19. Cabe subrayar que de acuerdo con este análisis la magnitud del retroceso de la libertad experimentado por Nicaragua en la última década (32 puntos, 4 sólo en el último año) casi no tiene parangón a nivel global. También Venezuela (-24) y Egipto (-23) se destacan por haber experimentado retrocesos significativos. Únicamente Bielorrusia no resalta en este sentido, debido a que ya gozaba de poca libertad en el momento inicial, diez años atrás.

Bielorrusia: represión más allá de las fronteras

El origen del más reciente embate contra el espacio cívico en Bielorrusia se localiza en las elecciones presidenciales de 2020, las primeras en que Alexander Lukashenko, en el poder desde 1994, enfrentó un desafío real (CIVICUS Lens, 15 de marzo de 2023). La candidata rival, Sviatlana Tsikhanouskaya, se postuló luego de que su marido, el activista prodemocracia Sergei Tikhanovsky, fuera detenido para impedirle competir.

En respuesta a esta amenaza, Lukashenko detuvo a varios miembros del equipo de campaña de Tsikhanouskaya, a otros candidatos de la oposición y a periodistas; introdujo mayores restricciones para las protestas; restringió el acceso a internet y obstaculizó la observación electoral. Cuando eso no disuadió a muchos de votar en su contra, no dudó en recurrir al fraude. Esto desencadenó protestas de dimensiones inéditas que se sostuvieron largo tiempo pese a la represión sistemática y las detenciones masivas. Desde entonces, Lukashenko no ha hecho otra cosa que suprimir toda forma de activismo político y social para evitar que se convierta en una amenaza para su permanencia indefinida en el poder. En guerra con su propia sociedad, apoya su dominio en la alianza con un poderoso vecino autoritario, Vladimir Putin (CIVICUS Lens, 3 de marzo de 2022).

Gráfico 2. *Bielorrusia: régimen político, 2006-2022*



Fuente: The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2022.

Como documenta el CIVICUS Monitor (2022b), en los dos años que siguieron a esta ola de protestas, las autoridades han intimidado y criminalizado sin pausa a organizaciones y activistas de la sociedad civil, periodistas y medios independientes, caracterizándolos como extremistas y terroristas. En el caso de los medios de comunicación, las acusaciones han redundado en la prohibición de operar, como ocurrió con la Agencia de Prensa BelaPan y el canal de televisión Belsat, que habían informado sobre el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. Algo similar ocurrió con el medio digital TUT.BY: en un primer momento, su personal fue acusado de incitar al odio y se abrieron investigaciones en su contra, luego se le bloqueó el sitio web y por último se le prohibió seguir operando.

Según el Comité para la Protección de Periodistas, en 2022 dos periodistas fueron asesinados en Bielorrusia por motivos relacionados con su trabajo, y 26 se encontraban tras las rejas (The Committee to Protect Journalists [CPJ], 2023a).

La criminalización del activismo se apoyó en cambios legales que codificaron nuevos delitos para criminalizar a la sociedad civil. Por ejemplo, se ha tipificado como delito la organización de (o la participación en) actividades de organizaciones que hayan sido suspendidas o liquidadas por las autoridades o aún no hayan obtenido su registro, así como la recaudación de fondos para pagar las multas impuestas a quienes hayan sido procesados por infringir las leyes que prohíben las manifestaciones. Otras reformas legales han habilitado al Estado para perseguir y procesar a sus nacionales fuera del país y revocar la ciudadanía a los exiliados. Se trata de armas potentes dada la cantidad de

activistas, organizaciones y medios que han continuado su labor desde el exilio.

Asimismo, desde agosto de 2020 se vieron obligadas a cerrar 765 organizaciones de la sociedad civil: 448 liquidadas a la fuerza y 317 cerradas «voluntariamente» ante el acoso y las amenazas. Un caso resonante fue el de Ecodom, una de las organizaciones ambientales más antiguas de Bielorrusia, clausurada tras una inspección irregular que reveló supuestas infracciones.

Bielorrusia se ha convertido en un «Estado prisión» (CIVICUS Lens, 15 de marzo de 2023). Según el Centro de Derechos Humanos Viasna («Primavera»), los presos políticos actualmente ascienden a 1485 (datos de agosto de 2023), y muchos de ellos cumplen largas condenas (Viasna, agosto de 2023). Entre ellos se cuenta Ales Bialiatski, Premio Nobel de la Paz, sentenciado a diez años de prisión. Entre los presos hay quienes han sido condenados por delitos risibles como el de «insultar al presidente». Para evitar la cárcel, aún antes del cierre de su campaña Tsikhanouskaya debió pasar a la clandestinidad, y luego al exilio; ha sido condenada en ausencia a 15 años bajo acusaciones de traición y conspiración para tomar el poder. Su marido cumple una condena de 18 años de cárcel. Muchas otras personas se han visto obligadas a exiliarse, pero eso no garantiza que estén a salvo. En 2021, por ejemplo, el bloguero exiliado Roman Protasevich fue secuestrado cuando el avión en que viajaba entre Grecia y Lituania fue obligado a aterrizar en Minsk con el pretexto de una amenaza de bomba. Una vez allí fue arrestado y obligado a retractarse de su activismo (CIVICUS Lens, 13 de agosto de 2021).

Una activista de derechos humanos bielorrusa reconoce que esta batería de medidas represivas ha logrado paralizar a la sociedad civil dentro de su país, pero advierte que el activismo continúa en otras latitudes y por otros medios:

En estos momentos, el trabajo de activistas y organizaciones de la sociedad civil en Bielorrusia está prácticamente paralizado. Quienes permanecen en Bielorrusia e intentan seguir activos corren grandes riesgos. Activistas voluntarios que no son miembros de ninguna organización son detenidos y acusados administrativa e incluso penalmente por cualquier tipo de actividad, incluidos el envío de paquetes a presos políticos y la organización de reuniones de solidaridad, y son juzgados bajo acusaciones falsas, como las de reenviar «material extremista» encontrado en sus teléfonos o «desobedecer» a agentes de policía. (...)

Para seguir funcionando, la mayoría de las organizaciones de derechos humanos, incluida Viasna, se han visto obligadas a abandonar Bielorrusia y continuar su labor desde el extranjero. Casi todas las reuniones y consultas jurídicas con personas que han sido objeto de represión se hacen ahora en línea. Las secciones regionales de nuestra organización también han podido seguir trabajando desde el exterior, recopilando información sobre la represión en sus regiones a través de voluntarios locales que corren riesgos cada día, así como mediante técnicas de investigación de código abierto que debieron aprender rápidamente tras verse obligados a desplazarse. (...)

A pesar de la represión del disenso, Viasna y otras organizaciones de derechos humanos siguen documentando las violaciones de derechos humanos, que se producen a gran escala y a diario en Bielorrusia, para hacerlas visibles e intentar provocar una reacción de la comunidad internacional. (Vasilchuk, 22 de marzo de 2023)

Egipto: la revolución que no fue

El proceso de movilización que se desarrolló en Egipto en 2011 fue, en términos arendtianos, un auténtico milagro político: la ocurrencia de lo extremadamente improbable. La llamada «Primavera Árabe» fue un movimiento de masas sin precedentes que llegó a poner en jaque a regímenes autoritarios de larga data que, en contextos de oposiciones políticas débiles y desarticuladas, eran hasta entonces considerados impermeables a esa clase de desafíos.

Inicialmente se produjeron hechos notorios, incluidos los derrocamientos de los presidentes de Egipto y Túnez. Sin embargo, el proceso egipcio no llegó a producir avances democráticos, en contraste con la experiencia de Túnez, que sí logró superar los umbrales mínimos de la democracia electoral, aunque luego ésta fuera erosionada desde dentro por el presidente electo democráticamente hasta retroceder a lo que hoy es caracterizado como un régimen híbrido.

En Egipto, la ventana de oportunidad para el giro democrático se cerró rápidamente y el régimen autoritario volvió a consolidarse. Como subraya Engy Moussa más adelante en este volumen, se volvió incluso más resistente y competente para adelantarse al activismo, reprimirlo preventivamente y evitar la repetición de semejante desafío.

Tras acceder al poder mediante un golpe de Estado en 2013, Abdel Fattah al-Sisi fue juramentado como presidente en junio de 2014. Desde entonces colocó a los aparatos de seguridad e inteligencia en el centro del proceso político, monopolizó el poder ejecutivo, dominó los poderes legislativo y judicial y controló el proceso electoral. Ningún partido o candidato no oficialista puede ganar una elección. En 2018, en unas elecciones sin ninguna competencia destinadas a dar un barniz de legitimidad a su dominio, al-Sisi se alzó con el 97% de los votos (Davison y Tolba, 2 de abril de 2018). En virtud de enmiendas constitucionales aprobadas en 2019, su mandato fue alargado y el año próximo podrá aspirar a una «reelección».

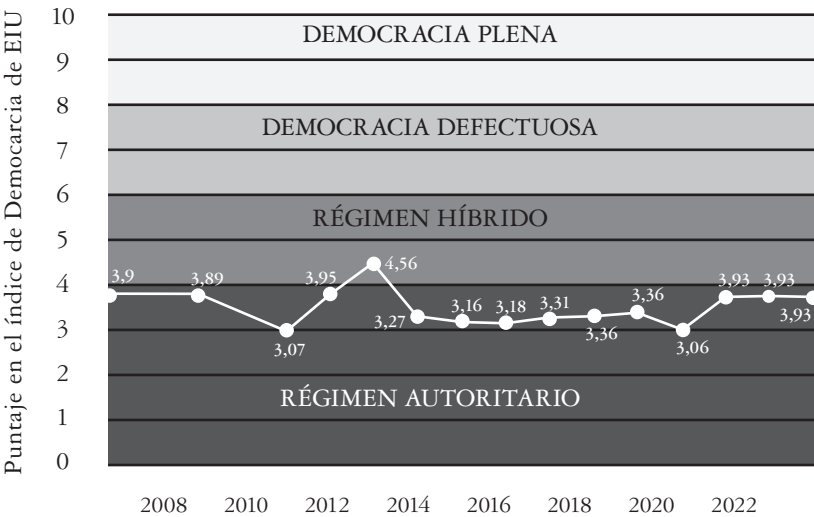
La estabilidad del régimen depende de su capacidad para borrar de la memoria colectiva el recuerdo de la libertad fugazmente experimentada en 2011. Una experiencia tan poderosa que, tras cuatro años de dictadura, Mohamed Zaree, un conocido activista de la sociedad civil que ha sido criminalizado y perseguido, sostenía que la revolución permanecía en estado latente pero que no había sido derrotada:

Es obvio que en Egipto hay una dictadura: no hay Estado de derecho, no hay una sociedad civil activa ni partidos políticos, y el espacio para la sociedad civil (espacio cívico) se está cerrando. Aunque haya una fachada de instituciones democráticas, incluido un parlamento, no hay democracia de ningún tipo. Las instituciones están controladas por el aparato de seguridad. Las elecciones al parlamento no han sido una competencia entre partidos políticos, sino entre aparatos de seguridad, por lo que los miembros del parlamento no

representan al pueblo sino a las fuerzas de seguridad. Esta situación se refleja en todas las leyes que se han promulgado recientemente, incluida la infame Ley de ONG. (...)

No me gustaría decir que la revolución democrática de 2011 ha sido derrotada, pero al menos debemos reconocer que ha sufrido un retroceso momentáneo. Pusimos grandes expectativas en la Revolución del 25 de enero, y nos dio cierta esperanza, que aún perdura. Pero técnicamente, de la revolución no ha quedado nada (...). Muchas personas que participaron en ella están ahora en la cárcel o en el exilio. Pero el 25 de enero de 2011 se dio un paso que es muy difícil de borrar, así que yo diría que la revolución está más bien en estado de hibernación. (Zaree, 30 de noviembre de 2017)

Gráfico 3. *Egipto: régimen político, 2006-2022*



Fuente: The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2022.

Con la explosión ciudadana de 2011 todavía en el espejo retrovisor, la libertad de reunión naturalmente fue el primer blanco del régimen. Ya en noviembre de 2013, una nueva ley sobre reuniones públicas concedió vía libre a las fuerzas de seguridad para prohibir las protestas y hacer un uso excesivo e incluso letal de la fuerza contra aquellas que se produjeran (Human Rights Watch [HRW], 26 de noviembre de 2013). De hecho, eso ya se venía haciendo con total impunidad: en agosto de 2013, el futuro presidente el-Sisi, entonces un general al mando de tropas, estuvo al frente de un operativo para dispersar una serie de sentadas de protesta en plazas públicas de la zona metropolitana de El Cairo que arrojó el saldo de al menos 817 personas asesinadas, si no muchas más (HRW, 12 de agosto de 2014). Hasta hoy nadie ha rendido cuentas por lo ocurrido.

De acuerdo con la ley vigente, los organizadores de manifestaciones deben informar a la policía de sus planes con al menos tres días de antelación, pero la autorización para manifestar puede ser denegada, y las concentraciones no autorizadas pueden ser dispersadas por la fuerza. Miles de manifestantes han sido detenidos desde la introducción de esta ley, y muchos han sido condenados, en algunos casos a la pena de muerte. Esta respuesta implacable ha logrado el cometido de reducir al mínimo las protestas.

Varios miles de activistas, líderes de organizaciones de la sociedad civil y opositores políticos han sido criminalizados y perseguidos. Han sido incluidos en listas de terroristas; sometidos a interminables investigaciones penales; detenidos arbitrariamente una y otra vez; mantenidos tras las rejas por años a espera de juicio, en condiciones deplorables; expuestos a interrogatorios coercitivos, malos tratos, torturas y denegación de

atención médica; condenados por tribunales irregulares bajo acusaciones como «insultar a las autoridades» o «difundir noticias falsas», por el simple hecho de expresar públicamente una opinión crítica. A muchos se les han congelado los activos o se les han impuesto diversas prohibiciones, por ejemplo, para ocupar cargos electivos, aspirar a empleos estatales o salir del país. Han sido frecuentes las represalias contra quienes colaboran con mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas (New York Times, 21 de septiembre de 2023).

Mona Seif, una activista egipcia que lidera una campaña por la liberación de su hermano, un prominente preso político, explica que esta formidable maquinaria represiva es «muy creativa a la hora de idear nuevas tácticas de represión y cambiarlas cuando es necesario»:

Por ejemplo, entre 2013 y 2015 el Gobierno desempolvó viejas leyes sobre reuniones públicas y las utilizó para aplastar las protestas. Desde 2015 se ha producido un fuerte aumento de las desapariciones forzadas: las personas simplemente son secuestradas y se las hace desaparecer, posiblemente manteniéndolas en un centro de detención militar. Seguimos sin tener suficiente información sobre estos lugares. Después hubo una oleada de procesamientos de manifestantes bajo acusaciones de terrorismo.

Desde 2019 hay cada vez más personas que son detenidas bajo la acusación de cometer delitos contra la seguridad del Estado, y las detenciones son renovadas una y otra vez sin que los detenidos sean llevados a los tribunales (...). «Reciclan» detenidos: los mantienen detenidos un tiempo, luego los liberan y luego los vuelven a detener con exactamente las mismas acusaciones, pero como es un nuevo caso, todo el proceso vuel-

ve a comenzar y les imponen un nuevo período de detención preventiva. (Seif, 5 de octubre de 2022)

La mayoría de los medios de comunicación independientes o críticos del régimen fueron cerrados tras el golpe de 2013. Los medios de comunicación privados están en manos de personas ligadas a los aparatos militares y de inteligencia, que a su vez integran un gran aparato de propaganda que difunde desinformación, promueve teorías conspirativas y motoriza campañas de desprestigio contra activistas de la sociedad civil y políticos opositores.

Así y todo, nuevas leyes sobre medios y ciberdelincuencia aprobadas en 2018 entregaron a las autoridades herramientas adicionales para censurar medios de comunicación y criminalizar la expresión invocando delitos vagamente definidos relativos a la moralidad, el orden público o la seguridad nacional. Han sido frecuentes las detenciones de activistas por sus publicaciones en redes sociales. Centenares de medios independientes en línea han sido bloqueados durante años, y sus trabajadores han experimentado intimidación y acoso, allanamientos de sus oficinas y detenciones arbitrarias. Solamente en 2022, el Comité para la Protección de los Periodistas documentó casos de 12 periodistas asesinados, 21 encarcelados y uno desaparecido (CPJ, 2023b).

Según Ahmed Samih, un activista egipcio en el exilio, «el Estado no puede aceptar la existencia de la sociedad civil». La «ideología de la clase militar gobernante» concibe a la sociedad como «inmadura e irresponsable» y, por tanto, «recurre a las leyes como herramienta para controlar a la sociedad, en lugar de limitarse a regularla» (Samih, 31 de agosto de 2022). En esa línea, una nueva ley de ONG apro-

bada en 2019 otorgó a las autoridades amplios poderes en materia de registro y disolución de las organizaciones de la sociedad civil, e impuso sobre éstas onerosos requisitos de información, sistemas de control intrusivos y severas sanciones por incumplimientos. Mediante combinaciones variadas de presiones legales y extralegales, centenares de organizaciones han sido intimidadas y obligadas a cerrar, como es el caso de la Red Árabe de Información sobre Derechos Humanos, que cesó sus operaciones en 2022 tras años de hostigamiento.

Al igual que en el caso de Bielorrusia, la salida del país no necesariamente supone el fin de la represión. Tal como lo destaca Mona Seif, ésta extiende sus tentáculos a través de las fronteras, buscando privar a la sociedad civil egipcia de lo que la activista llama su «principal salvavidas»: el apoyo internacional.

Cada vez es más difícil encontrar a alguien que hable en nuestro nombre. Las pocas organizaciones de la sociedad civil que siguen operando en el país, y sin duda las organizaciones internacionales con sede en el exterior, son los principales canales a través de los cuales las familias de los presos y otras personas en Egipto pueden expresar sus preocupaciones, pedir ayuda, intentar llamar la atención y presionar para que al menos se intenten paliar algunos de los abusos.

En los dos últimos años, hemos recurrido cada vez más no solamente a organizaciones internacionales en el extranjero, sino también a la diáspora egipcia. (...) Pero hay que tener en cuenta que el régimen también acosa a los egipcios que viven en el exterior, a menudo mediante represalias contra los familiares que permanecen en el país. Las em-

bajadas egipcias en algunos países, como Alemania, son cómplices de los servicios de seguridad del Estado. Envían gente para acosar a los activistas e informar sobre ellos, por lo que muchos temen participar públicamente en protestas pacíficas (Seif, 2022)

Nicaragua: democratización interrumpida

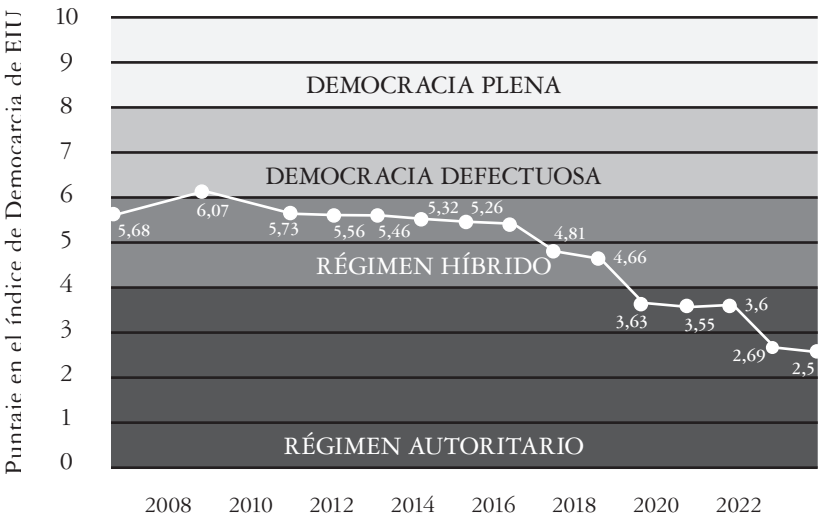
Silvio Prado, en este volumen, realiza un mapeo que evidencia que entre 1990 y 2006 la sociedad civil nicaragüense experimentó cambios tanto cuantitativos como cualitativos: creció en volumen y densidad organizativa y maduró en varias dimensiones, especialmente en lo que se refiere a su autonomía y formalización. Así, si bien la sociedad civil con la cual se encontró Daniel Ortega al asumir nuevamente el Gobierno en 2007 no estaba todavía fuertemente enraizada y consolidada, sí había dado pasos importantes en esa dirección. Se trataba de una presencia inconveniente para cualquiera que quisiera implantar un poder monolítico, por lo que el nuevo presidente buscó cooptarla para movilizarla en su favor y, en caso de no conseguirlo, dismantlarla para prevenir toda movilización en su contra.

Durante más de una década, la sociedad civil continuó movilizándose activamente a contrapelo de la voluntad gubernamental. En particular, se destacaron las movilizaciones del movimiento contra la construcción del faraónico proyecto del Canal Interoceánico; de pobladores locales contra explotaciones mineras; de comunidades indígenas de la Costa Caribe ante la invasión de tierras comunales y el

extractivismo; del movimiento feminista contra la violencia de género y por la restauración del aborto terapéutico, suprimido por el Gobierno de Ortega; y desde 2011 de la ciudadanía que comenzó a reclamar contra el fraude electoral y a demandar elecciones libres. La respuesta sistemática fue la prohibición de las protestas y su represión por las fuerzas de seguridad, aunada a la violencia de grupos civiles alineados con el partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Al igual que en los restantes casos analizados en este volumen, la regresión democrática y la represión del espacio cívico se aceleraron cuando el régimen se vio enfrentado a un desafío impensado. En el caso de Nicaragua, ello ocurrió en 2018.

Gráfico 4. Nicaragua: régimen político, 2006-2022



Fuente: The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2022.

En abril de 2018, escaso de petrodólares venezolanos, Ortega anunció cambios en el sistema de seguridad social que tendrían el efecto de aumentar las contribuciones y reducir las prestaciones. Esto desencadenó una ola de protestas. La propuesta pronto fue retirada, pero ya era demasiado tarde: los múltiples descontentos que habían confluído en las calles no se vieron disuadidos por la habitual demostración de poder de las fuerzas del Estado y los grupos progubernamentales armados. La violencia estatal que otras veces había logrado disolver las protestas esta vez no funcionó. Cuando las imágenes de la represión se difundieron en las redes sociales, más gente se unió a los manifestantes (CIVICUS Lens, 18 de noviembre de 2021).

En respuesta, el Estado redobló la represión, desatando una violencia excesiva, desproporcionada y sostenida. Para fines de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había documentado más de 300 muertes, luego rectificadas en 355, aunque fuentes de la sociedad civil estimaban cifras más cercanas a las 500 (Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 15 de noviembre de 2021). Los informes internacionales constataron que la represión seguía un patrón sistemático: la acción policial iba acompañada de intimidación y violencia por parte de grupos armados progubernamentales, la cual era a su vez alentada por una persistente propaganda que denigraba a los manifestantes. Centenares de personas, muchas de ellas estudiantes, fueron encarceladas bajo acusaciones de «terrorismo», «perjuicios al Estado», «asesinato», «crimen organizado», «robo» y «uso de armas restringidas», entre otros delitos graves. Más de 150 mil nicaragüenses huyeron al exilio, principalmente a la vecina Costa Rica.

La responsable para Nicaragua de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), Ana Lucía Álvarez, subraya que la represión solapada se prolongó mucho más que la represión abierta:

Tras la excarcelación, la persecución política no se termina: el hostigamiento sistemático de las fuerzas policiales y parapoliciales continúa. (...) Estas personas muchas veces no pueden salir de su casa porque hay una patrulla afuera, y cuando salen los siguen, consiguen los nombres de sus empleadores y también comienzan a hostigarlos.

La persecución se da a nivel barrial. El partido gobernante ha establecido diversas estructuras que utilizan para el control territorial mediante la vigilancia y la represión: los Consejos de Poder Ciudadano, los Gabinetes de la Familia y los Comités de Liderazgo Sandinista. Si eres una persona opositora o defensora de derechos humanos, siempre habrá algún vecino tuyo que está metido en alguna de esas estructuras e informa al régimen y a la policía de lo que haces, y luego comienzas a recibir persecución, hostigamiento, e incluso puede que detenciones arbitrarias.

El hostigamiento y la hipervigilancia provocan daños psicológicos no solamente en la persona perseguida sino también en su familia. Eso ha repercutido en el aumento de la emigración, que es un fenómeno dual, causado tanto por la persecución política como por la precarización social. (Álvarez, 19 de febrero de 2022)

En diciembre de 2020 se aprobó la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía

y la Autodeterminación para la Paz, que prohibía que los «traidores a la patria» —una expresión deliberadamente vaga— se presentaran como candidatos a elecciones. Otra ley aprobada en enero de 2021 permitió la imposición de penas de cadena perpetua por «delitos de odio» vagamente definidos. Se produjo una oleada de detenciones, y la solidaridad con los detenidos también fue criminalizada.

En 2020 se aprobaron otras dos leyes restrictivas: la Ley Especial de Ciberdelitos, que castiga con hasta 10 años de cárcel la publicación en línea de contenidos considerados «falsos» por el Gobierno, y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que bloquea el financiamiento internacional a grupos de sociedad civil, periodistas y opositores políticos. Muchas organizaciones que se negaron a registrarse como «agentes extranjeros» se vieron obligadas a cerrar.

Esto permitió al Gobierno disfrazar de legalidad sus ataques sistemáticos contra toda organización independiente. Entre abril de 2018 y abril de 2022, unas 200 organizaciones de la sociedad civil fueron clausuradas en medio de una persistente campaña de desprestigio. El Gobierno expropió y dio nuevo uso a las oficinas de las organizaciones dadas de baja. Esta tendencia se intensificó entre fines de 2021 y principios de 2022. Entre las organizaciones clausuradas entonces se contaron varias universidades —entre ellas la considerada el semillero del movimiento de protesta de 2018— y organizaciones vinculadas a la Iglesia católica, además de organizaciones de derechos humanos.

El proceso de concentración del poder que transformó a la incipiente democracia nicaragüense en una dictadura personal y al espacio cívico en un páramo totalitario

culminó en el burdo ritual electoral escenificado en noviembre de 2021, tras el cual Ortega se proclamó vencedor con el 76% de los votos. En la última elección que había ganado limpiamente, la de 2006, había arañado el 38%; en cada elección producida desde entonces se había adjudicado cifras cada vez más infladas, logradas a través de un fraude cada vez más evidente.

La represión continuó tras las elecciones, presumiblemente para impedir que se alzarán voces en denuncia del fraude (CIVICUS Lens, 1 de septiembre de 2022). María Teresa Blandón, directora del Programa Feminista La Corriente, una de las tantas organizaciones clausuradas, da cuenta de este fenómeno:

El régimen había pensado que una vez consumado el fraude electoral y con la oposición en la cárcel, ésta abdicaría de su rol y el régimen obtendría el aval de la comunidad internacional.

Pero ninguna de las dos cosas ocurrió: ni la oposición se resignó ni hubo apoyo internacional, sino todo lo contrario: el aislamiento del régimen se profundizó. La oposición nicaragüense mantuvo y mantiene una constante denuncia ante la instalación de un estado policial de facto y reclama la salida del régimen por vías cívicas. Las organizaciones de la sociedad civil que lograron mantenerse en el país continuaron denunciando las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la represión; de ahí la aprobación de nuevas leyes para despojarlas de su personería jurídica y de sus bienes.

Ante la falta de legitimidad, el régimen Ortega-Murillo ha profundizado su estrategia de aniquilación de toda forma de

organización de la ciudadanía que no se subordine a sus intereses. (Blandón, 29 de agosto de 2022)

Durante años, unos 200 presos políticos languidecieron tras las rejas. La mayoría fueron condenados a largas penas de prisión cuando, a principios de 2022, se reanudaron unos «juicios exprés» plagados de irregularidades. Sin garantías procesales, los acusados fueron a menudo sometidos a tortura y a otras formas de malos tratos durante su encarcelamiento (CIVICUS Lens, 2022b).

En mayo de 2022 entró en vigor una nueva Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro que prohibió a las OSC participar en forma directa o indirecta en actividades políticas, «violentar el orden público» y promover «campañas de desestabilización». Les dificultó el registro, las obligó a solicitar la aprobación del Gobierno para realizar sus actividades y les impuso requisitos excesivos de reporte.

La nueva ley se aplicó en oleadas, cada una de las cuales acabó con centenares de organizaciones, incluidas organizaciones dedicadas al desarrollo urbano y municipal, asociaciones empresariales y profesionales, grupos de promoción de los derechos de la infancia y de jóvenes, y organizaciones ecologistas y feministas. A la fecha han sido cerrados más de 3000 organizaciones y 55 medios de comunicación.

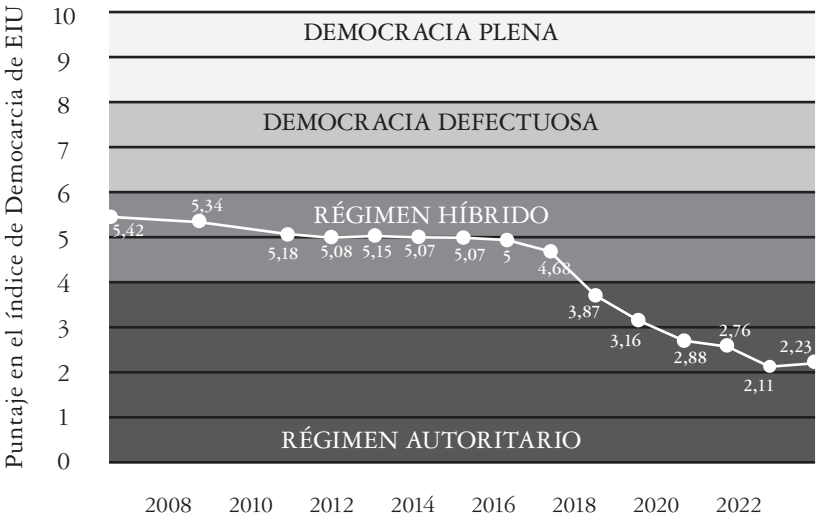
Venezuela: muerte
de una democracia consolidada

La trayectoria de Venezuela es bien sintetizada por Isabella Picón, en este volumen. Solía ser una democracia fuerte,

pero la polarización social y la incapacidad del sistema de partidos para ofrecer respuestas para superarla la transformaron, desde los inicios del gobierno de Hugo Chávez, en una democracia delegativa (O'Donnell, 1994). A partir de 2006 ésta mutó en autocracia electoral. La autora considera, sin embargo, que desde 2017 el régimen ya no pertenece a esta categoría, sino que ha continuado involucionando hacia la de «autocracia cerrada».

Como se observa en el Gráfico 5, en 2017 efectivamente hubo un punto de quiebre, que en la conceptualización de la EIU transformó a Venezuela de régimen híbrido en régimen autoritario. Al igual que en los otros casos analizados, también aquí el punto de inflexión fue el desafío callejero al poder gubernamental.

Gráfico 5. *Venezuela: régimen político, 2006-2022*



Fuente: The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2022.

La ola de protestas comenzó en marzo de 2017, en rechazo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno, de despojar de competencias a la Asamblea Nacional. Ésta, de mayoría opositora, fue considerada en “desacato” por haber incorporado a tres diputados electos cuya investidura había sido impugnada. En otras palabras, Venezuela se había quedado sin Poder Legislativo (Castro, 30 de marzo de 2017). Las manifestaciones en reclamo de la restauración del orden constitucional y democrático en el país se extendieron durante dos meses y se intensificaron ante la emisión de un decreto presidencial de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que podría resultar en la disolución de la Asamblea Nacional.

La movilización recibió una respuesta represiva que se tradujo en por lo menos 36 muertos (cuatro de ellos adolescentes) y 757 heridos por armas de fuego o por el uso excesivo de armas menos letales como gases lacrimógenos y perdigones. Asimismo, hacia el mes de mayo se habían registrado cerca de 2000 personas detenidas, centenares de las cuales continuaban privadas de libertad. Se denunciaron torturas y malos tratos bajo custodia, así como violaciones a las garantías y la protección judiciales, incluyendo el procesamiento de civiles bajo la jurisdicción penal militar. Como parte del proceso represivo, los manifestantes fueron sistemáticamente estigmatizados como «terroristas» o «insurgentes armados» por los medios de comunicación dominados por el régimen. Se reportaron, asimismo, numerosos ataques y detenciones arbitrarias de periodistas y casos de censura a medios de comunicación (CIDH, 9 de mayo de 2017).

La represión del disenso se ha sostenido desde entonces, combinándose con el colapso económico para generar una ola migratoria de dimensiones sin precedentes en la región.

La crisis humanitaria compleja que enfrenta Venezuela no hizo más que complicar la situación de la sociedad civil, como explica Feliciano Reyna, fundador y presidente de la organización Acción Solidaria:

El entorno para la sociedad civil sigue siendo de alto riesgo. El año pasado tuvimos un allanamiento de las Fuerzas de Acciones Especiales, el comando más temible de la Policía Nacional Bolivariana. Lo que nos hicieron no fue un operativo oficial sino una acción delictiva. La sociedad civil que hace incidencia en derechos humanos es objeto de criminalización, y la sociedad civil que trabaja en acción humanitaria enfrenta graves problemas de acceso, es extorsionada por estos grupos autónomos y por actores paraestatales. Nos hemos convertido en blanco no porque seamos opositores o disidentes, sino porque tenemos recursos codiciados.

De hecho, tenemos a un compañero preso hace 160 días y otros cinco compañeros de una organización que trabaja junto con la Agencia de la ONU para los Refugiados que estuvieron presos un mes en una instalación militar. (Reyna, 20 de diciembre de 2021)

Cada mes, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registra centenares de protestas pacíficas, las cuales son reprimidas con frecuencia.

Los otrora pujantes medios de comunicación venezolanos han quedado reducidos a su mínima expresión: de los

121 periódicos impresos que existían en 2013, para 2021 quedaban apenas 22. En comparación, la infraestructura mediática controlada por el Estado, y en forma personal por algunos funcionarios del partido de Gobierno, es cada vez más formidable.

Solamente entre octubre de 2022 y abril de 2023 se cerraron 80 emisoras de radio y el ente regulador de las comunicaciones bloqueó varios portales de noticias, lo que elevó el número de páginas inaccesibles a unas 60 (CIVICUS Monitor, 12 de junio de 2023).

Durante 2022, la organización de la sociedad civil Espacio Público registró un total de 227 casos de violaciones de la libertad de expresión que se tradujeron en 468 denuncias. Estas incluyeron 17 detenciones arbitrarias —11 de ellas vinculadas con la Ley contra el Odio de 2017—, 199 denuncias de censura y numerosas restricciones administrativas e intimidaciones a periodistas (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos [Provea], 4 de mayo de 2023). A lo largo de 2021, el Gobierno hizo más de 860 mil solicitudes de interceptación telefónica a la empresa de telecomunicaciones, las cuales afectaron a más de 1,5 millones de números de teléfono (Freedom House, 2023). Se han registrado numerosos casos de usuarios de redes sociales amenazados, detenidos e incluso condenados por opiniones vertidas online.

Según un monitoreo del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) realizado en 2021, la estigmatización de activistas y organizaciones como «enemigos internos», «mercenarios» y «traidores a la patria» es uno de los ataques más usuales contra la sociedad civil, y contribuye a crear un clima de opinión que legitima otras restricciones y habilita

ulteriores ataques (CDJ, 2022). Otras restricciones del espacio cívico registradas ese año fueron, en orden de importancia, la intimidación y el hostigamiento, las amenazas, las detenciones arbitrarias, la judicialización o criminalización, los ataques digitales y los allanamientos.

En 2021, una resolución de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo obligó a las organizaciones de la sociedad civil a inscribirse en un registro y a proporcionar información detallada sobre sus integrantes y actividades. La mayoría se negó a hacerlo y denunció la iniciativa como un intento de asimilar su accionar legítimo a actividades ilegales y repudiables.

En mayo de 2022 se propuso en la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de Cooperación Internacional que redefiniría la operación de la cooperación internacional en el país, con la consecuencia —según denunciaron fuentes de la sociedad civil— de criminalizar a las organizaciones que reciben fondos extranjeros (Calderón, 3 de junio de 2022).

Asimismo, en enero de 2023 la Asamblea Nacional aprobó en primera lectura el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, que buscaba imponer requisitos adicionales y onerosos para la creación y el mantenimiento de organizaciones y podría usarse para controlarlas, restringirlas y, potencialmente, criminalizarlas y clausurarlas. La iniciativa fue presentada por Diosdado Cabello, legislador y vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, poco después de acusar a algunas organizaciones de la sociedad civil de «conspirar contra el país» (CIVICUS Monitor, 21 de febrero de 2023). En la antesala de las elecciones presi-

denciales programadas para 2024, la represión del espacio cívico no cede, y es de preverse que la presión continúe aumentando.

Conclusión esperanzada

Los análisis que ofrece este volumen permiten abrigar esperanzas. Los cuatro casos estudiados se enfocan en contextos en que la acción de la sociedad civil es tan imprescindible como aparentemente imposible. Algunos de los desafíos que enfrenta, derivados del carácter autoritario del régimen político, son comunes a todos ellos. Se destacan especialmente los altos costos del activismo, que aumentan a la par de la intensidad de la represión.

En tales contextos, se vuelve difícil imaginar la emergencia de actores capaces de impulsar un cambio. Desde dentro de la implacable lógica autoritaria, la salida democrática parece simplemente impensable. Sin embargo, el milagro no es ajeno a la vida política: lo infinitamente improbable ocurre más a menudo de lo que cabría esperar.

De hecho, varias historias relatadas en estas páginas comienzan con la ocurrencia de lo inesperado: acontecimientos disruptivos de la lógica del sistema, desde cuya perspectiva eran imposibles, aun cuando la narrativa retrospectiva los convierta en inevitables.

Una vez que lo aparentemente imposible ha efectivamente ocurrido, sus huellas son indelebles. Así lo destaca Alexander Lukashuk para el caso de Bielorrusia, concluyendo sabiamente que la proyección hacia el futuro de la memoria de la acción pasada no es más que cuestión de tiempo. Los ensayos fallidos no son en vano: cuando

irrumpe por primera vez, la acción sólo puede sostenerse en sí misma. Los segundos intentos, en cambio, se producen en la estela de la memoria de una acción colectiva que es posible reactivar.

No es tarea fácil, y así lo destacan todos los activistas consultados. Pero nadie se convierte en activista porque quiera tomar la vía fácil. La sociedad civil se especializa en la resolución de problemas difíciles y, como lo expresa aquel dicho, lo difícil lo suele resolver bastante rápido. Es lo imposible lo que le lleva un poco más de tiempo.

REFERENCIAS

- Álvarez, A. L. (19 de febrero de 2022). “Nicaragua: El caso de María Esperanza es parte de un proceso creciente de criminalización de la protesta social”, entrevista con CIVICUS.
- Blandón, M. T. (29 de agosto de 2022). “Nicaragua: El régimen busca aniquilar toda organización autónoma de la ciudadanía”, entrevista con CIVICUS.
- Calderón, D. (3 de junio de 2022). Ley de cooperación internacional en Venezuela. Derechos Digitales.
- Castro, M. (30 de marzo de 2017). El Supremo venezolano deja sin competencias a la Asamblea Nacional, en manos de la oposición. El País.
- Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ). (2022). Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela 2021.
- CIVICUS (2023). Informe sobre el estado de la sociedad civil 2023.
- CIVICUS Lens (13 de agosto de 2021). Belarus goes after its exiles.
- CIVICUS Lens (18 de noviembre de 2021). Nicaragua: el rey está desnudo y todo el mundo lo sabe.
- CIVICUS Lens (3 de marzo de 2022). Belarus: ceremonial referéndum confirms Putin’s power.

CIVICUS Lens (1 de septiembre de 2022). La represión en Nicaragua: ¿manotazos de ahogado de un régimen asediado?

CIVICUS Lens (15 de febrero de 2023). ¿Venezuela: el fin de la sociedad civil tal como la conocemos?

CIVICUS Lens (20 de febrero de 2023). Nicaragua: una oportunidad para la solidaridad democrática.

CIVICUS Lens (15 de marzo de 2023). Belarus: a prison state in Europe.

CIVICUS Lens (25 de abril de 2023). Nicaragua: a cinco años de las protestas de abril.

CIVICUS Monitor (2022a). Balance global del derecho a la protesta, octubre 2021-septiembre 2022.

CIVICUS Monitor (2022b). Country brief: Belarus. Overview of recent restrictions to civic freedoms.

CIVICUS Monitor (21 de febrero de 2022). Venezuela: la draconiana ley de ONG amenaza a las organizaciones de la sociedad civil.

CIVICUS Monitor (2023a). CIVICUS Monitor country scores and ratings. Methodology Paper.

CIVICUS Monitor (2023b). Poder Ciudadano bajo ataque 2022.

CIVICUS Monitor (12 de junio de 2023). El Estado prosigue su represión de la sociedad civil.

Coda (27 de julio de 2021). Putin's playbook: Strongmen around the world are using Russian tactics to quell dissent.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (15 de noviembre de 2021). CIDH actualiza registro de víctimas fatales en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada en abril de 2018 en Nicaragua.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

- (9 de mayo de 2017). CIDH deplora medidas represivas adoptadas por Venezuela frente a protestas y condena la secuela de muertes y heridos.
- Committee to Protect Journalists (CPJ). (2023a). Belarus.
- Committee to Protect Journalists (CPJ). (2023b). Egypt.
- Davison, J. y Tolba, A. (2 de abril de 2018). Egypt's Sisi wins 97 percent in election with no real opposition. Reuters.
- EIU (Economist Intelligence Unit). (2023). Democracy Index 2022. Frontline Democracy and the battle for Ukraine. The Economist.
- Freedom House. (2023). Freedom in the World 2023. Marking 50 Years in the Struggle for Democracy.
- Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms. Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. MIT Press.
- Hossain, N. y Hallock, J. (2022). Food, Energy & Cost of Living Protests. Fundación Friedrich Ebert.
- Human Rights Watch (HRW). (26 de noviembre de 2013). Egypt: Deeply Restrictive New Assembly Law.
- Human Rights Watch (HRW). (12 de agosto de 2014). All According to Plan. The Rab'á Massacre and Mass Killings of Protesters in Egypt.
- Huntington, S.P. (1994). La tercera ola: la democratización a finales del siglo XX. Paidós.
- New York Times (21 de septiembre de 2023). Egypt's Revolving Jailhouse Door: One Petrial Detention After Another.
- O'Donnell, G. (1994). Delegative Democracy. *Journal of Democracy*, 5(1), 55-69.
- Pousadela, I.M. y Perera, D.R. (2021). The Enemy Within? Anti-Rights Groups and Restrictions on Civil Society. *Global Policy*, 2(S5), 34-44.

- Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea). (4 de mayo de 2023). Espacio Público denuncia 468 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela durante el 2022.
- Ramírez, M. M. (2 de junio de 2022). “Cuba: Todas las tácticas que utiliza el activismo han sido transformadas en delitos”, entrevista con CIVICUS.
- Reyna, F. (20 de diciembre de 2021). “Venezuela: Necesitamos de la comunidad internacional un enfoque multilateral, flexible, y creativo”, entrevista con CIVICUS.
- Samih, A. (31 de agosto de 2022). “Egypt: The president is desperate for international attention ahead of 2024 election”, entrevista con CIVICUS.
- Seif, M. (5 de octubre de 2022). “Egypt: We are dealing with an extremely elaborate, very creative repressive machinery”, entrevista con CIVICUS.
- Transnational Institute. (TNI). (2017). On «shrinking space». A framing paper.
- Vasilchuk, A. (22 de marzo de 2023). “Belarus: There is a pro-democracy civil society that opposes the war and advocates for democratic reforms”, entrevista con CIVICUS.
- V-Dem Institute. (2023). Democracy Report 2023. Defiance in the Face of Autocratization.
- Viasna. Human Rights Center (agosto de 2023). As of August 8 1485 persons in Belarus are considered as political prisoners.
- Zaree, M. (30 de noviembre de 2017). “Egypt: The democratic revolution is currently in hibernation”, entrevista con CIVICUS.

ANEXO

Régimen político y espacio cívico

	Régimen político (2022)	Puntaje EIU (/10)	Espacio cívico (julio 2023)	Puntaje CIVICUS Monitor (/100)
Noruega	democracia plena	9.81	abierto	95
Nueva Zelanda	democracia plena	9.61	abierto	89
Islandia	democracia plena	9.52	abierto	87
Suecia	democracia plena	9.39	abierto	87
Finlandia	democracia plena	9.29	abierto	91
Dinamarca	democracia plena	9.28	abierto	90
Suiza	democracia plena	9.14	abierto	85
Irlanda	democracia plena	9.13	abierto	84
Países Bajos	democracia plena	9.00	abierto	87
Taiwán	democracia plena	8.99	abierto	81
Uruguay	democracia plena	8.91	abierto	81
Canadá	democracia plena	8.88	abierto	84
Luxemburgo	democracia plena	8.81	abierto	84
Alemania	democracia plena	8.80	abierto	86
Australia	democracia plena	8.71	estrecho	72
Japón	democracia plena	8.33	estrecho	75
Reino Unido	democracia plena	8.28	obstruido	60
Chile	democracia plena	8.22	estrecho	66
Austria	democracia plena	8.20	abierto	83
Mauricio	democracia plena	8.14	estrecho	72
Francia	democracia plena	8.07	estrecho	74
España	democracia plena	8.07	estrecho	74
Corea del Sur	democracia plena	8.03	estrecho	75
Rep. Checa	democracia defectuosa	7.97	abierto	86
Grecia	democracia defectuosa	7.97	obstruido	52

Estonia	democracia defectuosa	7.96	abierto	94
Portugal	democracia defectuosa	7.95	abierto	82
Israel	democracia defectuosa	7.93	obstruido	49
Estados Unidos	democracia defectuosa	7.85	estrecho	70
Eslovenia	democracia defectuosa	7.75	estrecho	63
Botsuana	democracia defectuosa	7.73	obstruido	58
Malta	democracia defectuosa	7.70	estrecho	74
Italia	democracia defectuosa	7.69	estrecho	76
Cabo Verde	democracia defectuosa	7.65	abierto	85
Bélgica	democracia defectuosa	7.64	estrecho	80
Chipre	democracia defectuosa	7.38	estrecho	72
Letonia	democracia defectuosa	7.37	abierto	89
Lituania	democracia defectuosa	7.31	abierto	85
Malasia	democracia defectuosa	7.30	obstruido	47
Trinidad y Tobago	democracia defectuosa	7.16	estrecho	73
Jamaica	democracia defectuosa	7.13	estrecho	80
Eslovaquia	democracia defectuosa	7.07	estrecho	77
Timor Leste	democracia defectuosa	7.06	obstruido	56
Sudáfrica	democracia defectuosa	7.05	obstruido	58
India	democracia defectuosa	7.04	represivo	31
Polonia	democracia defectuosa	7.04	obstruido	51
Surinam	democracia defectuosa	6.95	estrecho	79
Panamá	democracia defectuosa	6.91	estrecho	67
Argentina	democracia defectuosa	6.85	estrecho	69
Brasil	democracia defectuosa	6.78	obstruido	47
Filipinas	democracia defectuosa	6.73	represivo	34
Colombia	democracia defectuosa	6.72	represivo	33
Indonesia	democracia defectuosa	6.71	obstruido	46
Tailandia	democracia defectuosa	6.67	represivo	28
Hungría	democracia defectuosa	6.64	obstruido	49

Bulgaria	democracia defectuosa	6.53	estrecho	71
Namibia	democracia defectuosa	6.52	estrecho	75
Croacia	democracia defectuosa	6.50	estrecho	72
Sri Lanka	democracia defectuosa	6.47	obstruido	41
Montenegro	democracia defectuosa	6.45	estrecho	71
Rumania	democracia defectuosa	6.45	estrecho	64
Ghana	democracia defectuosa	6.43	obstruido	60
Albania	democracia defectuosa	6.41	estrecho	67
Rep. Dominicana	democracia defectuosa	6.39	estrecho	78
Mongolia	democracia defectuosa	6.35	estrecho	61
Guyana	democracia defectuosa	6.34	estrecho	76
Serbia	democracia defectuosa	6.33	obstruido	50
Moldavia	democracia defectuosa	6.23	estrecho	79
Singapur	democracia defectuosa	6.22	represivo	31
Lesoto	democracia defectuosa	6.19	represivo	39
Macedonia del Norte	democracia defectuosa	6.10	estrecho	73
Bangladesh	régimen híbrido	5.99	represivo	27
Papúa Nueva Guinea	régimen híbrido	5.97	obstruido	60
Perú	régimen híbrido	5.92	obstruido	51
Malaui	régimen híbrido	5.91	obstruido	52
Paraguay	régimen híbrido	5.89	obstruido	51
Zambia	régimen híbrido	5.80	obstruido	46
Senegal	régimen híbrido	5.72	obstruido	47
Madagascar	régimen híbrido	5.70	represivo	40
Ecuador	régimen híbrido	5.69	obstruido	57
Armenia	régimen híbrido	5.63	estrecho	70
Fiyi	régimen híbrido	5.55	obstruido	60
Bután	régimen híbrido	5.54	obstruido	59
Túnez	régimen híbrido	5.51	represivo	40
Liberia	régimen híbrido	5.43	obstruido	59

Ucrania	régimen híbrido	5.42	obstruido	45
Hong Kong	régimen híbrido	5.28	cerrado	15
México	régimen híbrido	5.25	represivo	38
Georgia	régimen híbrido	5.20	estrecho	68
Honduras	régimen híbrido	5.15	represivo	37
Tanzania	régimen híbrido	5.10	represivo	34
El Salvador	régimen híbrido	5.06	obstruido	47
Kenia	régimen híbrido	5.05	obstruido	49
Marruecos	régimen híbrido	5.04	obstruido	41
Sierra Leona	régimen híbrido	5.03	obstruido	46
Bosnia y Herzegovina	régimen híbrido	5.00	estrecho	64
Guatemala	régimen híbrido	4.68	represivo	40
Uganda	régimen híbrido	4.55	represivo	28
Bolivia	régimen híbrido	4.51	obstruido	44
Nepal	régimen híbrido	4.49	obstruido	46
Gambia	régimen híbrido	4.47	obstruido	58
Turquía	régimen híbrido	4.35	represivo	29
Benín	régimen híbrido	4.28	represivo	40
Nigeria	régimen híbrido	4.23	represivo	35
Costa de Marfil	régimen híbrido	4.22	obstruido	53
Paquistán	régimen híbrido	4.13	represivo	30
Mauritania	régimen híbrido	4.03	represivo	36
Angola	régimen autoritario	3.96	represivo	39
Palestina	régimen autoritario	3.86	represivo	23
Kuwait	régimen autoritario	3.83	represivo	38
Níger	régimen autoritario	3.73	represivo	36
Argelia	régimen autoritario	3.66	represivo	32
Qatar	régimen autoritario	3.65	represivo	25
Líbano	régimen autoritario	3.64	obstruido	47
Kirguistán	régimen autoritario	3.62	obstruido	45

Mozambique	régimen autoritario	3.51	represivo	38
Gabón	régimen autoritario	3.40	represivo	38
Mali	régimen autoritario	3.23	represivo	40
Comoros	régimen autoritario	3.20	obstruido	47
Camboya	régimen autoritario	3.18	represivo	27
Etiopía	régimen autoritario	3.17	represivo	29
Jordania	régimen autoritario	3.17	represivo	36
Irak	régimen autoritario	3.13	cerrado	18
Omán	régimen autoritario	3.12	represivo	23
Ruanda	régimen autoritario	3.10	represivo	24
Burkina Faso	régimen autoritario	3.08	obstruido	47
Kazajistán	régimen autoritario	3.08	represivo	35
Esuatini	régimen autoritario	3.01	represivo	22
Togo	régimen autoritario	2.99	represivo	38
Egipto	régimen autoritario	2.93	cerrado	19
Zimbabue	régimen autoritario	2.92	represivo	35
Emiratos Árabes Unidos	régimen autoritario	2.90	cerrado	17
Azerbaiyán	régimen autoritario	2.87	cerrado	20
Haití	régimen autoritario	2.81	represivo	40
Congo	régimen autoritario	2.79	represivo	29
Djibouti	régimen autoritario	2.74	cerrado	18
Vietnam	régimen autoritario	2.73	cerrado	18
Cuba	régimen autoritario	2.65	cerrado	17
Camerún	régimen autoritario	2.56	represivo	31
Guinea Bissau	régimen autoritario	2.56	obstruido	46
Bahréin	régimen autoritario	2.52	cerrado	15
Nicaragua	régimen autoritario	2.50	cerrado	15
Sudán	régimen autoritario	2.47	represivo	21
Guinea	régimen autoritario	2.32	represivo	27
Rusia	régimen autoritario	2.28	cerrado	17

BELARUS CIVIL SOCIETY: SECRET ORCHARD OR MIRAGE IN A DESERT?

Alexander Lukashuk¹

Belarus is a tropical orchard of flourishing civil society: there are three thousand public associations and 25 trade unions, media and religious, political, and ecological foundations, unions, and movements. If their activists, members, and involved citizens are put together, the count will go several times over the country's population of 9.4 million; the government website even specifies that it is only

¹ Belarusian media manager, journalist, and author who most recently served as director of the Belarus service for Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL). He also worked as director of the RFE/RL Afghan service from 2004 to 2005 and as acting executive editor of RFE/RL from 2007 to 2008. He has produced documentaries and published books on the history of Belarus, including the 2017 book *Oswald in Minsk*. Mr. Lukashuk's work has received multiple awards, including the 2017 Ales Adamovich Award from the Belarusian PEN Center, the U.S. Agency for Global Media's David Burk Award for Distinguished Journalism in 2011, and the 2014 Communicator Award from the U.S. Academy of Interactive and Visual Arts. His English-language writings have appeared in *American Purpose*, the *Hoover Digest*, and in the *East European Constitutional Review*.

registered organizations with bank accounts, offices, and statutes. According to the democratic opposition, United Nations Human Rights rapporteur, and the United States Department of State human rights report, the geographical coordinates of the Belarus civic society lie instead in the desert zones of Sahara, Gobi, and La Guajira.

Both views are correct; only one reflects the situation before August 2020 and another after, after the latest presidential election. The main question begging the answer, however, is about the future — what kind of civil society can develop in Belarus after the change of political power?

Free and fair presidential elections in Belarus happened only once, in 1994 when Alexander Lukashenka was elected the first president of independent Belarus. Very quickly, “the first” turned into “the only.” In 1995, the parliamentary opposition was beaten by security forces inside the parliament (many compared this attack on the parliamentarians with the Reichstag fire in Germany, the infamous arson a month after Hitler came to power in 1933; later the same 1995 year, the new president of Belarus explained that “It took centuries to form the German order. Under Hitler, this formation reached its highest point. This corresponds with our understanding of a presidential republic and the role of a president in it (Koktysh, 1995).”

By the end of 1996, Belarus’s constitution and electoral laws were changed. The electoral commission and courts were emasculated, and state media became a propaganda machine to keep Lukashenko in power. Anti-Western stance dominated the foreign policy; Russia eagerly supported its staunchest ally; Hugo Chavez became the best friend and visited Minsk; Venezuelan oil started coming

to Belarus, trade agreements with Cuba and lately with Nicaragua were signed, and China became Belarus's closest neighbor.

The authoritarian consolidation was completed in the early 2000s, and most of the population reluctantly accepted the status quo. Heroic opposition leaders did not get new followers after serving time in prison; police and security forces with the KGB grew more prominent than the army. Political disappearances (euphemisms for kidnappings and the killing of key opposition figures) were limited but enough to force some into exile and hush many others (though not all). The youth seemed to be almost entirely co-opted into the authoritarian system. The government successfully played Belarus's geopolitical position between the West and East, and its permanent grip on power seemed a forgone conclusion.

2020 saw the dramatic end of this consolidation. Although no presidential election after the first one was recognized as free and fair by OSCE and was every time followed by protests and international sanctions, the sixth presidential election ended in a way unseen before. The opposition candidate, supported by millions of people, had won. The sheer scale, from small yard gatherings to a quarter of a million street marches, the inclusive participation from students to three-generational families, and the mere persistence of mass protests were unprecedented and dubbed "revolution." In a short time, out of the three foundations of Belarus's stability, as viewed in terms of the authoritarian consolidation theory, two, cooptation and legitimation, were completely gone, and only repression was available to restore power grip (Bedford, 2021).

However, it was not only the protest against electoral fraud—it was a clearly expressed manifestation of different values: self-organization, effective communication on social media platforms, peaceful character, dignity, respect, and solidarity, choice of historic national symbols (white-red-white flag and a coat of arms with a knight on a horse instead of the Soviet-style official symbols), chanting in Belarusian, no anti-Russian or anti-Western slogans, participation of whole families, singing, sometimes overdone respect for rules and public order (protesters would wait for the green light to cross the street or would take off their shoes to stand on public benches —traits of the national character viewed with amazement by some more passionate neighbors).

These traits can be described as traditional Belarusian values supported by the independent civil society. One can argue that while the mass protests were triggered by electoral fraud, their primary condition and reason was the rise of civil activism.

Before the 2020 revolution

There is understandable impatience and traumas after waves of repressions when some activists declare the death of civil society in Belarus and deny its existence and role. It's important to differentiate that it was opposition political, not civil leaders, who usually made such declarations. Civil activists saw and experienced the situation differently; political scientists explained this paradox in the framework of “a depoliticized cooptation mode.” (Astapova et al., 2022). An authoritarian regime controls the power of civil

society and transforms it from a threat into a resource; the ways of doing it depend on the severity of the authoritarianism, but it's always about control, and the red line is always the same—direct political participation. Civil society is tolerated as long as it stays clear of the political agenda.

Of course, the demarcation line was always open for interpretation. When Stalin's mass grave Kurapaty in Minsk was discovered during the last years of the Soviet Union, it became a symbol of totalitarianism and a gathering point for the democratic opposition. It has been a permanent battleground for its defenders, local dwellers, and the government—sometimes its civil defenders were fined, arrested, and memorial crosses vandalized; sometimes, the opposition could conduct their mass rallies there without interference, foreign dignitaries and diplomats would include visits there in their official agenda. Apart from history, another contested field was the national culture and the Belarusian language. After two centuries of severe "Russification", Belarusian was hardly spoken in cities; there was no university education in the national language, and few schools were taught in Belarusian. Revival of the language was always barely tolerated by the authorities because its supporters were from the Democratic camp. However, it reached its highest point in 2020 due to civil society efforts nationwide.

The "cooptation mode" context in the five years preceding the presidential elections was somewhat relaxed by Belarusian standards. USAID, one of Belarus's significant civil society supporters, reported that "over 650 leaders of CSOs and grassroots initiatives attended the March Civil Society Forum in 2016-2019 promoting grassroots activities and

networking. The Leadership in Local Communities program trained 100 leaders nationwide who mobilized 10,000 residents to address local issues leading to positive changes.”

The topics were rather apolitical: economic education, women empowerment, innovative entrepreneurship, and venture funding. Even during COVID-19, when international travel became impossible, hundreds of activists participated in virtual educational programs. These numbers are insignificant for a country of 9.4 million controlled by an authoritarian regime with numerous secret services and strict control over social and cultural life. However, the more total its control becomes, the more political any activity becomes.

Limits of authoritarian cooptation

Cooptation as a form of soft control is an active strategy. Authoritarian regimes are not so much dynamic as inertial systems, and a cost-benefit approach is not the only one they employ. Especially when there is a considerable security machine with its interests, the developments are unpredictable, even for their initiators and participants. In 2020, both sides underestimated their powers.

Before the elections of 2020, Belarus’s civil society did not have a leader—that would make him or her a political figure. It is safe to say that civil society did not know its political potential because it could be found only in action. The authorities underestimated the level of non-organized civic activity, overestimated their own popularity and support, relied on past experiences of corralling the old, tired opposi-

tion, and continued business as usual—and then were taken by surprise and scared by the genuine desire for a change.

The 2020 revolution in Belarus resulted from the evolution of the civil society that was getting a little more oxygen after the relatively quiet presidential elections of 2015. The previous ones saw mass protests and hundreds of people in jail; in August 2014 last six political prisoners were released, and the country enjoyed “political prisoner-free” status for months on the run, something unheard of since the mid-1990s.

However, there was something else—changing times. Several significant qualitative changes happened in that period. The private sector in Belarus’s economy became its biggest employer, thus weakening the regime’s grip on the economic and personal freedom of the working population. Private entrepreneurs and their employees acted with more leeway than workers in the state-owned sectors. Many state workers complemented their government salaries with part-time work in the private sector. A significant part of the active workforce moved to work abroad, mainly in Russia and European Union countries, creating independent wealth flows.

Authorities noticed this new independent cash flow from “grey” sources and made an almost instinctive move to curtail it. Officially unemployed citizens of working age were dubbed “parasites” for using the social benefits but not contributing to the budget. The issue, however, was viewed diametrically opposite by workers themselves: the state had nothing to do with their incomes; it was the result of their initiative, risks, and labor achieved despite the state, not thanks to its economic policies.

Thus, 2017 saw highly unusual for Belarus but classic civic unrest: mass protests against taxes. Enslaved people do not know taxes; they are given their due by their masters, even if it is a direct result of their labor. Taxes are a form of direct communication between the population and the state. When thousands of people across the country demanded repelling the so-called “parasite tax,” they acted as citizens, speaking to the regime in the language of state shareholders, not its mute subjects. Spontaneous rallies and demonstrations swept across the country. Independent media had mostly free access to these events and streamed video live; reports gathered millions of views and thousands of comments, both unprecedented numbers reflecting a new level of civic activity. The government backed down, which was viewed at the time as a significant crack in the so-called “performance legitimacy” of the authoritarian regime—it was a harbinger of the total performance failure of the state during pandemics 2019-2021- (Astapova et al., 2022).

The international context for Belarus in that period was characterized by détente with the West and rising tensions with Russia. The new “union treaty” between Moscow and Minsk was very much on the agenda; its secretive content was feared to undermine the sovereignty and independence of Belarus. The government decided not to quell public protests against the treaty, using them as a bargaining chip in talks. The regime and civic society’s interests coincided in this field for a specific time. Its culmination was the March 25, 2018, celebration of the 100th anniversary of the Belarus People’s Republic, the first short-lived independent Belarusian state born after WW1. Unlike previous years, the celebration was official-

ly allowed, and many thousands gathered in Minsk and cities across the country for political rallies and concerts. It was probably the biggest peaceful, successful opposition event in Belarus in the 21st century.

Some observers for a long time saw more potential for the civil society in the non-political sphere of the Belarusian language and history: “soft Belarusianization appears to offer the best prospects for making the country more resilient in the face of Russian threats, while also encouraging the dialogue and cooperation between state and civil society that are prerequisites for eventual democratization post-Lukashenko.” (Boulègue et. Al., 2018). The non-governmental sector in general and cultural in particular got a boost from the decision of the Nobel Prize committee to award the 2015 literature prize to Sviatlana Alexievich, a Belarusian author known for her critical stance on Lukashenko. It was the first Nobel prize for literature in any post-Soviet country. The authorities tried to ignore the honor completely, but the civil society organized celebrations, and the state reluctantly accepted, and a new initiative, Alexievich’s “Intellectual club,” was born. Monthly meetings with Belarusian and international intellectuals were happening in full view of the authorities who chose to tolerate this activity for the time being.

Loyalty vs. effectiveness

Authoritarian rulers operate in a framework where the most essential quality is loyalty. Loyal advisors, army commanders, heads of secret services, government ministers, judges, and editors guarantee a functioning system in a listless, challenge-free environment of complete control

and no dissent. However, loyalty is not synonymous with effectiveness. Any real challenge to such a system creates a life-threatening crisis: the nuclear disaster of Chornobyl demonstrated the impotence of the USSR as a modern technological state, a private plane of German adventurer Mattias Rust landing in the Moscow's Red Square ridiculed its defense capabilities, Ukrainian resistance against Russian aggression shows corruption and deficiency of the Russian army and its political class.

The challenge the Belarus regime faced in 2019 was universal—COVID-19—, and it could not be blamed on the opposition or the West. The unreformed, highly bureaucratized state healthcare system could not meet the new challenge. Incapable of dealing with the challenge in its medical, social, and economic dimensions, the government chose to react in the sphere it was confident it controlled: politically. Pandemics were first ignored, then ridiculed, then presented as a conspiracy, hushed, and made secretive. President Lukashenko was mocking the concerns of doctors and patients, advising them to go to the sauna and have a drink as a remedy. The country experienced mass deaths, and people saw numerous funerals, but the official propaganda machine denied the reality.

This policy resulted in a dramatic loss of lukewarm trust in the authorities and in raising the popularity and trust of the independent media. It also led to the mobilization and self-organization of medical professionals. The White Gowns united medical professionals who were fired or punished for telling the truth about the actual state of affairs; crowdfunding platforms quickly attracted widespread support. With tens of thousands of deaths and bur-

geoning social media, the result was inevitable: the performance legitimacy of Lukashenko's regime all but collapsed.

That was the situation when the date for the presidential elections was set as August 9, 2020.

Digital oxygen

All democratic procedures in Belarus continued as rituals—formally, solemnly, meaningless per se but powerful as an obedience mechanism. However, even a limited increase of oxygen in the public sphere that usually happens around elections, referenda, rallies, and meetings with candidates awakens society. Like a desert after rain, civic activism springs to life. By 2020, the civil society in Belarus was if not exactly a fully grown orchard but far from being a desert. Moreover, it produced its most unusual fruit for the Belarus political climate—fresh new viable alternatives promising a new future.

In his almost 30 years in power, Lukashenko survived challenges from the opposition, Western sanctions, and tensions with Russia over the prices of oil and gas. Mass protests were localized to the capital, brutally and effectively crushed; protests in regions were of much smaller scale, random, and quickly quenched. By 2020, however, there was another factor that civil society could grasp and make use of faster than the calcified authoritarian regime: digitalization. Over two-thirds of the population used mobile internet, social media groups counted millions of members, and video views on YouTube and Instagram were measured in millions. As prominent Belarusian sociologist professor Henadz Korshunau explained: "At the social le-

vel, these changes mainly concerned the organization of joint activity, which became more and more mobile, initiative, network, decentralized and horizontal, which went beyond vertical-hierarchical structures and gradually deconstructed them.” ([Drakakhrust](#), 2021).

This new state of society, “the rise of the horizontal”, was quickly becoming incompatible with the political regime and its rigid vertical “top-down” organization.

New players

In 2020, the first surprise to the system was that drive for change was led not by traditional democratic activists but by new non-political players in a new social environment. Three significant candidates could not be more different: a local activist blogger, a banker, and a former ambassador to the US. They had no history of prominent opposition or democratic activities. Their mission was suicidal—but they must have known this themselves and still, for some reason, chose to create an alternative.

The Lukashenka regime treated the challengers as it always did. Banker Viktor Babaryka was first presented as a Russian pawn but then accused of tax evasion. Former ambassador Valery Tsapkala was declared an ambitious traitor. Blogger Siarhej Tsikhanousky was crisscrossing the country, and his followers were rising by tens of thousands daily—but he was viewed as a marginal hero of the hour, a person without any organization, a minor angry businessman with no connections.

However, the authorities ignored the role of the civic movement—it was civil society, not so much candidates

themselves, that carried them higher and farther than anyone thought was possible. Babaryka was viewed as a competent manager and reformer with Russian and Western ties who could make life better; Tsapkala got the support of the burgeoning IT community he supervised for many years after his diplomatic career; Tsikhanousky's populist appeal promised a fair and just society. While the "old" opposition had years of courageous struggle and prison sacrifice behind them, the new candidates symbolized change for the future, and voters were craving change. The challengers in the presidential elections were quickly dealt with: blogger Tsikhanousky was arrested for allegedly pushing a police officer, banker Babaryka was jailed for financial irregularities, and former diplomat Tsapkala had to flee the country.

The authorities still did not see what was going on. They decided to demonstrate some liberalism aimed at local and international critics: Sviatlana Tsikhanouskaya, the wife of the arrested blogger, was unexpectedly officially registered as a candidate in his stead. The goal was to make fun of the inexperienced housewife from a rural area and, by extension, of all supporters of her husband. The authorities did not see that their problem was more dire than strong candidates. The times had changed, and one explanation was that "pre-existing social networks help drive mobilization in localities by facilitating communication, coordination, and engagement prior to protest onset, priming people to be ready when the moment of protest arrives." (Mateo, 2022).

Thousands of volunteers joined the campaigns of major candidates. When one campaign announced a new initiative for free and fair elections, "Honest People," it gathered

three hundred people under its banners in six weeks. An important element of this initiative was 150 lawyers who joined and were working pro-bono, building confidence and helping activists to register as observers to hold official local electoral bodies responsible. When two leading possible opposition candidates were illegally eliminated by the regime and Sviatlana Tsikhanouskaya stayed alone as a single alternative, volunteers of all campaigns joined forces. It turned out that civil society groups could find a common language easier than established political parties.

Tsikhanouskaya and her allies ran a highly successful mobilization campaign supported by civil society nationwide. Local and national organizations, initiatives, and activists were united in unprecedented social activity. As political scientist Alyena Batura says, “The August 9, 2020, elections catalyzed Belarus’s largest civic mobilization since independence and posed the most serious challenge to Lukashenko’s rule.” (Batura, 2022). The structure and goals of this mobilization were defined by the elections themselves, which usually created a window of opportunity for civil society. It was not about Tsikhanouskaya personally—she presented herself as a transitional figure, prepared to step down after organizing new fair elections in six months.

Most of the framework requirements for free and fair elections were absent in Belarus: there were no independent electoral bodies, no independent court and the rule of law, the state fully controlled TV, radio, and Internet providers, law enforcement carried out illegal orders and interfered at all stages of the process. However, the most sensitive element in any election is vote tabulation. In Belarus, a system was created that allowed them to pronounce

any number the authorities chose. In Lukashenko's case, they always chose between 70 and 90%. Few people trusted these results; however, they still needed to vote for the opposition unanimously. The majority believed that their participation did not matter either way. The first thing that the new parallel vote-tabulation system did was to deny the authorities the freedom to declare any numbers without a tangible challenge.

The initiative "Golos" ("vote, voice") created a digital platform where voters could send photos of their ballots. It was easy to use, had security protection, and received more than half a million proofs of voting for an alternative candidate — a feat never achieved before (Voice, 2023).. New solidarity initiatives on all levels attracted new and new participants that, in their turn, became new multipliers. Independent media were reaching huge new audiences; electoral rallies attracted thousands of people in places where no political activity was noticed for decades.

According to numerous observers and analytics inside and outside Belarus, Tsikhanouskaya won most of the votes; officially, Lukashenko was announced as a winner; the results of the elections were not recognized by the EU, OSCE, and the US.

Beginning of the end

The unprecedented mass protests shook the country; hundreds of thousands of citizens took to the streets. The authorities replied in the only way they could: the unprecedented wave of state terror covered the country. Russia sent its reinforcement — propagandists took over state TV, and advisors

coordinated crushing street protests. Thousands were arrested, and tens of thousands were beaten, tortured, brutally persecuted, and harassed. Deaths of protesters occurred.

The first target of the regime was independent media: journalists in Minsk and across were harassed, beaten, stripped of accreditation, their homes searched, and equipment confiscated. Independent media was declared “extremist”—working for it was a crime, and using it was also a crime. While media outlets were closed, offices raided, equipment confiscated, and Internet portals and websites blocked. Arrests expanded—journalists were put behind bars and charged with state treason.

Soon, a second step followed: not just the media but its audiences became targets of criminal charges. Subscribers to Telegram channels and YouTube programs were arrested and punished. Public humiliation campaigns started: people were forced to make forced confessions on video admitting to the crimes of being subscribers to RFE/RL or other “extremist” media, of being “duped” by civil organizations; videos were published by police and shown on state TV. Other targets included campaigns of presidential candidates, human rights organizations, and social media influencers. The legislation was quickly amended, and conveyor trials started.

In the spring of 2021, the then-minister of foreign affairs, Uladzimir Makej, warned that the civil society in Belarus would be fully liquidated if it continued its opposition. In July 2021, Lukashenko signed a decree on regulating civil society that was later turned into law. “Under the disguise of charities, non-commercial organizations carry our foreign political orders,” said Lukashenko to his

ministers, declaring that 1.5 thousand private foundations and human rights organizations threatened national security. He called for a purge (Lukashenko, 2021).

By September 2021, almost 1000 civil society and non-governmental organizations were disbanded. Those were registered organizations, and court proceedings were used for deregistration, followed by raiding offices, confiscation of property, and arrests of activists. It did not matter whether the organizations' goals were the support of people with disabilities or sports associations, religious or counter-trafficking groups. Neutrality and an apolitical stance were not good enough. What was viewed as politically innocent, like organized bird watchers, in a matter of short months transformed into a hostile antigovernment organization that needed to be shut down, its leaders arrested, put on trial, and sentenced.

The regime started to see civil society as its main threat—it was a recognition of its role and power.

Russian accent

Belarus is sometimes called a vassal to Russia. The country lost a significant portion of its independence not only in economic, military, and diplomatic spheres but also in its identity. University education in Belarusian is non-existent, schools teach in Russian, national language speakers are suspicious and prosecuted, and Russian is dominant in all spheres of life, from media to kindergartens. Russian Orthodox church acts as a political arm of Putin's regime, hostile to the Catholic church and especially Uniates that are governed by the Vatican.

Lukashenka was able to keep his usefulness to Kremlin, as was demonstrated by the Wagner mutiny, when Belarus became the hub for the private army of Yevgenyj Prigozhin. But there is a sphere where Belarus took the lead — political repression. The two states coordinate not only security, military, economic, and international policies, but they also use the same approach to regulate and crush civil society and learn from each other. The Russian idea of foreign agents and undesirable organizations was initially viewed as too weak by Lukashenka — Belarus was already much more restrictive in 2015 when Russia had just adopted a foreign agent law. In 2021 Russian President Putin took a step further -- signed a law that banned Russian citizens from participating in activities of “undesirable organizations” abroad; now that is reflected in the Belarus legislation.

The coordination of the two regimes intensified before the Russian war in Ukraine. With the help of Russia, Belarus authorities were able to step up their repression by moving into full-scale digital warfare against civil society. Civil society used digitalization to its full advantage in 2020; its openness and inclusiveness also meant its vulnerability. There was no security on the internet. Names and IP addresses of participants as well as their chats, were captured by the government. Police used face-recognition software and phone tracking to identify participants in rallies and marches. Humiliated dictator demanded to find everyone guilty —and with every month, it became more apparent that this goal in the digital age was not impossible.

The Russian war in Ukraine was Belarusian as well. Russian troops attacked Kyiv from the territory of Belarus,

and Russian aircraft and missiles bombed Ukraine cities from the Belarusian territory. The anti-war protests were another manifestation of the civil muscle of Belarus — though its scale was different. The purge of the civil society resulted in thousands of active citizens behind bars and tens of thousands moving abroad. Still, anti-war protesters found new forms to express their support for Ukraine. Belarusian volunteers who joined the Ukrainian army as soldiers, doctors, and drivers used to be former activists of the civil movement of 2020. Guerilla tactics of rail-road partisans inside the country were not civil, peaceful actions any longer. Activists sent photos of Russian military bases and troop movements to independent media abroad.

After the relentless purge, however, what is left of the civil society in the country is primarily underground. International attention to the plight of the civil society in Belarus suffered two significant drops: one in August 2021, when all eyes were turned to Afghanistan, which fell to the Taliban, and then in February 2022, when Russia invaded Ukraine.

The purge of civil society

The United Nations, OSCE, European Union, and the US were unanimous in condemnation of the repressions; Sviatlana Tsikhanouskaya, who was forced into exile, opened an office in Lithuania and is referred to as “president-elect”. She is greeted at the highest levels in the European capitals and in the US.

In July 2023, the United Nations special rapporteur on Belarus, Anais Marin, characterized the situation

with human rights and civil society as “catastrophic” and “worsening”. The French political scientist has been denied entry to Belarus. She reported that by the end of 2022, more than 1.600 “undesirable organizations” were forcibly dissolved, including all remaining independent trade unions. “This illustrates a deliberate state policy of purging civic space of its last dissenting elements.” (AFP, 2023).

It must be stressed that the way the authorities reacted to peaceful protests was unprecedented in the peaceful years after WW2: mass arrests, atrocities of special forces and police, torture, and astronomical prison terms. It turned out that the regime had nurtured security forces ready to crush any dissent with complete impunity. That was a shock that is still being processed by society.

Anais Marin underlined that no one had been held accountable for arbitrarily detaining tens of thousands of peaceful protesters in 2020 nor for the violence or torture. The UN rapporteur described what was happening with civil society activists: “This general impunity, and the climate of fear resulting from ongoing repression, have compelled hundreds of thousands of Belarusians into exile.”

The results were reflected in many headlines. Human Rights Watch subbed 2021 as “a year of dismantling Civil society in Belarus” (Lokshina, 2021). United Nation news called the regime’s actions against civil society a “full-scale assault,” and “purge” (UN, 2021). Amnesty International — “sweeping crackdown,” “horrors,” “relentless persecution” (Amnesty International, 2021; RFE/RL, 2021). The landscape after the purge can be described as a desert.

Nobel prize for civil society

Belarusian civil society moved abroad — to Lithuania, Poland, Ukraine, Georgia, and other European countries. Moreover, they regrouped and started operating there. Independent media successfully continued their operation from abroad; two major NGOs, the Belarusian Association of Journalists and Press-club, resumed their activities almost in full in Lithuania and Poland. Belarus Pen is registered in Poland and continues supporting its members in exile. Human rights organization, the first of them Viasna, has never stopped monitoring human rights violations and trials; Viasna leader Ales Byaliatsky was awarded the Nobel Peace Prize in 2022 while serving a prison term (Nobel Prize, 2022).

The office of the president-elect Sviatlana Tsikhanouskaya created a hub for civil society in exile (Tsikhanouskaya, 2023). The hub provides information and contacts with numerous civic initiatives that continue or start anew in exile. Belarusian Culture Solidarity Foundation unites 1,500 artists and musicians; Belarusian Sports Solidarity Foundation organizes athletes; Pro Bono helps with legal and other assistance for victims; and probably the most news-making organization, ByPol unites former police officers and security personnel. Solidarity Association of Belarusian Law Enforcement Personnel documents violent abuses by the Lukashenka regime and supports people pressured by the regime.

After Covid-19, the medical profession became one of the most politicized. In 2020, Belarusian doctors set up a solidarity foundation and continued their operations abroad

after leaving the country. Theirs is a telling example of the travails of civil society in exile. Their activity reports are focused on measurable, practical goals that are easy to participate in and evaluate. After two years of activity, it summarized its achievements: satisfied 711 requests for assistance, provided financial help 93.950 EUR, paid 4.300 EUR for lawyer's services, 21.700 EUR were used to cover fines, legal expenses in courts. Sixty-four thousand five hundred were issued for doctors who were fired for political reasons, presented the alternative report on the situation about healthcare in Belarus at the UN (BYMEDSOL, 2023).

The activity of civil society abroad causes ire and attacks from the regime in Belarus that takes steps to prevent similar manifestations of the civil spirit in the future. Crowdfunding platforms proliferated before and immediately after August 2020, and they continue to effectively function among new diaspora abroad. Authorities view them as a direct threat and continue to hunt down contributors years later. In the summer of 2023, there were reports of police threatening former donors with prison terms unless they made a ten-time donation to the official causes. An IT engineer in Minsk who three times donated 50 USD to different causes in 2020 was made to contribute 1.500 USD to a state hospital as a price of staying free-for now (Radio Svaboda, 2023).

A serious interest in civil society and its support should supersede news cycles. Furthermore, Belarusian researchers and authors do more and more of this work themselves. The impressive list of explorers of the Belarusian civil society compiled by the Atlantic Council's Eurasia Center included national and international organizations and publications (D'Anieri, 2021).

One of the tactics of authoritarian regimes is to create its own “civil society” —and in Belarus, there was a full range of pseudo-NGOs, from political parties to charity foundations. However, they never demonstrated any activity, even directed at strengthening the regime. One of the explanations why the Belarus regime is interested not in mobilization but, on the opposite, in de-mobilization of the population is in its specific nature. In a dictatorship, any independent social activity, even in its support and against the opposition, is not acceptable. Even the zombie-like pro-government “Patriotic party” was liquidated in July 2023; at that time, more than 800 neutral and pro-government organizations were in the process of legal shut-down.

Interestingly, despite this well-documented situation, it sometimes leads foreign observers to misread the prison silence for unanimous support. When in February 2022, Lukashenka’s regime conducted a “referendum” on constitutional changes, a leading Western newspaper used the language as if referendums or any constitutional changes were legitimate endeavors in Belarus. “Belarusian voters endorsed far-reaching constitutional changes that abandon the country’s non-nuclear status and open the door to longtime leader Alexander Lukashenka remaining in power past 2030. More than 82% of voters had backed the proposed constitutional changes...” (Gershkovich, 2022). Even beta versions of the artificial intelligence platforms can produce a more realistic assessment of the situation in Belarus.

Outstanding events such as the death in prison and the funeral of activist artist Ales Pushkin in July 2023 can still unite people in mourning despite clear danger (around 100 mourners came to his funeral; police started arrests the next

day). However, other public civic activities have become impossible without the permit and approval of the authorities.

Mirage or goal

Civil activity in the underground is a contradiction in terms. The post-election period saw the end of authoritarian adaptation as tactics and switched to a dictatorship mode that is incapable of tolerating non-state actors. Nevertheless, can a modern state exist and compete successfully without civil society? For how long and at what price? We know the answers, at least for the last two questions: rather long, decades-long, and the price is always acceptable for those in power.

Long — but not forever. Complete eradication of independent civil cooperation between individuals, groups, and minorities has not been possible in the XX century, even in the brutal regimes of Nazi Germany and the communist Soviet Union. Although one has yet to see how the modern digital control of civil society will play out in China, that leads the way in this regard in the XXI century.

As for Belarus, the answer to the question in the title, what is now civil society in Belarus, a blossoming orchard, or a mirage in the desert, is neither. It is seeded in the ground after the storm and drought. Any seeds lie in the dark before bringing fruit. This safe place for keeping civil knowledge is called collective memory.

The memory of the active civil society in Belarus is more than just episodic (what happened). It is also semantic (information people know) and procedural (how to do it). Can this memory become prospective (what people plan to do) is not a question of whether but when.

REFERENCES

- Amnesty International. (2022, August 14). Belarus: Sweeping crackdown on civil society organizations must be stopped. Amnesty International.
- Astapova, A., Navumau, V., Nizhnikau, R., & Polishchuk, L. (2022, June 5). Authoritarian Cooptation of Civil Society: The Case of Belarus. Taylor & Francis Online.
- Batura, A. (2022, October). How to compete in unfair elections. *Journal of Democracy*.
- Bedford, S. (2021, September 24). The 2020 presidential election in Belarus: Erosion of authoritarian stability and re-politicization of society: Nationalities papers. Cambridge Core.
- Belarusian Medical Solidarity Foundation. (n.d.). Belarusian Medical Solidarity Foundation.
- Boulègue, M., Marin, A., & Lutsevych, O. (2018, November 8). Civil Society under Russia's threat: Building resilience in Ukraine ... Chatham House.
- Drakakhrust, Y. (2021, August 2). "Incredible 2020". Gennady Korshunov: "Horizontal Rebellion." Radio Svaboda.
- D'Anieri, A. (2022, February 3). Exploring Belarusian civil society. Atlantic Council.
- France-Presse, A. (2023, July 5). State of human rights in Belarus "catastrophic." VOA.

- Gershkovich, E. (2022, March 1). Belarusian voters back constitutional changes ending nonnuclear status. *The Wall Street Journal*.
- Koktysh, K. (1995, November 27). Belarus leader defends Hitler Praise - UPI Archives. UPI.
- Lokshina, T. (2021, August 8). A year of dismantling civil society in Belarus. Human Rights Watch.
- Lukashenko, A. (2021, July 30).
- Mateo, E. (2022). All of Belarus has come out onto the streets: exploring nationwide protest and the role of pre-existing social networks. Taylor & Francis Online.
- The Nobel Prize. (n.d.). The Nobel Peace Prize 2022. NobelPrize.org.
- RFE/RL. (2021, December 2). Watchdog blasts “relentless persecution” of civil society in Belarus. RadioFreeEurope/RadioLiberty.
- Svaboda, R. (2023, July 20). “Two people confessed and paid large sums themselves.” Why are the authorities still pressuring the participants of the 2020 protests. Radio Svaboda.html
- Tsikhanouskaya, S. (n.d.). Initiatives. Official website of Sviatlana Tsikhanouskaya.
- United Nations. (2021, July 55). Belarus: “full-scale assault” ongoing against civil society amid massive human rights violations | UN news. United Nations.
- Voice (Ed.). (2023). <https://golos.partizan-results.com/home>

ACTIVISTS' JOURNEY UNDER AUTHORITARIAN RULE: LESSONS FROM THE ARAB UPRISINGS

Engy Moussa

Introduction

Regardless of where they occur, how they evolve, and what they achieve, or fail to achieve, mass movements and revolutions attract considerable academic attention, and raise persistent questions about the motivations, attitudes, and achievements of revolutionary actors and activists. The popular uprisings that hit many countries in the Middle East from late 2010 onward were no exception in this regard, inviting considerable revisions to established beliefs about the true extent of the tight control that the region's authoritarian regimes have for decades nurtured to ensure political and social subjugation of the mass public. Yet despite the uprisings' seemingly promising start, authoritarianism has strongly survived across the region, and political activism has been largely curbed.

Reflecting on the paths that the Arab uprisings have taken since late 2010, this chapter is motivated by two

broad questions. First, is “activism”—social, political, or both— truly possible under authoritarian regimes? And second, what, if anything, can the uprisings and upheavals that erupted in many countries across the Middle East from late 2010 onward teach us about the limits of activism under authoritarian regimes? Worth emphasising that these questions are the catalyst for this chapter rather than the end goal. In other words, guided by these questions, rather than seeking to provide a comprehensive answer to them, this chapter reflects on years of research and engagement with the literature on authoritarian rule and political activism in the Middle East alongside first-hand experience of the uprisings to briefly outline three challenges that constrain the growth of strong and development of effective activism and were subsequently, I would argue, at the heart of the poor outcome achieved by the uprisings despite the promising start. These challenges are a limited political awareness, a lack of clear political vision to substitute the authoritarian status quo, and a weak commitment that was reinforced by a heightened level of public insecurities that nurtured a widespread need for protection and, thus a strong preference for authoritarian rulers and regimes.

While the challenges that face activism and public engagement in the context of authoritarian rule are diverse and continuously evolving, I find the outlined three particularly noteworthy because, beyond being individually significant and arguably common across authoritarian contexts, they enable us to construct a narrative that traces the difficult path of activism from the preconditions’ phase all the way through the confrontation with the authoritarian status quo

and the difficulties encountered during the transitional period. To present this narrative, the chapter starts by exploring the concept of “a journey of activism”. Next, the chapter looks at the constrained social and political environment under authoritarian rule, showing how a deliberate lack of political awareness strongly challenges and constrains the development of effective. Moving along the journey of activism to the stage of mass uprisings, presumably the peak of activism, the chapter explores how popular uprisings are internally challenged and weakened, through the lack of a clear political vision and a unifying leadership, and externally opposed through a widely shared pursuit of stability and safety that translates into a public preference for strong ‘authoritarian’ leaders and a rejection of democracy.

The journey of activism

Conceptualizing activism as a journey, scholars have used different terms and models to capture the mechanisms and processes attached to political and social engagement, including the “journey” (Temple and Laycock, 2008), “trajectories of contention” (Klandermans, Staggenborg and Tarrow, 2002) and “the route map to engagement” (Trewby, 2012). While tracing the numerous paths and stages of engagement, scholars are commonly seeking to understand people’s motivations for engagement, with considerable emphasis attributed to the concepts of beliefs, accepted frames and values (Benford & Snow, 1988; Della Porta & Diani, 1999; Cotgrove & Duff, 2003)—often used interchangeably—“with the basic contention being that people are more likely to engage (and/or re-

main engaged) if they share beliefs/frames/values with the movement” (Trewby, 2012, p. 13).

On the long list of preconditions for engagement—these beliefs that motivate people to become engaged—the following are regularly highlighted: knowledge of injustice, “biographical availability”, which McAdam (1986, p. 70) defines as “the absence of personal constraints that may increase the costs and risks of movement participation, such as full-time employment, marriage, and family responsibilities,” a belief in the value of engagement, that “becoming engaged would make a difference”; and a belief in the duty of engagement (Trewby, 2012, p. 14). Some common mechanisms that lead to the creation of these preconditions are education, both formal and experiential (Conner, 2007), emotions such as “guilt, anger, sympathy and empathy (which) can all play a part in building belief in the existence of the issues, and sometimes move people towards a desire to engage” (Trewby, 2012, p. 16), the media (Dobson, 1995; Gitlin, 2003), socialization in the form of belonging to a network or affinity groups (McDonald, 2006, p. 45), which provide opportunities for personal invitation to engage as well as aid in strengthening the preconditions of activism: “increase knowledge of issues, prove that it is possible to engage, share stories of success and encouragement in the belief in the duty to engage” (Trewby, 2012, p. 19).

Complementing the focus on the preconditions for engagement, scholars typically divide the journey of engagement into different stages and phases, including Klandermans, Staggenborg and Tarrow’s (2002, p. 326) three stages to engagement: the generation of mobilization potential; the transformation of mobilization potential into actual participation; and sustained participation or with-

drawal from participation. To a large extent, many of the preconditions mentioned above are expected to take place in the first phase of the journey of engagement, namely, the generation of mobilization potential. Yet, one's journey of engagement rarely mirrors a linear path. Instead, it reflects a dynamic process in which the border between preconditions and experiences of engagement is often blurred, with the latter occasionally preceding and enabling the former (Temple and Laycock, 2008, p. 105).

When considering the types of engagement and activism under authoritarian rule, McAdam's discussion of High-risk High-cost activism proves very useful. "Cost," according to McAdam (1986, p. 67), reflects "the expenditures of time, money, and energy that are required of a person engaged in any particular form of activism." Meanwhile, "risk" reflects "the anticipated dangers—whether legal, social, physical, financial and so forth—of engaging in a particular type of activity" (McAdam, 1986, p. 67). At large, those who take part in high-risk high-cost activism are commonly anticipated to carry four main characteristics: "have a history of activism, be deeply committed to the ideology and goals of the movement, be integrated into activist networks, and be relatively free of personal constraints that would make participation especially risky" (McAdam, 1986, p. 71). Furthermore, considering the relationship between beliefs and actions, McAdam (1986, p. 64) contends that "an intense ideological identification with the values of the movement disposes the individual toward participation, while a prior history of activism and integration into supportive networks acts as the structural "pull" encouraging the individual to make good on his or her strongly held beliefs."

A deliberate lack of political awareness

The lack of political awareness represents the first challenge that faces activism in authoritarian settings. This challenge starts at home, in one's own household and surrounding environment, including schools, sport clubs, and social gatherings. Being raised under authoritarian rule inevitably means that open discussions, debates, and initiatives concerning politics and the government are strictly confined, if not entirely absent, from the personal and educational spheres of most people. That said, surely not all citizens under authoritarian rule grow ignorant of, or uninterested in, politics and/or without a strong passion to introduce change and improve the political and social system. Some are particularly fortunate to belong to households where political consciousness, interest and even activism are present and encouraged. Yet, most people under authoritarian rule severely lack this opportunity. In this light, widely introducing a political awareness alongside the ability to question the status quo and act to change it represent the first step toward any meaningful activism, and its lack is necessarily the first challenge.

Put this way, overcoming this challenge may seem relatively easy and straightforward. Yet, when seriously considering how developing political awareness would be implemented under an authoritarian regime, the severe nature of the first challenge becomes evident. It is important to emphasize at this stage that political education or awareness isn't just "naturally lacking" among most people who live under authoritarian rule. On the contrary, the lack

of political awareness and knowledge is to a large extent the product of systematic state policies and strategies that aim at hollowing out the public sphere and collective consciousness of any meaningful engagement with political discourses and activities.

What do we mean by political awareness? Political awareness refers to the individual's acquisition of knowledge and information pertaining to political ideas, issues, institutions and structures, and major events at the national, regional, and global levels (Al-A'zzam & Abdullah, 2007; Kuotsu, 2016). In this light, political awareness targets two main areas: first, general political literacy—learning about a state's structure, rights and responsibilities of citizens, the duties of and expectations from elected officials and civil servants, the foundation of a democratic system, and so forth—and second, specific political concerns which include awareness of political issues alongside a knowledge of the injustices in society and transgressions of state officials. This political awareness is acquired by the general public across countries through different channels, including formal education, the media, social media platforms, and socialization, among many other platforms.

Formal education, particularly “civic and citizenship education,” both at school and through extra-curricular activities, is viewed as an essential venue through which the youth understand their rights and duties, “learn how the political system works and identify opportunities and acquire skills to engage in public and political life from an early age” (OECD, 2022, p. 99). This structured platform for nurturing “political awareness” is typically complemented by “experiential education”—the lessons and information

concerning politics and activism that are learned through wider life experiences (Trewby, 2012, p. 15). Building on this, Western scholarship largely considers formal education “as an important socialising factor that influences the formation of individuals as enlightened state citizens who are capable of independent and critical thinking,” and thus, education embodies “a potential antidote against authoritarian governmentality, religious extremism as well as enmity towards “others”, and as a pre-condition for the emergence of democracy or ‘good governance’” (Rohde & Alayan, 2012, p. 2).

Looking at formal education across authoritarian countries, including those in the Middle East, the mismatch between the outlined view and the perpetual reality is striking. As Rohde and Alayan (2012, p. 2) note with respect to countries in the Middle East, the existing education systems are generally seen as part of the problem, rather than the solution, of these issues that are identified as continuities prevailing in the region.” Specifically, in authoritarian countries, formal education is one of the prime venues to “ensure political loyalty and support” (Cimini, 2019, p. 22), and to perpetuate authoritarian systems of governance by nurturing public compliance and system justification. “System justification” significantly reduces one’s willingness to protest by enhancing individual beliefs that the system is justified (Jost et al. 2012). As such, while access to education has considerably increased across the Middle East in recent decades, the level of political awareness acquired through this venue has remained limited, with the poor quality of education regularly representing a major public concern— “nearly 9 in 10 are concerned with the quality of education” (OECD, 2022, p. 24).

Two important questions are worth addressing at this stage of our discussion of formal education and its impact on political awareness: first, what role, if any, does private education have on political awareness? And second, can education, even when of poor quality, still lead to public engagement and activism? A key feature of the improved access to education across the Middle East in the past few decades has been the increasing number of private schools. This development accompanied the wave of liberalization that affected many countries in the region starting in the 1980s, with the middle and upper classes increasingly opting for private education for their kids amid the severe decline in the quality of public schools. Beyond significant quality improvement, some private schools have been arguably playing a role in raising political awareness among members of the middle and upper classes. This is particularly the case with respect to the private schools that follow an international curriculum of education, including the British, French, and German curriculums, where there has largely been limited interference from the state in the content and delivery of these curriculums.

Besides the private schools that offer international curriculums of education, the general improvement in access to education has progressively nurtured a social and economic environment of public discontent due to the increasing range of qualifications among a growing segment of the population, yet a relatively low growth in adequate employment opportunities (Campante & Chor, 2012). In a similar vein, the expansion of mass higher education has been linked to increased protest potential with universities constituting key hotspots for the development of political behaviour and social movements (Hall, Rodeghier & Useem, 1986; Jenkins &

Wallace, 1996). Reflecting on the roots of the 2010-2011 uprisings, Price, Peterson and Meyer (2019, p. 5-6) concluded: “The recent expansion of mass higher education, combined with high unemployment and low democratic freedoms, encouraged political action in the Middle East.”

In sum, as Farag (2012) asserts, “knowledge is a road to freedom, whereas the educational system is a tool of social and political control.” Yet, while the deliberate emptiness of formal education of ‘knowledge’, particularly political knowledge, represents a major challenge to activism in authoritarian settings, assuming that the introduction of political awareness to the educational system is a sufficient guarantee for activism would be a mistake. Capturing this nuance between awareness and action, Bayat (2010, p. 53) remarks how “many resistance writers tend to confuse an awareness about oppression with acts of resistance against it. Such an understanding of “resistance” fails to capture the extremely complex interplay of conflict and consent, and ideas and action, operating within systems of power.” Put differently, while acquiring political awareness represents a major precondition for activism, it certainly does not guarantee its development and occurrence (Moser & Dilling, 2007, p. 11). Ultimately, activism represents an intentional act (Scott, 1985), where the individual chooses to translate their knowledge and awareness of political issues and public injustices into intentional acts of resistance and activism.

Poor political vision and weak commitment

There is a rich scholarship that looks at how different authoritarian regimes, including countries in the Middle East

since 2011, survived popular uprisings through different strategies of authoritarian adaptation and upgrading (Heydemann, 2007; Bellin, 2012; Stacher, 2012; Moussa, 2023). Complementing this literature, I would like to argue that the striking absence of clarity about the aspired political model and project to be pursued to substitute the authoritarian status quo represents a major challenge that activists under authoritarian rule constantly face yet fail to address. Taking Egypt as an example, millions of people gathered in early 2011 in Tahrir Square, across the surrounding districts and in different cities across the country in an unprecedented mass movement. They strongly shared a deep resentment toward the ruling regime and a desire for better living conditions. Yet how to achieve these aspirations, beyond demanding the overthrow of the head of the regime, was neither present at the start of the 2011 uprising nor effectively developed over the course of the short-lived uprising. Without a doubt, part of this problem is due to the lack of political awareness and proper knowledge, as discussed earlier, among a considerable number of protesters of the multifaceted dynamics of politics, including how a state functions, the mechanisms of a competitive political system, and the considerable resources and lengthy time-frame needed to introduce meaningful and radical changes to the political system. Two additional factors that deserve careful consideration on this subject are the heterogeneous fabric of the protest movement and the inevitably chaotic nature of transitional periods. These factors strongly contribute to the other two major challenges that face activism under authoritarian rule: the lack of a clear political vision and unifying leadership, as well as poor commitment.

Staying with the Egyptian case, the composition of the protest movement that led the uprising in early 2011 was very diverse and quickly evolved over the 18 days of the protests that concluded with the overthrow of former president Hosni Mubarak. Largely viewed as a middle-class uprising, the early participants were primarily upper-middle-class, highly educated professionals or university students. With the protests quickly gaining momentum, not least due to the unexpected breakdown of the domestic security forces, although this was relatively brief and the intervention of the armed forces helped the regime swiftly regain overall control, other groups joined the protests, including those from lower socio-economic backgrounds (Holmes, 2012). The unified demand to overthrow Mubarak effectively solidified the protest movement. Yet it was a largely shallow unity that quickly disintegrated once the military took over from Mubarak. The demands carried by the protestors, many of whom identified with more than one group, across the ideological, socio-economic, political, and religious spectrums, were diverse and commonly conflicting, particularly with regard to the relative importance and urgency each actor attributed to their individual demands. Aggravating this divergence in concerns and grievances as well as demands and aspirations was the lack of widely trusted social and/or political leaders who could unite the protestors, nurture public consensus, and offer a middle path toward democratic transition.

Ultimately, whether due to poor political awareness and/or the absence of charismatic leaders who could effectively unite the protestors or some other reasons, the protest movement severely lacked a clear vision for the aspired

democratic system and a realistic trajectory to achieve it that is both flexible and informed by the local context and broader historical experiences, and around which the protest movement could unite and in which the wider population may find a sense of certainty and security. This missing vision and realistic trajectory for democratization reduced the political activism witnessed in early 2011, especially in its peak moments, to a shallow and short-lived mass movement that was full of energy, passion for, and potential for change yet lacked the means to capitalize on these promising and considerable asset. In the meantime, conscious of the increasing divisions within the protest movement as well as between the protesters and the larger population who grew largely fearful and resentful of political change, different factions of the authoritarian regime skilfully took advantage of these upheavals to upgrade their strategies of oppression, and more importantly to further break the activist movement through a divide-and-rule approach that nurtured the already diverse spectrum of grievances and demands manifesting within the opposition and protest movement.

Transitional periods are typically chaotic, unpredictable, and subject to fierce competition among different social and political factions. During these periods, the stakes are significantly high, with activism being usually high-risk and high-cost. While the level of sacrifice—the anticipated and/or experienced risk and cost—depends on one's level of involvement in a political or social movement, a general atmosphere of uncertainty, insecurity and hardship is expected to affect the totality of society in the instance of an uprising and during the transitional period that follows

(Chenoweth & Stephan 2014; Pinckney 2020). Transitioning out of an authoritarian regime is an inevitably troublesome and costly process full of uncertainties, downfalls, trial and error, not to mention the persistent struggle between revolutionary and counter-revolutionary forces with the former eagerly striving to consolidate any achieved gain while the latter furiously working toward restoring the authoritarian status quo, or at the very least ensuring for themselves a safe environment where they can continue to enjoy political and economic powers and privileges (Allinson, 2022).

While the internal divisions of the protest movement, discussed earlier, are potentially sufficient to halt any democratic transition, the wider atmosphere of insecurity and uncertainty that characterises the transitional period has been decisive in ensuring the survival of authoritarian rule. Alongside economic hardships that accompany transitional periods, a rise in crime rate is another common feature that strongly nurtures public support for the restoration of authoritarian order. In Egypt, criminal gangs were among the chief beneficiaries of post-uprisings lawlessness after substituting state forces in some of Cairo's most dangerous slums (Revkin, 2013). However, a heightened level of crime does not necessarily reflect a deficient domestic security apparatus. Along these lines, Springborg (2011, p. 431) partially connects the crime wave during and following Egypt's uprising to "the activities of the police and their shadowy accomplices among these thugs, who share an interest in subverting justice and indulging in outright theft." In the meantime, extensive press attention to the rising crime rates, without any mention of the contribution of the state

security institutions to this development, “negatively impacted Egyptians’ perceptions of their safety” (Abadeer et al. 2019).

While primarily a societal issue, the political consequences of rising crime rates during transitional periods are noteworthy. As demonstrated by Abadeer et al. (2019), there was a strong “empirical relationship between rising crime and support for authoritarian leadership in Egypt following the 2011 uprisings”. Furthermore, while directly raising support for authoritarian rule among some parts of the population, security concerns undermined trust in democracy among others. “Egyptian youth with greater concerns about security were significantly less likely to prioritize democratic values in 2013” (Abadeer et al. 2019). If the youth, many of whom were presumably at the heart of the 2011 uprisings, were willing to give up on their democratic aspirations by 2013, only two years after the breakout of the uprising, would the wider population, among whom a considerable portion was initially resentful toward the uprising, which they perceived as a disturbance to their daily lives, be expected to pay the cost and take the risk of carrying a democratic transition?

The answer to this question is not limited to the people’s reaction to the chaotic atmosphere—political, economic, and social—accompanying the transitional period. Instead, it is the accumulation of the different parts of the activism journey presented in this chapter. In essence, the more restricted the political environment that a person is living in, the higher the risks they will be naturally taking when considering becoming politically or socially active, and subsequently, the higher the price they are likely to

pay, not once or twice, but regularly, and not only with regard to themselves, but the heavy price is commonly expected to be paid by their families, friends, and wider community (Schlumberger, 2021). Recalling McAdam's comment on the relationship between beliefs and actions, a commitment to high-risk high-cost activism evolves out of considerable political awareness—"an intense ideological identification with the values of the movement"—and an "integration into supportive networks", both of which encourage "the individual to make good on his or her strongly held beliefs" (McAdam, 1986, p. 64). Yet, under repressive authoritarian regimes, political awareness is widely missing, and social or political networks are confined and often criminalized. As such, the foundation of political activism is arguably very shaky, and while this doesn't necessarily mean that at times of upheavals and political transitions those who choose to resist authoritarian regimes or join a social/political moment will not commit and make huge sacrifices, the tendency to fall back and give up remains high. This hesitation is then further nurtured by the lack of a clear political project and unifying leaders, alongside a daunting environment of uncertainty and rising public resentment toward the protestors, which, as the case of Egypt has proven, were sufficient to ultimately kill the 2011 uprising and replace the pre-2011 authoritarian regime with a military dictatorship that is closer, in its public policies and repressive measures, to a totalitarian regime than an authoritarian one (Schlumberger, 2021, p. 63).

CONCLUSION

Since late 2010, considerable international attention has been directed toward the Middle East, as many countries in the region witnessed unprecedented and presumably highly unlikely mass movements. Known to encompass strong and long-lasting authoritarian regimes, the uprisings were largely puzzling, at least initially, to academics and politicians alike, as the region's authoritarian regimes were previously perceived to be considerably resilient while the forces of opposition were considered too weak and largely insignificant. Despite some seemingly major gains early on, including the overthrow of the presidents of Tunisia and Egypt, the uprisings eventually failed in overturning any of the region's authoritarian regimes, with the latter arguably growing more resilient and competent at pre-empting and suppressing activist movements.

Whether before or after the 2010-2011 uprisings, the challenges facing political activism in the Middle East remain diverse and continuously evolving. Approaching activism through the framework of a journey, this chapter outlined three challenges that activists commonly face in their journey of engagement under authoritarian rule. These challenges are the lack of knowledge of a clear vision for the aspired political system to replace the authoritari-

an regime and of a strong commitment and willingness to sacrifice in the critical periods of political transition and/or when activism becomes considerably high-risk and high-cost. While each of these challenges is sufficient on its own to constrain and weaken activism, it is ultimately the compound effect of them together, looking holistically at the journey of activism, that presents the greatest challenge to activism under authoritarian rule. In short, the lack of any or all of these factors is at the heart of the perpetual failure encountered by many activists and political movements in restrictive political contexts, and specifically under repressive authoritarian regimes. Conversely, the active and sustained development of one or more of these factors—political awareness, clear political vision, and strong commitment—is the prerequisite and unreplaceable fuel for a strong and successful political activism.

REFERENCES

- Abadeer, C., Blackman, A. D., Blaydes, L., & Williamson, S. (2022). Did Egypt's post-uprising crime wave increase support for authoritarian rule? *Journal of Peace Research*, 59(4), 577-592.
- Al-Azzam, A., & Abdullah, Q. (2007). Political participation of Jordanian youth: A field study of a sample of students from the university of Jordan. Unpublished letter. Institute of Research and Studies, 7.
- Allinson. (2022). *The age of counter-revolution: states and revolutions in the Middle East*. Cambridge University Press.
- Bayat, A. (2010). *Life as Politics. How Ordinary People Change the Middle East*. Amsterdam University Press.
- Bellin, E. (2012). Reconsidering the Robustness of Authoritarianism in the Middle East: Lessons from the Arab Spring. *Comparative Politics*, 44(2), 127-149.
- Benford, R. D. & Snow, D. A. (1988). Ideology, Frame Resonance and Participant Mobilization. *International Social Movement Research*, 1, 197-219.
- Campante, FR. & Chor, D. (2012) Why was the Arab World Poised for Revolution? Schooling, Economic Opportunities, and the Arab Spring. *Journal of Economic Perspectives*, 26(2), 167-188.
- Cimini, G. (2019). Missing Youth in Tunisia? Implications

- of Regional Disparities and Center-Periphery Divide. POMEPS STUDIES, 36. Conner, M. L. (2007). Learning from Experience. Ageless Learner.
- Cotgrove, S. & Duff, A. (2003). Middle-Class Radicalism and Environmentalism. In J. Goodwin & J. M. Jasper (Eds.), *The social movements reader: cases and concepts* (pp. 72-80). Blackwell.
- Della Porta, D. and Diani, M. (1999). *Social movements: an introduction*. Blackwell.
- Dobson, C. (1995). *Social Movements: A Summary of what works. The citizen's handbook: a Guide to building community in Vancouver*.
- Farag, I. (2012). Major Trends Of Educational Reform In Egypt. In S. Alayan, et al. (Eds.), *The Politics of Education Reform in the Middle East: Self and Other in Textbooks and Curricula* (pp. 80-96). Berghahn Books.
- Gitlin, T. (2003). The Media in the Unmaking of the New Left. In J. Goodwin & J. M. Jasper (Eds.), *The social movements reader: cases and concepts* (pp. 301-311). Blackwell.
- Hall R, Rodeghier M and Useem B (1986) Effect of Education on Attitude to Protest. *American Sociological Review*, 51(4), 564-573.
- Heydemann, S. (2007). *Upgrading Authoritarianism in the Arab World*. Brookings.
- Holmes, A. (2012). There Are Weeks When Decades Happen: Structure and Strategy in the Egyptian Revolution. *Mobilization: An International Quarterly*, 17(4), 391-410.
- Jenkins, J.C. & Wallace, M. (1996). *The Generalized Action Potential of Protest Movements: The New Class*,

- Social Trends, and Political Exclusion Explanations. *Sociological Forum*, 11(2), 183-207.
- Jost, J.T., Chaikalis-Petrtsis, V., Abrams, D., et al. (2012). Why Men (and Women) Do and Don't Rebel Effects of System Justification on Willingness to Protest. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 38(2), 197-208.
- Klandermans, B., Staggenborg, S. & Tarrow, S. (2002). Conclusion: Blending methods and building theories in social movement research. In B. Klandermans & S. Staggenborg (Eds.), *Methods of Social Movement Research* (pp. 314-351). University of Minnesota Press.
- Kuotsu, K. (2016). Political awareness and its impact in political participation: A gender study in Nagaland, India. *International Journal of Innovative Research and Development*, 5(8), 190-197.
- McAdam, D. (1986). Recruitment to High-Risk Activism: The Case of Freedom Summer. *American Journal of Sociology*, 92(1), 64-90.
- Donald, K. (2006). *Global movements: action and culture*. Blackwell.
- Moser, S. C. & Dilling, L. (2007). Introduction. In S. C. Moser & L. Dilling (Eds.), *Creating a climate for change: communicating climate change and facilitating social change* (pp. 1-30). Cambridge University Press.
- Moussa, E. (2023) Privatizing security and authoritarian adaptation in the Arab region since the 2010–2011 uprisings, *Contemporary Security Policy*.
- OECD (2022). *Young people in MENA: Coming of age in a context of structural challenges and global trends*. OECD iLibrary.
- Pinckney, J. (2020). *From Dissent to Democracy the Promise and Perils of Civil Resistance Transitions*. Oxford University Press.

- Price, A., Person, L. & Meyer, K. (2019). Change in Willingness to Participate in Political Action in the Middle East," *The Journal of Public and Professional Sociology*, 11(1).
- Revkin, M. (2013) *The Egyptian State Unravels*. Foreign Affairs.
- Rohde, A. & Alayan, S. (2012). Introduction. In S. Alayan, A. Rohde & S. Dhouib (Eds.), *The politics of education reform in the Middle East: Self and other in textbooks and curricula*. Berghahn Books.
- Schlumberger, O. (2021). *Puzzles of Political Change in the Middle East: Political Liberalisation, Authoritarian Resilience and the Question of Systemic Change*. German Institute of Development and Sustainability
- Scott, J. (1985). *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. Yale University Press.
- Springborg, R. (2011). The political economy of the Arab spring. *Mediterranean Politics*, 16(3), 427-433.
- Stacher, J. (2012) *Adaptable Autocrats: Regime Power in Egypt and Syria*. Stanford University Press.
- Stephan, M. and Chenoweth, E. (2008). Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict." *International Security*, 33(1), 7-44.
- Temple, G. & Laycock, A. L. (2008). Education for Global Citizenship: towards a clearer agenda for change. In D. Bourn & A. Leonard (Eds.), *Development education: debates and dialogue* (pp. viii-127). Institute of Education University of London.
- Trewby, J. (2012). What is the UK Global Justice Movement and how do individuals engage with it?

NICARAGUA, ACTIVISMO SOCIAL ENTRE LA REPRESIÓN Y LA DISPERSIÓN

Silvio Prado

Las distintas fases por las que ha atravesado la represión en Nicaragua han llevado a la consolidación de un régimen dictatorial que ha cerrado los espacios a cualquier forma de acción colectiva; ni siquiera queda margen para las procesiones religiosas. Ahora mismo no hay condiciones ambientales para que florezcan iniciativas de activismo social frente a las medidas restrictivas que toma todos los días la dictadura de Daniel Ortega.

Así lo muestra el Informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (en lo sucesivo Informe GHREN o simplemente GHREN, por sus siglas en inglés), nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2023):

A partir de las protestas de abril de 2018, los ataques al pluralismo cívico y político en Nicaragua se aceleraron y agudizaron. A lo largo del periodo examinado, las autoridades provocaron el cierre total del espacio cívico y democrático, a través de la persecución de las personas y organizaciones que expresaron o sostuvieron posturas diferentes a la línea del Gobierno. (p. 6)

Este clima de persecución y exilio también ha influido en las tendencias centrífugas al interior de las organizaciones e iniciativas sociales que convergieron inicialmente en el estallido social de 2018.

A manera de hipótesis se podría plantear que el cierre de espacios y la dispersión de los agentes sociales se encuentran entre los principales retos que enfrenta la sociedad civil en Nicaragua. En estas condiciones, el activismo social tiene que pasar necesariamente por una fase de fortalecimiento de sus propias capacidades, como estrategia para asegurar su supervivencia y recuperar la fisonomía que tuvo antes de la insurrección cívica.

La sociedad civil antes de 2018¹

La sociedad civil nicaragüense conoció su primavera entre 1990 y 2006, es decir, antes del retorno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) al gobierno. Durante esos 16 años la sociedad civil creció tanto numérica como cualitativamente.

Según el Mapeo y caracterización de las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, en lo cuantitativo, el crecimiento fue exponencial. Si entre 1956 y 1990 el otorgamiento de personalidades jurídicas alcanzó el 13,4% del total que había en 2006, las organizaciones de la sociedad civil inscritas de 1990 a 2003 constituyeron el 86,6% del total (Banco Interamericano de Desarrollo-Agencia Sueca

¹ Las secciones que siguen a partir de aquí se basan en el texto “La alternativa de una sociedad civil fuerte frente al colapso de las instituciones estatales”, recogido en Prado (2022).

de Cooperación Internacional para el Desarrollo [BID-ASDI], 2006, p. 90). En 2006, poco antes del regreso de Daniel Ortega al Gobierno, se calculaba que había 3293 asociaciones sin fines de lucro con personalidad jurídica registradas en el Ministerio de Gobernación (BID-ASDI, 2006, p. 101).

De este universo, el 65% correspondía a la categoría de asociaciones civiles, 20% a fundaciones, 5% a organizaciones internacionales y 10% a otras (BID-ASDI, 2006, p. 101). A ello habría que agregar los sindicatos, las cooperativas, las asociaciones de padres de familia y las organizaciones comunitarias, entre otras, que o bien se registraron en otros ministerios o en las alcaldías, o no estaban obligadas a inscribirse en ninguna oficina pública.

En lo cualitativo, la sociedad civil se encontraba en pleno desarrollo de las dimensiones de lo que se conoce como una sociedad civil fuerte: densidad, autonomía y autorregulación.

Densidad

La explosión del asociacionismo en los años noventa del siglo pasado implicó que se formaran organizaciones en todos los rincones del país con una naturaleza sumamente diversa. Una vez más, siguiendo el Mapeo y caracterización de las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua en lo que se refiere a su distribución geográfica, el 42% de las organizaciones se ubicaba en Managua la capital, y el 58% restante en departamentos o provincias del país. En cuanto a su diversidad temática, un indicador relevante de la densidad organizativa, se identificaron un total de 37 áreas

temáticas que iban de la incidencia política en el 82,4% de los casos al trabajo con pueblos indígenas en el 12,2% de las menciones (BID-ASDI, 2006, pp. 113-114).

Lo anterior revela que la sociedad civil presentaba una tendencia creciente de autoorganización en muchos ámbitos de intereses y valores de la sociedad nicaragüense en la primera década del siglo XXI. Eso tenía un complemento en la progresiva creación de redes temáticas, como expresiones complejas de coordinación entre organizaciones de perfiles similares, y la intervención en los espacios participativos creados por la Ley de Participación Ciudadana promulgada en 2004.

Autonomía

Las condiciones planteadas por el retorno del FSLN al gobierno a inicios de 2007 acarrearón la ruptura definitiva con las posibles tutelas del Estado y los partidos. Salvo aquellas pocas organizaciones que mantuvieron su cordón umbilical con el FSLN no quedaron más expresiones de la sociedad civil que aceptaran que una instancia superior designara los cargos de sus directivas, o que sometieran sus agendas o programas a las orientaciones recibidas de otros órganos que no fueran los compuestos por sus miembros.

Sin embargo, ese camino de afirmación autonómica no se dio en línea recta ni estuvo libre de impedimentos. Con alguna frecuencia, las discusiones internas para definir las estrategias también acarrearón desgarramientos y divisiones que abonaron a la mayor dispersión y la falta de cohesión manifestada años atrás.

Otro escollo que se revelaría clave años más tarde en la lucha por la democracia fue la llamada “oenegización” de la sociedad civil. Como señalara Borchgrevink (2006), la fuerte presencia de las ONG imprimía un perfil particular a la sociedad civil emergente, que contaba con un mejor financiamiento en aquella fecha, pero mostraba débiles vínculos con las organizaciones de base, y menos actividad e involucramiento en temas sociales y políticos amplios.

El hecho de que todas las asociaciones civiles fuesen reguladas por una ley que no diferenciaba entre ONG, iglesias, fundaciones, universidades privadas y organizaciones comunitarias hacía difícil la clasificación según el tipo de actores que componían la sociedad civil.

Independientemente de la precisión de los datos presentados, ese fue el panorama que encontró el FSLN cuando asumió el gobierno nacional en 2007: una sociedad civil cuantitativamente numerosa y densa, en la medida que abarcaba cada vez más ámbitos de la actividad humana; pero débil por su atomización, su baja capacidad para articularse con organizaciones de base y un claro predominio de las ONG. Sobre este particular, Borchgrevink (2006) fue un poco más lejos:

Nicaragua's civil society has sometimes been dubbed as 'NGO-ized'. This characterization is based on the fact that the Nicaraguan NGOs are strong, visible, and relatively well-funded, and consequently tend to dominate the public sphere. In contrast, other segments of civil society appear weaker, less active, and/or less occupied with the broader social and political issues. The union movement is fragmented, the private sector organizations focus on sector demands,

social movements are weak or inexistent, and community based organizations tend to focus on local concerns. In this sense, it is valid to describe Nicaraguan civil society as NGO-ized. (p. 8)

Sin embargo, aunque estos niveles de autonomía se pudieron ver comprometidos por las relaciones de dependencia entre financiadores y activistas sociales, cabe preguntarse si, en las condiciones históricas en que le tocó crecer, la sociedad civil nicaragüense tenía otras alternativas.

Autorregulación

En este ámbito las organizaciones de la sociedad civil también habían experimentado avances importantes en dos direcciones: su legalización dentro del marco fijado por las leyes y la adopción de reglamentos para su gobernanza interna.

En 2006, aproximadamente el 92% había obtenido su personalidad jurídica (BID-ASDI, 2006, p. 110) y estaban inscritas en el Departamento de asociaciones sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación. Sin embargo, lo que al inicio fue una fortaleza para el trabajo y el reconocimiento de las asociaciones civiles, posteriormente se convirtió en un arma en manos del Gobierno de Ortega, a medida que el régimen fue acentuando su deriva hacia el autoritarismo.

En cuanto a las normas internas, el hecho de tramitar su personalidad jurídica obligó a las organizaciones a redactar la documentación debida para regular su funcionamiento interno. El 52,5% celebraba su asamblea de socios entre una o dos veces al año. Algunas incluso lo hacían cada tres o cuatro meses. Aproximadamente el 54% elegía su junta di-

rectiva cada uno o dos años, y el 57% contaba con órganos de fiscalización de origen electivo (BID-ASDI, 2006, p. 111).

De modo que tampoco en la autorregulación se puede decir que las organizaciones de la sociedad civil estuviesen en estado embrionario. Incluso sin llegar a convertirse en una práctica generalizada en todas ellas, había esfuerzos importantes por someter la auto gobernanza de las organizaciones a normas acordadas ente sus integrantes.

En general, resulta muy difícil afirmar que la sociedad civil que se encontró Ortega fuese una sociedad civil fuerte, pero mostraba claros avances que prometían una trayectoria progresiva. Claramente constituía una amenaza para la restauración de la hegemonía del FSLN, por lo que su Gobierno se dispuso a dismantelarla para debilitar su capacidad movilizativa. Sin embargo, no tuvo los efectos buscados, como muestra el siguiente listado² de las protestas que alimentaron la dinámica contenciosa de los movimientos sociales, que convergió más tarde en el estallido de 2018.

- Entre 2013 y 2017 se realizaron 86 manifestaciones de campesinos contra la construcción del Canal Interoceánico: 5 de alcance nacional y 81 locales o regionales, en distintas zonas del país. Se estima que aproximadamente participaron en ellas 244 000 personas (López Baltodano, 2017).
- Desde el fraude electoral de 2011 hasta 2016 ciudadanos de distintos signos políticos se manifestaron frente al tribunal electoral, todos los miércoles, demandando elecciones libres y transparentes.

² Tomado de “Autoconvocados: fenómeno que nadie vio venir”, en Jarquín et al. (2020).

- Hubo protestas de la población en los municipios donde hay explotaciones mineras. Una de las más emblemáticas fue la lucha de los pobladores de Rancho Grande, un municipio de la zona central del país, donde los distintos sectores opuestos a una concesión minera a cielo abierto confluyeron en un movimiento local. Después de varias movilizaciones masivas lograron que el Gobierno central declarara inviable la explotación minera.
- Estallaron conflictos en los pueblos indígenas de la Costa Caribe, por la invasión de tierras comunales y el expolio de recursos naturales.
- Se realizaron movilizaciones feministas contra la violencia de género y por la restauración del aborto terapéutico, que Daniel Ortega había suprimido.

Todas estas protestas recibieron la misma respuesta por parte del Gobierno: represión de la fuerza pública (policía y ejército), ataques de grupos civiles organizados por el FSLN, y negación del derecho al uso del espacio público a la organización y a la libre movilización. Pero abril de 2018 les daría con la puerta en las narices a las autoridades para alumbrar el estallido, cuyas consecuencias aún no terminan de contabilizarse.

El cierre de los espacios

El cierre de espacios en Nicaragua ha ocurrido por obra de la combinación de medidas de hecho y de leyes punitivas, ambas enfocadas en impedir las actuaciones de la sociedad civil que hasta 2018 eran completamente normales.

Entre las medidas de hecho más importantes destaca la prohibición de cualquier tipo de protesta pública en septiembre de aquel año. Meses más tarde también fueron prohibidas las reuniones bajo techo, sin importar cuáles fueran sus finalidades: conferencias de prensa, seminarios de capacitación o reuniones de coordinación entre los distintos grupos que conformaban la constelación de las organizaciones que desafiaban a la dictadura.

Después de estos operativos violentos, que estuvieron acompañados de detenciones masivas, los actos de protesta social [del mes de julio de 2018] se redujeron de manera significativa. La última marcha multitudinaria se llevó a cabo el 23 de septiembre; el 28 de septiembre la Policía declaró las manifestaciones públicas ilegales. (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2023, p. 6)

La legislación represiva experimentó una aceleración a partir de 2019, con la lógica de cortar el oxígeno al movimiento de las protestas. Primero dictó el control de las remesas iguales o mayores de 500 dólares a personas particulares, con la finalidad de asfixiar financieramente a los grupos que se habían autoorganizado; se correspondía así a la tesis principal de la dictadura de que el estallido social había sido financiado desde el exterior por Estados Unidos. En esa misma corriente, un año después se aprobaría la ley de Agentes Extranjeros.

Más tarde, en un período de seis meses que abarcó parte de 2020 y 2021, el régimen hizo aprobar 10 leyes enfocadas en fortalecer su poder control sobre la sociedad y preparar el terreno para correr sin competidores en la campaña electoral

que se avecinaba. Entre esas leyes había tres especialmente concebidas para criminalizar las actividades de organizaciones de la sociedad civil:

- Ley Especial de Ciberdelitos.
- Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.
- Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.

El cerco a la sociedad civil se completó en 2022 con la aprobación de la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL), que sustituyó la anterior Ley General de Personas Jurídicas sin fines de lucro de 1992, a cuyo amparo ocurrió la explosión de organizaciones no gubernamentales en Nicaragua entre 1990 y 2018.

Como subraya el Informe GHREN, estas leyes buscaban generar

(...) un clima persecutorio basado en la supresión del disenso en todas las esferas de la vida social y política. Miles de personas defensoras de derechos humanos, trabajadoras de ONGs, activistas, periodistas, líderes estudiantiles, figuras religiosas, y artistas, así como los principales liderazgos nacionales y territoriales de la oposición política, se vieron forzadas a abandonar el país. Prácticamente la totalidad de medios de comunicación independientes y organizaciones de derechos humanos ahora operan desde el exterior. Las personas que permanecen en Nicaragua se han visto obligadas a practicar la autocensura. (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2023, p. 8)

De lo anterior se deriva que el paquete de leyes adoptado por la dictadura apuntaba a aplastar todo vestigio de la sociedad civil en cualquiera de sus expresiones, mediante la criminalización de sus funciones habituales, tanto en la realización de campañas, en la puesta en práctica de su repertorio de herramientas y de demostraciones, como en la reivindicación de intereses comunes.

Cada una de las leyes tuvo como destino contrarrestar las dimensiones que la sociedad civil había ido consolidando.

En lo que se refiere a su densidad, con las leyes de Agentes Extranjeros y la de Organismos Sin Fines de Lucro se perseguía impedir la autoorganización en los distintos ámbitos de la sociedad, incluso en aquellos casos en que no se necesitara personalidad jurídica para existir en las comunidades.

En cuanto a la autonomía, las nuevas regulaciones impuestas dieron al Ministerio de Gobernación poderes de amplia discrecionalidad para intervenir el autogobierno, perseguir a sus directivos y prohibir su existencia.

Con respecto a la autorregulación, al declararlas fuera de la ley, se impidió que las organizaciones adoptaran sus propios reglamentos, eligieran autoridades propias para autogobernarse y decidieran sus estrategias para reivindicar intereses comunes.

El Informe GHREN:

(...) documentó la cancelación de más de 3144 la cancelación de más de 3144 *Al momento de entrar a la imprenta había ascendido a 3472 personalidades jurídicas de organizaciones sin fines de lucro nacionales e internacionales, desde diciembre de 2018 hasta la fecha de redacción de este informe; es

decir, casi la mitad de las 7227 registradas ante el Ministerio de Gobernación en 2017. Las cancelaciones se llevaron a cabo a través de decretos de la Asamblea Nacional o de resoluciones del Ministerio de Gobernación. (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2023, p. 14)

En síntesis, el conjunto de leyes aprobadas entre 2021 y 2022 buscaban quebrar la columna vertebral de la sociedad civil en su papel de contrapoder del régimen autoritario, para volver a un estado de la sociedad casi feudal. Estas interdicciones fueron incluso más lejos: en el primer trimestre de 2023 se conoció que el régimen dictatorial prohibió las procesiones religiosas fuera de los templos, con el claro propósito de impedir cualquier tipo de reagrupamiento de la población que alimentase el espíritu para recuperar el espacio público.

El Informe GHREN también subraya que

La cancelación de organizaciones de la sociedad civil por el Gobierno es arbitraria, y está dirigida a reconfigurar el espacio cívico y garantizar el monopolio del Estado de las actividades comunitarias, de desarrollo y asistencia social. Dichas acciones formaron parte de una estrategia para reforzar los vínculos de dependencia y la vulnerabilidad de la ciudadanía frente a políticas clientelares. (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2023, p. 14).

La dispersión

A esta demolición de la sociedad civil hay que sumar las grietas internas que dejó el estallido social de 2018. La

falta de evidencias que prueben una relación de causalidad entre las organizaciones de la sociedad civil existentes antes del 18 de abril y la insurrección cívica hace suponer que la movilización generalizada de la sociedad ocurrió no sólo al margen de los partidos políticos, sino también de la sociedad civil hasta entonces conocida. Ello abrió las puertas a una sociedad civil de nuevo tipo caracterizada por la autoconvocatoria. Es decir, por las acciones directas de una pluralidad de actores en la que convergieron personas particulares y agrupaciones que no llenaron las calles siguiendo el llamado de un partido ni de una plataforma de organizaciones convocantes. Más bien fue la suma espontánea de la población, enardecida por las imágenes que llegaban a través de los medios de comunicación y de las redes virtuales.

Este fenómeno no ocurrió solamente en Nicaragua. Un estudio mundial sobre las protestas ocurridas entre 2006 y 2020 (Ortiz et al., 2022) revela los mismos patrones de la convergencia de una diversidad de actores tradicionales y nuevos:

(...) it must be noted that there has been a significant increase in the role of “grassroots” and social movements in protests over the years, as well as that of students/youth, indigenous/racial groups, unorganized workers, religious groups, women, hackers, prisoners and even policemen/military.

(...)

The increasing involvement of unorganized citizens, grassroots, middle-class people, young and old persons, and the relative decrease in the role of political parties/movements, is meaningful. Citizens have taken to the streets in the Arab

Spring, in Europe (e.g. the Indignados and “yellow vests”) or in Latin America’s Estallido Social (Social Uprising). These citizens do not consider themselves activists and yet they protest because they are disillusioned with official processes, political parties, and the usual political actors associated with them. (pp. 50-51)

Una caracterización sociodemográfica realizada entre la población exiliada en Costa Rica en 2018 reveló que el 68% de los participantes en las protestas se había vinculado a algunas de las organizaciones formadas al calor de la revuelta, y que un 32% nunca se adhirió a ninguna (Cuadra y Samcam, 2019). De allí que no fuera extraño que buena parte de los grupos juveniles y territoriales llevaran el apelido de «18 de abril» en sus denominaciones.

Tampoco extraña que los repetidos intentos de construir plataformas unitarias entre la constelación de grupos y organización anteriores y posteriores al estallido social no hayan tenido resultados exitosos y estables. Cinco años después, los desacuerdos siguen pesando más que los intereses comunes.

De manera que en el diagnóstico de los impedimentos o retos que enfrenta el activismo social en Nicaragua también hay que agregar la existencia de una sociedad civil desafiada por la emergencia de nuevos actores sociales que tampoco han tenido fácil el terreno para su maduración. La persecución deliberada a activistas sociales que acabaron en la cárcel, en la semiclandestinidad o el exilio, junto a la fragilidad de los vínculos internos de las organizaciones surgidas a raíz de las protestas, han impedido su consolidación y el desarrollo de lazos con los problemas que aquejan a la población.

El reto del fortalecimiento de las capacidades

El principal reto que enfrenta el activismo social bajo regímenes autoritarios es la recuperación de su relación con la personas, o bien entre las organizaciones y sus bases sociales de referencia; justamente el punto en que se enfocan las acciones represivas, particularmente en casos de estallidos sociales como el de Nicaragua.

Si se sigue la ruta de las medidas represivas, todas apuntaron a separar a los activistas surgidos durante la protestas de su entorno y los distintos ámbitos en lo que se habían insertado. En Nicaragua se enfocaron en aislar a los dirigentes estudiantiles de los estudiantes universitarios, a los dirigentes comunitarios de sus barrios, a los líderes de las organizaciones (feministas, ecologistas, campesinos) de sus contrapartes sociales.

Sin embargo, este reto exógeno requiere resolver a su vez retos internos de las organizaciones de la sociedad civil, cualquiera que sea su naturaleza. Entre estos retos se encuentran los de fortalecimiento interno:

- Reconstruir la capacidad de producir significados (Sánchez et al., 2016), con el objetivo de visibilizar los problemas que afectan a las poblaciones, para construir las demandas y los intereses que las embestidas de los regímenes intentan subsumir en sus discursos genéricos como la soberanía, el antiimperialismo y los derechos sociales. Si como dice la Biblia, primero fue el verbo, para la lucha social es necesario construir una narrativa contrahegemónica que contribuya a forjar la identidad colectiva del grupo o comunidad. Los estallidos sociales también implicaron de alguna manera el

colapso o la superación de las narrativas anteriores. Las nuevas dinámicas contenciosas empiezan por nombrar los problemas que revisten la realidad que las dictaduras intentan ocultar.

- Reafirmar su autonomía respecto al Estado y la política. Aunque decirlo pueda resultar una obviedad, al tener en frente a un régimen dictatorial, la sociedad civil tiene que afianzar la dimensión que mejor apuntalaba su fortaleza en Nicaragua antes de 2018: la autonomía respecto al Estado y a los partidos políticos. Parte del fracaso de las plataformas unitarias se debe a la imposibilidad de hacer converger las agendas de los actores de la sociedad civil —en su papel de contrapoder— con las agendas de los partidos que aspiran legítimamente a desplazar del poder a la dictadura.
- Lo anterior lleva implícito la construcción de liderazgos propios. Como se dijo antes, los regímenes autoritarios buscan el descabezamiento de las organizaciones sociales mediante el encarcelamiento, el exilio o, llanamente, el asesinato. Pese a eso, la mejor afirmación de la autonomía es poder elegir los liderazgos de relevo sin la interferencia de agencias oficiales ni de los partidos.
- La autoorganización en formas innovadoras. Una sociedad civil no puede fortalecerse si no es capaz de potenciar sus aciertos en formas de coordinación novedosas como las redes y las federaciones multisectoriales; pero tampoco si no es capaz de sacudirse las debilidades que habían lastrado su desarrollo con anterioridad. En concreto, tiene que revisar la tendencia a la oenegización y dar un mayor peso a los movimientos sociales. De alguna manera habrá que romper con la trampa de las personalidades jurí-

dicas y las restricciones impuestas por la nueva Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro. En el otro margen, se tendrá que repensar cómo conciliar los actores surgidos después de 2018 con aquellos que ya estaban en el espacio público antes de esta fecha. Resulta innegable que hay dos estilos y dos apuestas que deben encauzar sus energías: la presencia, que enfatiza su activismo a través de las redes sociales, y la participación, que busca incidir en el espacio público nacional e internacional.

- Cerrar la brecha de la atomización implica abandonar los particularismos y los egos. Los repetidos fracasos de los intentos unitarios después de 2018 revelan que no basta con tener objetivos comunes para construir un actor colectivo. Con harta frecuencia, las agendas con aspiraciones reduccionistas (al estilo «no se hace nada si no actuamos como yo digo») en defensa del coto privado de cada organización y los egos estériles han sido obstáculos más serios para una sociedad civil fuerte que los planteados por la dictadura. Desde 2018, la tendencia al canibalismo se ha visto estimulada por el uso de las redes sociales para descalificar las posiciones divergentes. Estas actitudes tienen de trasfondo la avidez por el protagonismo que se opone a la participación deliberativa para construir consensos.
- Seguir siendo el espacio donde se discuten y se regeneran los valores que sustentan la democracia. Esto tiene implícito el necesario reconocimiento de dos rasgos esenciales: la diversidad de sus componentes y los conflictos que siempre la han caracterizado, los cuales han hecho de la sociedad civil la esfera de la comunidad política donde se abren nuevas discusiones y se expanden los derroteros de la democracia que luego se trasladan

a la esfera estatal y de los partidos. Conviene recordar que los grandes temas que han ampliado la democracia han surgido de la sociedad civil, como los feminismos, el ambientalismo, el cambio climático y los derechos humanos.

- Asumir el reto de la representatividad. Vinculado al reto anterior, otra de las características de la sociedad civil emergida después de 2018 es la frágil representatividad de algunas organizaciones. La represión, el exilio forzado y la volatilidad de los miembros de los nuevos actores surgidos durante y después de las protestas provocaron una legitimidad precaria, habida cuenta de las dudas acerca de su representatividad. De ello se derivan los cuestionamientos habituales sobre a quiénes y a cuántos representan, planteados sobre todo por organizaciones con membresía de base, como los movimientos sociales y otro tipo de organizaciones previas al 2018. Este reto pasará necesariamente por cuestionarse si los vínculos a través de las redes sociales generan vínculos lo suficientemente sólidos y estables como para cohesionar con organicidad a los nuevos actores.
- Frente a la quiebra de las instituciones estatales, fortalecer las instituciones sociales. Mientras no se demuestre lo contrario, la sociedad civil por lo general seguirá evocando una dimensión positiva del orden social, sin obviar las prácticas negativas en su seno que contradicen los valores democráticos. Aun así, cabe subrayar que la reconstrucción de las instituciones estatales no se hará solamente desde la memoria que guardan las leyes. También se hará desde los valores institucionalizados que emergen de las buenas prácticas de la sociedad civil, como la autoorganización, las relaciones horizontales y formas organizativas complejas como las redes, la transparencia y la rendición de

cuentas, la fiscalización de los poderes públicos, las auditorías ciudadanas y la perspectiva de género. Hay un amplio e inagotable inventario de instituciones sociales que se deben rescatar cuando toque reconstruir Nicaragua de las ruinas causadas por la dictadura.

- Reivindicar el compromiso con la justicia y contra la impunidad como institución social. Si en algo la sociedad civil puede (y debe) hacer diferencias con respecto a las tradiciones en Nicaragua es en su compromiso con la justicia, atreverse a provocar una ruptura con la política que ha encadenado pactos para garantizar la impunidad de los perpetradores de graves violaciones de los derechos humanos. Los hechos que vive Nicaragua desde 2018 claman la necesidad de arraigar la justicia como valor e institución social frente a la impunidad como antivalor enclavado en las instituciones de la política. Sólo la sociedad civil, en su calidad de espacio autónomo del Estado y de la política, puede mantener vivo el reclamo por la justicia y la verdad, y fomentar prácticas de reparación y no repetición. Sólo una sociedad civil autónoma puede actuar como vigilante para que la reconstrucción nacional no olvide a las víctimas ni deje impunes a los asesinos.

REFERENCIAS

- Banco Interamericano de Desarrollo-Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (BID-ASDI). (2006). Mapeo y caracterización de las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua. Informe Final. BID-ASDI.
- Borchgrevink, A. (2006). A Study of Civil Society in Nicaragua. A Report Commissioned by NORAD. 699 Paper, NUPI.
- Cuadra, E. y Samcam, R. (2019). De la represión al exilio. Nicaragüenses en Costa Rica. Caracterización sociodemográfica, organizaciones y agenda de apoyo. Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano.
- Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2023). Informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).
- Jarquín, E. (coord.), Cuadra, E., Enríquez, O., Flores, W., Icaza, J., Peraza, J.A., Prado, S. y Sáenz, E. (2020). El cambio azul y blanco. Dejando atrás el régimen de Ortega. Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM).
- López Baltodano, M. (2017). La entrega de un país. Expediente jurídico de la concesión canalera en Nicaragua. Popol Na, Eco Abogados.

- Ortiz, I., Burke, S., Berrada, M. y Sáenz, H. (2022). *World Protests. A Study of Key Protest Issues in the 21st Century*. Friedrich-Ebert-Stiftung New York, Global Social Justice, Initiative for Policy Dialogue, Palgrave MacMillan.
- Prado, S (comp.) (2022). *Nicaragua, esperanza rebelde. Derechos humanos y reconstrucción nacional*. Asociación Nicaragua Libre.
- Sánchez, M., Castro, D., Rodríguez, R. y Guerra, J. (2016). *Movimientos sociales y acción colectiva en Nicaragua: entre la identidad, autonomía y subordinación*. Amnis, 15.

ACTIVISMO EN CONTEXTOS POLÍTICOS RESTRICTIVOS: EL CASO DE VENEZUELA

Isabella Picón

Cuando el 6 de enero del año 2021 los venezolanos vimos por televisión cómo un grupo de fanáticos de Donald Trump atacaban el Capitolio de los Estados Unidos para prevenir la formalización de la victoria de Joe Biden como presidente, la escena no se nos hizo extraña. En años anteriores la mayoría nos habíamos acostumbrado a ver escenas de violencia en la Asamblea Nacional venezolana y en torno a otros poderes públicos para impedir el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas.

Al oeste de Venezuela, en la frontera con Colombia, se ubica el estado Táchira. A los «gochos» —así llamamos de cariño en nuestro país a las personas que son de allí— les decimos que vienen del futuro, porque en esa región hay más violencia política, se presentan más fallas en los servicios públicos y mayor escasez de gasolina que el promedio nacional. El ciclo de protestas de 2014 comenzó precisamente en ese Estado. Lo que pasa en Táchira, lo termina viendo el país entero. Y así como Táchira «viene del futuro» en cuanto al proceso sociopolítico venezolano, muy informal-

mente, los venezolanos podemos decir lo mismo en relación con la degradación de las instituciones y el retroceso democrático que vemos a nivel global. Fuimos una democracia fuerte que debido a la polarización social, la desigualdad, el descalabro del sistema de partidos y su incapacidad de reformarse internamente devino en democracia delegativa durante los primeros años del Gobierno de Chávez (1999-2006); en autoritarismo electoral (2006-2016) y finalmente en autoritarismo cerrado (2017-actualidad), coloquialmente en la «dictadura» de Nicolás Maduro.

El cierre del espacio cívico en Venezuela antecede a lo que ya se califica como una tendencia global de recesión democrática. De acuerdo a V-Dem (Papada et al., 2023), desde el año 2013 hasta el presente, el nivel de democracia del que disfruta el ciudadano promedio mundial se ha deteriorado hasta alcanzar niveles de 1986. Sin embargo, el deterioro de la democracia en Venezuela comenzó hace más de una década: autores como Chaguaceda y Puerta Riera (2015), Puyosa (2015) y Corrales e Hidalgo (2013) clasificaron a Venezuela como un «régimen híbrido» desde principios de los 2000. Un reporte sobre el retroceso democrático en América Latina de Pérez Liñán y Pagés Jiménez (2022) afirma que durante la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013) Venezuela experimentó mucho de los patrones observados en otros países del continente. Los autoritarismos de la región han tenido en Chávez y en Maduro unos hermanos mayores de quienes han aprendido qué hacer —y qué no hacer— para perdurar en el poder. Es por esa razón que comprender a la Venezuela actual no sólo resulta importante para vislumbrar posibles salidas democratizadoras en el país, sino también en la región y a nivel global.

En Venezuela se ha innovado en las formas del autoritarismo, pero también en las formas de hacer activismo en este contexto: dos caras de la misma moneda. En este artículo me propongo reflexionar en primer lugar sobre las condiciones particulares que hacen de Venezuela un contexto político restrictivo; en segundo lugar, indagar en cómo estas condiciones afectan el activismo político y la exigencia de derechos, o, en otras palabras, las formas en que los activistas en terreno se adaptan e innovan ante esas condiciones. No se trata de un texto exhaustivo, sino más bien exploratorio, producto de mi participación en el contexto político sobre el que reflexiono aquí, y que tiene la intención de generar más investigación (y solidaridad) en torno al movimiento prodemocracia venezolano.

¿A qué nos referimos con «un contexto político restrictivo» en el caso venezolano?

Hay tres términos útiles de la literatura a la hora de comprender el comportamiento del régimen político venezolano: 1) régimen híbrido, 2) retroceso democrático (democratic backsliding) y 3) su vocación totalitaria. Estos tres elementos son importantes porque inciden en la forma en que el régimen se comporta y, por ende, en las estrategias de los activismos sociales y políticos que luchan por la democracia. A la hora de analizar el régimen resulta clave entender que los tres términos son relevantes y que las prácticas, aunque pueden parecer contradictorias, se superponen e intercalan. La complejidad del sistema autoritario requiere que lo veamos de forma tridimensional.

Figura 1. *Tres conceptos necesarios para entender el régimen político venezolano*



Fuente: Elaboración propia.

A continuación, describiré las diferentes estrategias anti-democráticas del régimen de Nicolás Maduro (2013- presente), según las tres categorías de la Figura 1.

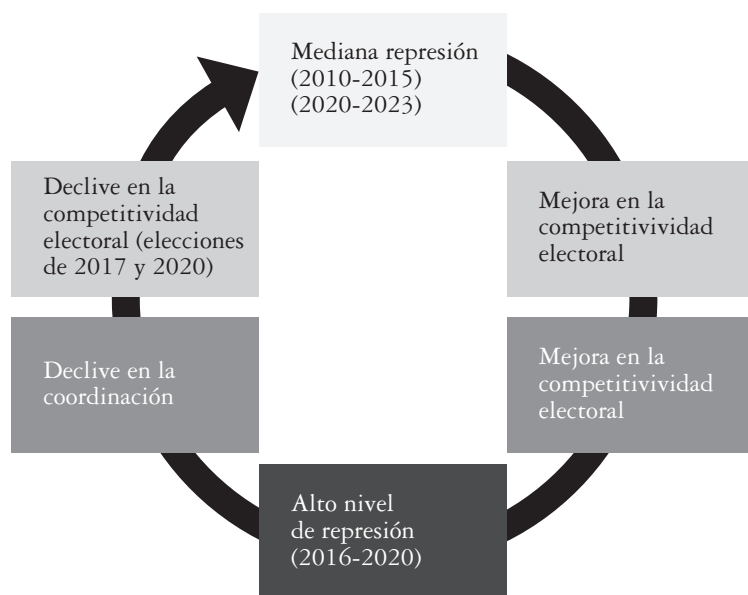
Régimen híbrido

Un régimen híbrido se caracteriza por la coexistencia simultánea de rasgos democráticos y autoritarios, pero siempre con reglas de juego utilizadas arbitrariamente para inclinar la balanza en detrimento de la oposición (Corrales y Hidalgo, 2013). Hay un relativo consenso académico en que los regímenes híbridos no son subcategorías de las democracias o los autoritarismos, sino un tipo de régimen en sí mismo,

porque presenta retos particulares para los esfuerzos de democratización, que son distintos a los de los autoritarismos completamente cerrados (Mufti, 2018). Dentro de la clasificación de regímenes híbridos se ubica la democracia delegativa de O'Donnell, el autoritarismo electoral o competitivo (Levitsky y Way, 2010; Schedler, 2002) y el autoritarismo electoral en su variante hegemónica (Schedler, 2002; Magaloni, 2006). Venezuela no dejó de ser un régimen híbrido por el hecho de pasar de un autoritarismo electoral entre 2007 y 2016 a un autoritarismo hegemónico a partir de 2016.

La decisión de Maduro de transformar a Venezuela en un autoritarismo hegemónico vino por el incremento de la competitividad de los partidos políticos de oposición en el terreno electoral. Luego del triunfo electoral de la alianza de la Mesa de Unidad Democrática en las elecciones legislativas de diciembre de 2015, el régimen de Maduro endureció su forma de lidiar con la oposición venezolana en comparación a como lo hacía Chávez. La investigación de Jiménez (2021) propone que el nivel de coordinación de los partidos opositores depende, en parte, de los niveles de represión a los que son sometidos. Podemos sugerir entonces que un régimen híbrido se caracteriza entonces por ciclos de alta represión, seguidos por una merma en la competitividad electoral de la oposición (consecuencia en parte de dicha represión). La merma en competitividad permite a la dictadura bajar los niveles de represión y eso trae consigo mayores niveles de coordinación que pueden producir una mayor competitividad electoral. Por el patrón pendular de la represión, los incentivos de los partidos políticos para mantenerse coordinados y con una narrativa unificada cambian de forma cíclica.

Figura 2. *Hipótesis sobre los ciclos de competitividad electoral, represión y nivel de coordinación*



Fuente: Elaboración propia.

Durante los 10 años de Nicolás Maduro en el poder se ha cumplido ya un ciclo completo como el que describe la Figura 2. Tal como aprecia allí, un ciclo consta de dos partes: una de alta represión ‘y otra de mediana represión. Aunque no hay espacio para profundizar en el tema, describiré las medidas más importantes del ciclo 2016-2023.

El triunfo en las elecciones legislativas de 2015 tomó a la oposición desprevenida y sin estrategia. Luego de meses de trifulcas en los primeros meses de 2016 sobre cómo capitalizar la mayoría obtenida, se decidió optar por la estrategia del Referéndum Revocatorio Presidencial. Esto unificó a la oposición en torno a una estrategia que —si bien intentaba hacer uso de las instituciones (el Consejo Nacional

Electoral, CNE) y las herramientas electorales (el Referéndum) que la Constitución dictaba para permitir un cambio político— tenía cada vez más la pinta y la retórica de un movimiento de resistencia civil, en lugar de una campaña política tradicional.

Un reporte de Acceso a la Justicia (2021) describe cómo el régimen truncó el proceso del Revocatorio:

La activación del revocatorio presidencial estaría marcada por condiciones extraordinarias fijadas por un CNE absolutamente parcializado, hasta que finalmente diversos tribunales penales, obrando fuera de su competencia, ordenaron la suspensión del trámite de recolección de manifestaciones del uno por ciento (1%), así como la recolección para la convocatoria del revocatorio, una medida que posteriormente sería formalizada por el árbitro electoral.

Esto tuvo un alto costo político para el régimen. Para el movimiento de derechos humanos venezolano, los niveles de represión durante los meses de recolección de firmas para el referéndum, el uso de un Decreto de Emergencia Económica para neutralizar los poderes de la recién electa Asamblea Nacional y la maniobra judicial ilegal para interrumpir el proceso revocatorio no dejaron dudas en definir públicamente al régimen de Maduro como una dictadura (PROVEA, 2016). Esta etiqueta se volvió uno de los antecedentes más importante del ciclo de protestas en defensa de la Asamblea Nacional y contra Maduro que se llevaron a cabo a lo largo de todo el territorio nacional entre marzo y julio de 2017. La elección de una Asamblea Nacional Constituyente en julio de 2017 que pretendía sustituir las

atribuciones legislativas de la Asamblea Nacional fue precedida por unas elecciones regionales el 15 de octubre a las que la oposición asistió en medio de la persecución y la realidad sin precedentes de la cárcel y el exilio. Para septiembre de 2017, sólo un mes antes de las elecciones regionales, había 566 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela (Moreno, 13 de septiembre de 2017). Debido a las irregularidades que se presentaron en esa elección, los principales partidos de oposición decidieron no participar en las elecciones municipales de diciembre de 2018.

Por otro lado, a partir de 2017 el Gobierno de Maduro hizo uso de lo que Corrales (2015) llama «legalismo autocrático»: fórmulas «jurídicas» para intervenir a los partidos políticos de oposición. Entre 2017 y 2018, por medio de una decisión de la Sala Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia impuso que los partidos políticos tuvieran que pasar por un proceso de revalidación con restricciones desproporcionadas, que terminó en la ilegalización o inhabilitación de varios partidos de oposición. Eso incluyó la ilegalización, en enero de 2018, de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), con la que la oposición había ganado la Asamblea Nacional en 2015, así como un decreto de la Asamblea Nacional Constituyente que determinaba que los partidos que no se habían presentado a las elecciones municipales de diciembre de 2017 —cinco de los partidos de oposición más importantes: Voluntad Popular (VP), Acción Democrática (AD) y Primero Justicia (PJ), además de La Causa R (LCR) y Alianza Bravo Pueblo (ABP)— se debían someter a un proceso de legitimación organizado por el CNE.

La consecuencia de esta exclusión, tanto de la tarjeta de la MUD como de los demás partidos, es que los principales

partidos de oposición no participaron, e incluso llamaron a la abstención en las elecciones presidenciales de 2018, cuyos resultados fueron desconocidos por más de 50 países. Por último, en junio de 2020 —pocos meses antes de las elecciones parlamentarias de diciembre— el Tribunal Supremo de Justicia tomó la decisión arbitraria de desconocer las directivas nacionales de algunos partidos: se repetían los casos de AD, PJ y VP, y se sumaban Patria para Todos (PPT) y Tupamaro (Acceso a la Justicia 2021).

Este período de alta represión y de cerramiento del espacio cívico y político partidista inició con la designación irregular —no a través del poder legislativo, sino de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia— de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Esto sucedió en 2003, 2005, 2014, 2016 y 2020 (Acceso a la Justicia, 2021), en las últimas dos ocasiones alegando el «desacato» de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora (en 2016) y presidida por Juan Guaidó (en 2020). En 2021 se eligió una nueva Asamblea Nacional en unas elecciones que dejaron mucho que desear en términos de pluralismo político por las razones arriba expuestas. Sin embargo, parte de los partidos opositores llegaron a un acuerdo con el Gobierno nacional para elegir un CNE a través de la Asamblea Nacional. El resultado de esto fue que las elecciones regionales y municipales de diciembre de 2021 contaron por primera vez en cuatro años con la participación de los principales partidos de oposición. De igual modo, el poder electoral habilitó a 110 organizaciones nacionales, entre ellas nuevos partidos junto a otras tarjetas emblemáticas como la de la Mesa de la Unidad Democrática (Suárez, 7 de febrero de 2023).

En octubre de 2022, la Plataforma Unitaria Democrática y otras fuerzas políticas opositoras al régimen de Maduro

planificaron elecciones primarias para elegir al candidato o la candidata que se mediría contra el chavismo gobernante en 2024, cuyo candidato presuntamente sería Maduro. La oposición venezolana —en todo su espectro de moderación y radicalismo— ha retomado la vía electoral. Esto responde precisamente al ciclo característico de los regímenes híbridos. La pregunta ahora será si la oposición venezolana supondrá una amenaza real al poder de Nicolás Maduro. Si lo es, no hay duda de que el Gobierno retrocederá nuevamente en sus concesiones (aún es muy temprano para decir libertades reales) de participación que ha dado a la oposición desde 2021 hasta la fecha. La irregular renuncia de los rectores del Consejo Nacional Electoral ocurrida en junio de 2023 obedece precisamente a que el Gobierno de Nicolás Maduro no se sentía demasiado cómodo bajo las condiciones electorales actuales.

Regresión democrática

Bermeo (2016) describe la regresión democrática como «el debilitamiento o eliminación liderado por el Estado de cualquiera de las instituciones políticas que sustentan una democracia existente» (p. 1). Debido a que hoy en día hay mayores estándares democráticos, las formas de autocratización de los sistemas políticos se han transformado: ya no se dan golpes de Estado que llevan a dictaduras al estilo Pinochet, sino que se dan golpes de Estado con la promesa de hacer elecciones en un tiempo determinado. Los golpes de Estado tradicionales se han sustituido por el abultamiento y la militarización del poder ejecutivo. Finalmente, el clásico fraude electoral se alternó con una estrategia más soterrada de manipulación de las instituciones electorales y el

acoso estratégico de opositores y medios de comunicación. En el caso venezolano, ya hemos tenido casos de fraude electoral clásico, pero se siguen utilizando también las formas incrementales y progresivas.

Lo más importante de la teoría de la regresión democrática es entender la forma en que esta se lleva a cabo desde adentro. Kaufman y Haggard (3 de marzo de 2021) mencionan tres elementos comunes de casos de regresión democrática en 16 países.

Primero, las regresiones democráticas suelen ocurrir de forma gradual y disimulada, por un período prolongado de tiempo y de forma no-lineal e impredecible, al estilo «un paso adelante, dos pasos atrás». Esto explica los vaivenes en los períodos de alta represión y mediana represión detallados en la sección anterior. Segundo, las regresiones democráticas suelen suceder en períodos de alta polarización social o política, en donde las grietas políticas ya no tienen que ver con diferencias ideológicas o de políticas públicas, sino con identidades fundamentales como, por ejemplo, el chavismo y el anti-chavismo. Los autoritarismos trabajan la comunicación para crear identidades binarias «ellos contra nosotros», y justificar así el socavamiento de las instituciones democráticas. Hoy la sociedad venezolana vive un «agotamiento de la polarización» (Quintero, 10 de mayo de 2022) que comenzó con la muerte de Chávez y se agudizó con la Emergencia Humanitaria Compleja y la crisis económica (Politika Ucab, 2015). En una entrevista concedida en 2019, Víctor Álvarez, exministro de Chávez, analizaba que «en Venezuela la polarización es de las élites, no de la sociedad». En el movimiento pro-democracia venezolano no terminan de calar narrativas de cambio político distintas

al quiebre maximalista. Los candidatos a las primarias que apuestan por la reinstitucionalización y el reencuentro no parecen repuntar en las encuestas de cara a las primarias de 2023. Uno de los retos más importantes para los activismos políticos y sociales es no imitar el patrón de polarización que siempre ha utilizado el autoritarismo.

El último elemento importante de la regresión democrática es que, aunque solemos concentrarnos en las personalidades de los autócratas, en realidad buena parte del «trabajo sucio» es realizado por el poder legislativo. Un ejemplo son las leyes habilitantes que pasó Chávez en la Asamblea Nacional a partir de 2005, tras la decisión de la oposición de no participar en dichas elecciones. En retrospectiva, para la oposición venezolana ha sido mucho más costoso no participar en elecciones legislativas que en elecciones presidenciales. La no-participación de partidos de oposición en 2018 contribuyó a que la comunidad internacional entendiera que la elección era fraudulenta y por ende no reconociera a Maduro como presidente a partir de enero de 2019. Este tipo de estrategias no aplica de la misma forma al poder legislativo, ni a las elecciones regionales y municipales, porque este tipo de comicios contribuye al mantenimiento de los cuadros de los partidos políticos que son necesarios para la reconstrucción democrática.

Por último, resulta importante tomar en cuenta que la regresión democrática es un reto aún mayor cuando quienes la sustentan creen que están apoyando una agenda democratizadora (Bermeo, 2016). El proyecto de Chávez buscaba implementar en Venezuela una «democracia participativa y protagónica» que, tanto en la práctica como en la retórica, siempre estuvo alejada de las instituciones de la democracia liberal. El proyecto chavista fue apoyado por las grandes

mayorías del país porque precisamente esas instituciones —sus partidos, pero también su representación parlamentaria y el régimen político— ya estaban en crisis, ya eran impopulares porque no supieron reformarse. La oposición venezolana tiene su origen en esas instituciones representativas. Los activismos venezolanos entonces tienen un doble reto: enfrentar y superar el autoritarismo, al tiempo que intentar superar la crisis de representatividad que originó a ese autoritarismo.

La vocación totalitaria del chavismo

Petkoff (2010, como se citó en Chaguaceda y Puerta Riera, 2015) decía que la dominación revolucionaria chavista mantenía una «anatomía democrática» y una «fisiología autoritaria». Para continuar la metáfora, podríamos decir que hoy en día esa anatomía está completamente deforme, se le pueden ver de forma mucho más transparente no sólo la fisiología autoritaria (los órganos que hacen que el cuerpo viva, los mecanismos con que lleva funcionando por más de 20 años), sino también el esqueleto: la vocación totalitaria. Martínez Meucci (5 de julio de 2021) fue probablemente uno de los primeros investigadores en insistir que, si bien en Venezuela obviamente no se ha constituido un régimen totalitario, sí hay una continuidad en la lógica totalitaria de lo que ha sido hasta ahora el chavismo —no sólo Maduro— en el poder. Vale la pena leer su definición de totalitarismo:

(...) lógica de poder según la cual una verdad absoluta que se asume como encarnada en el pueblo —entendido este como un

sujeto único y compacto— ha de abrirse paso mediante una revolución permanente que incorpora a todo individuo y elimina toda disidencia, en un intento por homogeneizar y disciplinar totalmente a las personas (Gleichschaltung) (...)

La anulación de la razón, el castigo al pluralismo y la apoteosis del movimiento colectivo y disciplinado, justificados por la ideología y facilitados por el control exhaustivo que permite la técnica, terminan por dotar al totalitarismo de ese carácter irracional y autodestructivo en el que irremisiblemente termina derivando, no sin antes encumbrar al poder a las personalidades más crueles y mediocres. El totalitarismo es la victoria trágica, efímera y suicida de «la administración de las cosas» por sobre el imperio de la razón y de la «acción comunicativa», si por tal comprendemos —en términos habermasianos— la esfera de la intersubjetividad que emerge de la participación de individuos libres. Esta victoria totalitaria sólo es posible tras romper la práctica totalidad de los vínculos naturales y sociales sobre los que se ha edificado paulatinamente una sociedad. (Petkoff, 2010, como se citó en Chaguaceda y Puerta Riera, 2015)

La lógica totalitaria busca destruir el tejido social y la autonomía de la sociedad civil para así lograr esa homogenización y colectivización de la que habla Martínez Meucci. La persecución y el cerco a la actividad asociativa y al trabajo de las organizaciones no gubernamentales ha sido una «política de Estado» desde los inicios del proyecto político chavista (Prieto, 19 de febrero de 2023). La más reciente amenaza es el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actualización La más reciente amenaza es el proyecto de Ley de Fis-

calización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional el pasado 24 de enero de 2023. Esta ley pide que organizaciones de la sociedad civil y aquellas domiciliadas en el extranjero que funcionen en Venezuela se inscriban en un registro especial, donde tendrán que reportar «su objeto y fines, las zonas en las que desarrollan actividades, las personas involucradas y las formas de financiamiento de las mismas» (Acceso a la Justicia, 8 de febrero de 2023). Si esta ley se hace efectiva, el Gobierno podrá quitarle la personalidad jurídica y sus cuentas bancarias en Venezuela y, por ende, su capacidad de trabajar desde el país a toda actividad asociativa que se considere una amenaza.

Por otro lado, la Ley Orgánica de Extensión de Dominio fue aprobada por la Asamblea Nacional en abril del 2023, en el marco de la «cruzada contra la corrupción» anunciada por el Gobierno de Maduro tras un escándalo por el desvío de 5 mil millones de dólares por la venta de crudo, que provocó la renuncia de Tareck El Aissami, Ministro de Petróleo, Vicepresidente Sectorial de Economía y una de las figuras más importantes del chavismo durante la gestión de Maduro (Hernández, 29 de marzo de 2023). Según Acceso a la Justicia (3 de mayo de 2023), la ley tiene por objeto «establecer mecanismos que permitan la identificación, localización y recuperación de los bienes y efectos patrimoniales originados por actividades ilícitas o destinados a estas». Sin embargo, se puede utilizar en la práctica como una herramienta política para apropiarse de cualquier tipo de bienes. La ausencia de imparcialidad del poder judicial en Venezuela impide que una ley como esta sea utilizada de forma apropiada.

Estas dos leyes funcionan en la actualidad como una Espada de Damocles contra la sociedad civil y contra cualquier actor político que el Gobierno considere una amenaza: no las ha puesto en práctica todavía, pero lo podría hacer en cualquier momento. La amenaza latente funciona como mecanismo de control a la actividad política. Aunque durante el bienio electoral 2023-2024 podríamos ver mayor ejercicio de las libertades en los partidos políticos, la actividad asociativa en general sigue estando restringida y bajo amenaza.

Finalmente, es imposible hablar de la lógica totalitaria en Venezuela sin dejar de analizar la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) y las restricciones a la libertad de expresión como mecanismos para ejercer control y fragmentación de la sociedad.

Se comienza a hablar de Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela desde 2016, porque fue la manera que encontraron las organizaciones de derechos humanos para hacerle entender a la comunidad internacional —especialmente a las Naciones Unidas— lo que estaba detrás del empeoramiento en los indicadores de salud, alimentación e ingreso de los venezolanos, y por tanto de la necesidad imperiosa de abrir un canal humanitario (Cartaya et al., 2020). Una EHC «es una crisis humanitaria multifacética en un país, región o sociedad, donde la autoridad colapsa total o significativamente debido a un conflicto interno o externo, que precisa de una respuesta internacional desde diversos sectores» (Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia [INEE], 2023). Las crisis humanitarias de esta magnitud suelen suceder durante y después de conflictos bélicos, o por desastres naturales. En cambio,

la EHC venezolana viene dada por el desmantelamiento de las capacidades estatales y la destrucción sistemática de la economía. Según un reporte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de 2023, Venezuela es el cuarto país con mayor cantidad de refugiados en todo el mundo (alrededor de siete millones), sólo superado por Siria, Ucrania y Afganistán.

El empeoramiento de los indicadores humanitarios durante la gestión de Maduro ha venido acompañado de una tecnificación de los mecanismos de control social. El Carnet de la Patria ha sido utilizado desde 2017 para conectar a los usuarios con programas y servicios de beneficencia social a través de un código QR (Puyosa, 2019), entre ellos el CLAP (cajas de comida distribuidos por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, cuyos integrantes son miembros del partido de Gobierno), y el pago de salarios, pensiones y jubilaciones de los empleados públicos. El Carnet de la Patria está conectado al Sistema Patria, el cual también cuenta con una billetera electrónica que permite el pago con capta huellas. Todo esto permite la recolección constante de datos por parte del Gobierno, no sólo por medio de la geolocalización y la información financiera, sino también por medio de encuestas que se deben responder obligatoriamente para acceder a los servicios. Estos sistemas han sido utilizados desde las elecciones presidenciales de 2018 para la movilización electoral del partido gobernante (Observatorio Electoral Venezolano [OEV], 2021). La implantación de estos sistemas precisamente al momento del agravamiento de la Emergencia Humanitaria Compleja y los obstáculos que el Gobierno de Maduro pone al ejercicio de la actividad humanitaria en el país (Cartaya et al., 2020)

no resulta accidental, sino más bien una herramienta para cercenar la autonomía de los individuos frente al Estado.

El cercenamiento de la libertad de expresión y la destrucción de la esfera pública explican la normalización de la situación político-social y humanitaria en Venezuela. La narrativa «Venezuela se arregló» ha sido manufacturada desde la propaganda gubernamental para vender la mejora económica circunstancial que vivió Venezuela entre 2021 y 2022, producto de la dolarización y la liberalización de los controles, como una mejora real de las condiciones de vida de los venezolanos. Si la narrativa fuera cierta, la migración venezolana en el mundo no hubiera aumentado un 30% durante el último año (Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe [SELA], 2 de mayo de 2023).

La dificultad en crear y difundir contra-narrativas yace en la pérdida de los medios de comunicación masivos. La criminalización del trabajo periodístico —especialmente a través de la Ley Contra El Odio, promulgada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente—, la política de sanciones administrativas y la compra venta de empresas de comunicación, que torció la línea editorial de periódicos y televisoras, ha sido una práctica constante del Gobierno de Maduro (Rodríguez, 2022). La consecuencia de esto es que, de acuerdo a una investigación de la ONG Espacio Público, hasta el primer cuatrimestre de 2022 sólo hay registro de 980 medios de comunicación en Venezuela, de los cuales un 51% se concentran en la capital y los estados Lara, Portuguesa, Barinas, Aragua y Mérida (Ramos, 2 de mayo de 2022). De acuerdo al Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS, 2023), siete millones de venezolanos viven hoy en «desiertos de noticias».

Apenas el 25% de los medios trabaja la fuente política y el 12% la fuente económica; además, los medios que se identifican como pro-Gobierno doblan en cantidad a los medios estatales, lo cual dice que, debido a la autocensura, la propiedad de un medio no condiciona su línea editorial (Rodríguez, 2022). El control del espacio televisivo ha sido crucial para el control de la información por parte de Maduro: un reciente estudio de la Unión Europea, la Universidad de Navarra y Transparencia Internacional revela que el 38,7% de los venezolanos usan la televisión para informarse.

La consecuencia del desbalance pro-Gobierno en los medios tradicionales es que los venezolanos hoy en día se informan por las redes sociales (25%) y por los escasos medios nativos digitales (18%), de los cuales solo existen 97, casi 10% de los medios en Venezuela. Aunque el periodismo independiente ha migrado al espacio digital, la sofisticación de la hegemonía comunicacional chavista dificulta que los venezolanos se informen por estos medios.

El Gobierno controla el consumo de información digital de tres maneras. En primer lugar, mediante los constantes cortes eléctricos, el retraso en la tecnología de las compañías telefónicas y la baja penetración de internet. Venezuela tiene la segunda conexión a internet más lenta de América Latina y una de las más lentas del mundo (Cardozo, 11 de mayo de 2022). En segundo lugar, a través del bloqueo de dominios de internet de medios de comunicación, portales políticos y organizaciones de derechos humanos. Y por tercer lugar, mediante el monitoreo y control de las redes sociales para: 1) la persecución selectiva de periodistas y activistas, y 2) promocionar narrati-

vas, hashtags y teorías conspirativas (Suárez Pérez y Ponce de León, 2021). Es importante explicar este último punto para entender los mecanismos de fragmentación social del régimen de Maduro.

Una investigación de Puyosa (2018) sobre la estrategias del Gobierno de Maduro para intervenir en los procesos informativos y de deliberación durante la campaña presidencial de 2018 revela tres estrategias sofisticadas en este sentido. La primera es la coordinación de cuentas automatizadas (bots) y de activistas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) incentivados monetariamente mediante el Sistema Patria para promocionar hashtags y asegurar que las campañas gubernamentales fueran tendencia o trending topic. Esto crea una distorsión informativa porque da la impresión de que el Gobierno y sus posiciones son más populares de lo que son en realidad. La segunda es la promoción de hashtags distractores, con contenido escandaloso, emocional y ofensivo, usados para crear divisiones en los activistas opositores. La tercera estrategia es la intervención en campañas opositoras para tergiversar mensajes y crear discusiones distractoras. Podemos ver entonces cómo el régimen ha implementado estrategias para fragmentar a la oposición no sólo en el terreno analógico-electoral, sino también en el terreno de la discusión digital, más importante incluso porque es allí donde muchas veces se suelen dar discusiones estratégicas, aunque de manera espontánea. Este tipo de estrategias cercena el derecho de los venezolanos a la información, y también a la asociatividad y a la participación política en general. De nuevo, aunque en el bienio electoral 2024-2025 se puedan notar algunas mejoras en las condiciones electorales y las libertades a partidos

políticos en comparación con el período 2018-2020, en muy poco probable que cese la política contra la actividad asociativa y el acceso a la información.

Retos y prácticas de los activismos en Venezuela

En esta sección analizaremos los retos y las prácticas que emergen de las características del régimen, a partir del resumen que se muestra en la Tabla 1. Podemos ver que a partir de los patrones y las prácticas del autoritarismo emergen dos grandes retos, los cuales han generado a su vez prácticas y fenómenos que permiten el funcionamiento del activismo hoy en Venezuela. Por razones de espacio, sólo hablaré de aquellos que emergen en torno a las prácticas del régimen cómo híbrido y los patrones sobre regresión democrática.

(Siguiente página Tabla 1.)

Tabla 1. *Prácticas del régimen según un marco conceptual y sus consecuencias en los retos y prácticas para los activistas*

Concepto del autoritarismo	Prácticas del régimen	Retos para los activistas	Prácticas de los activistas
Régimen híbrido	Patrón pendular en la represión a los partidos políticos y la sociedad civil	El reto de cambiar el marco de acción colectiva ¿Cómo mantener operatividad en momentos de alta amenaza y represión?	Hibridación del activismo Emergencia de «las causas»
Regresión democrática	Crisis de representación	¿Cómo mantener la coherencia entre comunicación y estrategia?	
	Polarización Uso del Poder Legislativo para ejercer el «legalismo autocrático»	Agotamiento del discurso polarizador Insuficiencia de la abstención electoral como táctica para desconocer el poder. Efectos negativos de la abstención.	
Vocación totalitaria	Sociedad civil bajo constante amenaza. Represión y censura a los medios de comunicación Manipulación e intervención gubernamental en los medios de comunicación digital y en las redes sociales.	El reto de informar, asociarse y deliberar en un contexto de desinformación y fragmentación	- Creación de redes internacionales para la incidencia y la protección. - Medios digitales crean espejos analógicos en zonas populares y desiertos informativos. - Creación de redes de confianza y grupos de afinidad entre activistas de diversos partidos políticos y causas.

Fuente: Elaboración propia.

El reto de cambiar el marco de acción colectiva

Como vimos al principio, la represión en los regímenes híbridos suele ser cíclica y pendular. Esto representa un reto para la estrategia y la comunicación de los activismos que, sin embargo, ha sido poco estudiado. A pesar de su vínculo estratégico, el aspecto ideacional de los movimientos sociales suele ser pasado por alto en el caso de las luchas contra los autoritarismos, porque su identidad colectiva se tiende a reducir a su oposición a la dictadura. En realidad, hay muchas maneras de oponerse y comunicar la oposición al autoritarismo. Melucci (1996, p. 44) define la identidad colectiva como un «nosotros» que los actores de un movimiento social construyen alrededor de «tres órdenes de orientaciones» en constante tensión: los fines (objetivo general), los medios (posibilidades y límites de la acción), y la relación con su entorno (cómo el campo está definido). El fin suele ser obvio —derrotar a la dictadura— pero también tiene que ver con la visión del país, que varía en dependencia del actor; los fines pueden ser pacíficos, violentos, electorales, entre otras variantes; la relación con el entorno apunta a la definición que se tiene de los competidores y los aliados del movimiento. La identidad colectiva se crea al calor de la acción, pero también mediante los marcos de acción colectiva; «esquemas cognitivos» (Goffman, 1972) que guían la interpretación de los hechos, dan sentido y dirección a la acción colectiva, y permiten a participantes y espectadores priorizar sensorialmente lo relevante y lo irrelevante, lo que está «en el marco» y «fuera del marco» (Snow et al., 2007, p. 387). Los marcos de acción colectiva tienen una función

de diagnóstico (para definir la injusticia, o el problema que busca resolver el movimiento), una función de pronóstico (la estrategia, el qué hacer o cómo resolver el problema) y una función motivacional (que establece la urgencia y la capacidad del movimiento de ejercer una acción concreta y en colectivo). Para entender los retos de comunicación y estrategia del movimiento pro-democracia venezolano es importante analizar las rupturas y las continuidades de los marcos de acción colectiva y cómo estos se relacionan con el contexto cambiante.

Entre 2016 y 2021, el liderazgo del movimiento pro-democracia venezolano tuvo continuidad en términos del marco pronóstico, en relación al quiebre. El movimiento buscaba resolver el problema (que se define como dictadura y emergencia humanitaria compleja) ejerciendo presión a través de protestas y acciones de la comunidad internacional para buscar un quiebre en la coalición dominante. Este es el caso de la campaña por el referéndum revocatorio de 2016, y los ciclos de protestas de 2017 y 2019 (Picón, 2023). Diferentes factores contribuyeron a que estas campañas no lograron su cometido, entre ellas la unidad real que existe en las Fuerzas Armadas venezolanas, el nivel de represión al que está dispuesto a llegar Maduro y la pandemia por Covid-19, que terminó de desmovilizar al activismo opositor. Pero también se cometieron errores estratégicos, como el poco énfasis en organizar un movimiento popular, en contraste con la sobredimensionada importancia que se le dio a la presión de la comunidad internacional. Esto hizo que el marco pronóstico diera un giro de prácticamente de 180 grados: en febrero de 2021, Guaidó, quien todavía en ese momento era presidente in-

terino de Venezuela, llamó públicamente a un «acuerdo de salvación nacional».

El marco pronóstico del quiebre obedecía a un país polarizado y a una oposición con alta capacidad de movilización. A medida que la represión y el exilio aumentaron, las capacidades de la oposición de cumplir con esa estrategia se esfumaron. El marco de «el quiebre» se agotó. Su problema es que no tiene basamento en cuanto a lo que parecen ser las capacidades y oportunidades estratégicas de la oposición. Tampoco el marco de la reinstitucionalización a través del diálogo y las elecciones ha cobrado la masividad y la capacidad de movilización que «el quiebre» alguna vez tuvo.

La despolarización, la crisis económica y el agotamiento del marco del quiebre han tenido dos consecuencias que se podrían ver como positivas, incluso dentro del panorama dictatorial. Primero, el surgimiento de movimientos sociales autónomos que luchan por causas sociales concretas, como el feminismo, la igualdad de género, los derechos LGBTQ+, los derechos laborales, el derecho a la ciudad y la protección de la naturaleza y los ecosistemas. Las movilizaciones más grandes que han ocurrido en Venezuela entre 2021 y 2023 han tenido como tema central los derechos laborales y los derechos LGBTQ+. Entre enero y abril de 2023 hubo más de 2000 protestas de empleados públicos, lideradas sobre todo por trabajadores de la salud y la educación, pensionados y jubilados (Observatorio Venezolano de Conflictividad Social [OVCS], 20 de octubre de 2022). Los empleados públicos son uno de los tres pilares de popularidad que alguna vez tuvo el chavismo (junto con la población rural y las periferias urbanas), por lo que resulta obvio que este movimiento combina actores de la oposición

tradicional, emergentes y otros que vienen del chavismo. En el caso del movimiento LGBTQ+, existe conciencia de que para lograr el objetivo hay que trascender la polarización política. Al respecto, una activista declaró lo siguiente para un reportaje de El Diario:

Uno de los principales obstáculos que a mi modo de ver se presenta en esta lucha es la polarización en los mismos movimientos LGBT. Tenemos una misión pendiente que va más allá de nuestras propias luchas. Nuestra lucha es por quienes no tienen el coraje de alzar su voz. Deberíamos desvincularnos de esa polarización política y creo que lo estamos logrando. (Fabrizio, 9 de enero de 2022)

Estas «causas» le dan sentido y contenido a la lucha por la democracia. Son sectoriales y, por tanto, resulta menos riesgoso hacer activismo alrededor de sus temas que sobre la lucha política contra el régimen. Además, ese tipo de lucha se enmarca en doctrinas de derechos humanos que cuentan con el apoyo de organizaciones de cooperación internacional, embajadas y redes transnacionales de activistas. Las luchas sectoriales son, entonces, una forma orgánica que los activismos han encontrado para mantenerse movilizados —hasta cierto punto—, a pesar de la represión y el agotamiento del marco de acción colectiva que alguna vez los movilizó.

En otros términos, la hibridación de los activismos se refiere al uso de repertorios de redes digitales y dinámicas organizacionales en red, consideradas con anterioridad como algo propio de los movimientos sociales, por parte de grupos de interés y partidos políticos (Chadwick, 2007).

Aunque la función sociopolítica de los partidos políticos, los grupos de interés y los movimientos sociales es diferente, los límites entre ellos se han vuelto cada vez más permeables y difusos. La movilización y la organización de las causas antes mencionadas, así como las campañas de resistencia civil de 2017 y 2019, estuvieron organizadas no por estructuras jerárquicas, sino por redes que combinan diferentes tipos de intermediación de intereses y participación política (Kitschelt, 2003). Estas prácticas híbridas tienen varias razones. En un principio porque el proyecto político de Chávez hizo que se dejaran las diferencias de lado entre la sociedad civil y los partidos políticos que se oponían a él, y se reemplazó esas diferencias con una identidad defensiva (Gómez Calcaño, 2009, p. 187). En segundo lugar porque la represión ha hecho que los activistas político-partidistas se tengan que refugiar en otras identidades y tipos de movilización (las causas), precisamente para protegerse. En tercer lugar porque el fracaso de la estrategia del quiebre hizo que los activistas dejaran de utilizar a los partidos como medio para la acción colectiva.

A modo de conclusión

Este artículo ha intentado establecer una relación entre los retos y las prácticas para los activismos en Venezuela, y las características del contexto autoritario. Podemos extraer las siguientes conclusiones:

- La dinámica de régimen híbrido ha generado ciclos de alta y baja represión, que tienen una incidencia en la estrategia y el discurso en los activismos de oposición. Entre 2016 y 2020, la estrategia fue intentar generar un quiebre en la coalición dominante me-

diante la presión popular en protestas, y la intervención de la comunidad internacional. La negociación era accesoria al discurso y la estrategia, a pesar de que se participaba en ella. Se llegó a esta estrategia por la autocratización del régimen y luego de un período de alta coordinación y popularidad electoral de la oposición. La estrategia del quiebre no funcionó en última instancia, generó un alto nivel de represión, desmembró y dividió a la oposición, y la obligó —por ahora— a cambiar el marco de acción colectiva a uno de reinstitucionalización y negociación con el régimen.

Por otro lado, hay características que vienen de la teoría de regresión democrática e inciden en los retos actuales del activismo.

- El discurso de polarización del Gobierno ha tenido un espejo en la oposición. Para el movimiento pro-democrático ha sido un reto tener una narrativa coherente con la estrategia. El marco de acción colectiva del quiebre fallaba en momentos en que la oposición se veía obligada a negociar con el régimen o a participar en elecciones. El marco de acción colectiva del quiebre no tenía un repertorio de acciones tan amplio como lo necesitaba la estrategia.
- La oposición ha logrado cambiar el marco de acción colectiva, pero a un costo altísimo que incluye la pérdida de credibilidad frente a la comunidad internacional y frente a la ciudadanía en general. Frente a la represión, los activismos se han tornado híbridos, se protegen de la represión mediante el enfoque en movimientos sociales sectoriales en los que conviven activistas de la oposición tradicional, el chavismo disidente y otras fuerzas emergentes. Los discursos tienen más que ver con la defensa de derechos sectoriales que con el cambio democrático inmediato.

REFERENCIAS

- Acceso a la Justicia (2021). Elecciones en Autocracia: el caso venezolano (2017-2021).
- Acceso a la Justicia (8 de febrero de 2023). El proyecto de Ley contra la sociedad civil venezolana considera ONG a casi todas las organizaciones civiles sin fines de lucro.
- Acceso a la Justicia (3 de mayo de 2023). Ley Orgánica de Extinción de Dominio.
- Alfaro Pareja, F. (2020). «Archipiélagos emocracy bajo la tormenta en Venezuela: Coaliciones, actores y autocratización». *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, n.º 109 (abril): 21-40.
- Araujo, E. (3 de octubre de 2020). Bus TV, un noticiero que se baja de una buseta y se sube en la otra. *Venezuelan Press*.
- Bermeo, N. (2016). On Democratic Backsliding. *Journal of Democracy*, 27(1), 5-19.
- Cardozo, R. (11 de mayo de 2022). Venezuela: en búsqueda de la hegemonía comunicacional. DW (TV).
- Cartaya, V., Reyna, F. y Ramsey, G. (2020). Venezuela emergencia humanitaria compleja. Respuesta humanitaria, desafíos para la sociedad civil. WOLA, Acción Solidaria.
- Chadwick, A. (2007). Digital Network Repertoires and

- Organizational Hybridity. *Political Communication*, 24(3), 283-301.
- Chaguaceda, A. y Puerta Riera, M.I. (2015). Quo vadis Venezuela: from Delegative Democracy to Authoritarianism of the 21st Century. *Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública*, 4(1).
- Corrales, J. (2015). The Authoritarian Resurgence: Autocratic Legalism in Venezuela. *Journal of democracy*, 26(2), 37-51.
- Corrales, J. (2020). Authoritarian Survival: Why Maduro Hasn't Fallen. *Journal of Democracy*, 31(3), 39-53.
- Corrales, J. y Hidalgo, M. (2013). El régimen híbrido de Hugo Chávez en transición (2009-2013). *Desafíos*, 25(1), 47-86.
- Corrales, J. y Penfold, M. (2015). *Dragon in the Tropics: Venezuela and the Legacy of Hugo Chavez*. Brookings Institution Press.
- Cyr, Jennifer. 2017. *The Fates of Political Parties: Institutional Crisis, Continuity, and Change in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fabrizio, S.D. (9 de enero de 2022). Inclusión, leyes, no discriminación y erradicación de la violencia: la hoja de ruta de la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela para 2022. *El Diario*.
- Gamboa, L. (2017). Opposition at the Margins: Strategies against the Erosion of Democracy in Colombia and Venezuela. *Comparative politics*, 49(4), 457-77.
- García Guadilla, M.P. (2020). Democracia participativa, protestas sociales y autoritarismo en el socialismo del siglo XXI: el movimiento estudiantil venezolano. *América Latina Hoy*, 85, 73-89.

- Gómez Calcaño, L. (2009). La disolución de las fronteras: sociedad civil, representación y política en Venezuela. CENDES, Universidad Central de Venezuela.
- Hernández, O. (29 de marzo de 2023). Imputan a 23 personas en Venezuela en relación con supuesta corrupción en PDVSA. CNN Español.
- Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) (2023). Oasis informativos: El Fenómeno. Atlas Del Silencio, IPYS.
- Jiménez Morales, M. (2021). Contesting Autocracy: Repression and Opposition Coordination in Venezuela. *Political Studies*, 0032321721999975.
- Kaufman, R. y Haggard, S. (3 de marzo de 2021). The Anatomy of Backsliding: Why Is Democracy Consuming Itself? Political Violence at a Glance.
- Kitschelt, H. (2003). Landscapes of Political Interest Intermediation. Social Movements, Interest Groups, and Parties in the Early Twenty-First Century. En P. Ibarra Güell (ed.), *Social movements and democracy*. Palgrave.
- Levitsky, S. y Way, L. (2010). Competitive authoritarianism. *Hybrid regimes after the Cold War*. Cambridge University Press.
- López Maya, M. (3 de noviembre de 2019). Venezuela: el ejercicio del poder y la naturaleza del régimen. *Trópico Absoluto*.
- Martínez, M.A. y Vaisberg de Lustgarten, R. (2015). La narrativa revolucionaria del chavismo. *POSTData*, 19.
- Martínez Meucci, M.A. (5 de julio de 2021). Dominación totalitaria, organizaciones ciudadanas y Derechos Humanos. *La Gran Aldea*.
- Melucci, A. (ed.). (1996). The process of collective identity. *En Challenging Codes: Collective Action in the Infor-*

- mation Age, 68-86. Cambridge University Press.
- Moreno, V. (13 de septiembre de 2017). ¿Cuántos presos políticos hay en Venezuela y dónde están reclusos? Efecto Cocuyo.
- Mufti, M. (2018). What Do We Know about Hybrid Regimes after Two Decades of Scholarship? *Politics and Governance*, 6(2), 112-119.
- Observatorio Electoral Venezolano (OEV). (2021). El Sistema Patria y su huella en las elecciones venezolanas.
- Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). (20 de octubre de 2022). Conflictividad durante el primer trimestre de 2023.
- Papada, E., Altman, D., Angiolillo, F., Kohler, T., Lundstet, N., Nord, M., Sato, Y., Wiebrecht, F. y Lindberg, S. (2023). Reporte de la Democracia 2023. Resistencia frente a la autocratización. V-Dem Institute.
- Pérez Liñán, A. y Pagés Jiménez, E. (2022). Democratic Backsliding and Authoritarian Resurgence in Latin America. Summary of Findings from an Expert Roundtable. NORC, University of Chicago.
- Picón, Isabella (24-27 de mayo de 2023). Collective Action Frames in the Venezuelan Pro-Democracy Movement [Conferencia]. LASA 2023, “América Latina y el Caribe: Pensar, Representar y Luchar por los Derechos”, Vancouver, Canadá.
- Politika Ucab (25 de mayo de 2015). *¿Se redimensiona la polarización en Venezuela?*
- Prieto, H. (19 de febrero de 2023). Rafael Uzcátegui: «El cerco contra las ONG ha sido una política de Estado». Prodavinci.
- PROVEA (2016). A partir del 20 de octubre de 2016, go-

- bierno de Nicolás Maduro debe calificarse como una dictadura.
- Puyosa, I. (2015). Political Control on the Internet in the Context of a Hybrid Regime. Venezuela 2007-2015. *Teknokultura: Revista de Cultura Digital y Movimientos Sociales*, 12(3), 501-26.
- Puyosa, I. (2018). Venezuelan Government Strategies For Information War On Twitter. *SSRN Electronic Journal*, septiembre.
- Puyosa, I. (2019). Venezuelan Struggle Towards Democratization: The 2017 Civil Resistance Campaign. En C. Mouly y E. Hernández (Eds.), *Civil Resistance and Violent Conflict in Latin America: Mobilizing for Rights*, pp. 85-110. Cham: Springer International Publishing.
- Puyosa, I. (2019). Venezuela's 21st Century Authoritarianism in the Digital Sphere. *Toda Peace Institute. Policy Brief*, 62.
- Quintero, L. (10 de mayo de 2022). Mireya Lozada: «Nuevos liderazgos deberán responder a demandas del ciudadano». *TalCual*.
- Ramos, W. (2 de mayo de 2022). Por temor a represalias menos de 40% de los medios reportan la crisis política y económica del país *Espacio Público: menos del 40 % de los medios venezolanos abarcan temas sobre la crisis política y económica de Venezuela por temor a represalias. Crónica Uno*.
- Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE). (2023). *Emergencia Compleja*.
- Rodríguez, M. (2 de agosto de 2022). *21N: libertad de expresión, participación y elecciones*. Centro Gumilla.
- Rosales, A. y Jiménez, M. (2021). *Venezuela: Autocratic*

- Consolidation and Splintered Economic Liberalization. *Revista de ciencia política* (Santiago), 41(2), 425-447.
- Schedler, A. (2002). The Menu of Manipulation. *Journal of Democracy*, 13(2), 36-50.
- Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). (2 de mayo de 2023). Migración venezolana en el mundo sube; cifras en Colombia pierden transparencia.-informativo/20230502/si/88768/migracion-venezolana
- Suárez, M. (7 de febrero de 2023). En Venezuela hay 270 presos políticos, según el Foro Penal. *Foro Penal*.
- Suárez Pérez, D. y Ponce de León, E. (2021). Digital Autocracy: Maduro's Control of the Venezuelan Information Environment. Atlantic Council.

DATOS DE AUTORES/AS

Inés M. Pousadela: Especialista Senior de Investigación de CIVICUS: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, donde además codirige CIVICUS Lens y coproduce el Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil. También se desempeña como profesora de las asignaturas Política Comparada y Sociedad Civil Global en la Universidad ORT de Uruguay. Este capítulo utiliza insumos del CIVICUS Monitor, de los informes anuales de CIVICUS sobre el estado de la sociedad civil y de la plataforma CIVICUS Lens, así como de otras fuentes primarias y secundarias, entre las que destacan entrevistas con actores de la sociedad civil de los países analizados.

Alexander Lukashuk: Belarusian media manager, journalist, and author who most recently served as director of the Belarus service for Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL). He also worked as director of the RFE/RL Afghan service from 2004 to 2005 and as acting executive editor of RFE/RL from 2007 to 2008. He has produced documentaries and published books on the history of Belarus, including the 2017 book *Oswald in Minsk*. Mr. Lukashuk's work has received multiple

awards, including the 2017 Ales Adamovich Award from the Belarusian PEN Center, the U.S. Agency for Global Media's David Burk Award for Distinguished Journalism in 2011, and the 2014 Communicator Award from the U.S. Academy of Interactive and Visual Arts. His English-language writings have appeared in *American Purpose*, the *Hoover Digest*, and in the *East European Constitutional Review*.

Silvio Prado: Politólogo y sociólogo nicaragüense. Investigador y autor con publicaciones sobre temas relacionados con participación ciudadana y sociedad civil. Asesor de proyectos fortalecimiento de participación ciudadana municipal de Nicaragua, Honduras y Guatemala. Experto en Sociedad Civil y ONG, Democratización, Administración Pública, Descentralización y Desarrollo Local.

Isabella Picón: Activista, Politóloga (Universidad Northwestern, EE. UU, 2012) y Master en comunicaciones políticas (The London School of Economics and Political Science, Reino Unido, 2020). Cofundadora e integrante del consejo asesor de @LaboCiudadano, colectivo que promueve la acción noviolenta para el cambio democrático. Directora de Participación y Alianzas Estratégicas de Mi Convive, ONG que promueve la articulación comunitaria y la participación ciudadana en Venezuela. Integrante del programa SNAP América Latina (Sinergización y acción noviolenta y construcción de paz) del Instituto de la Paz de Estados Unidos y participante de la Iniciativa del Instituto para el

Liderazgo Global (Universidad de Denver, EE.UU). Ha trabajado en gobierno local, consultoría política, campañas electorales y de resistencia civil.

Engy Moussa: Teaching Associate at the Department of Politics and International Studies at the University of Cambridge and James Buchanan Fellow at the Mercatus Center at George Mason University. She lectures on Middle East Politics and pursues a multi-disciplinary research agenda covering the politics and economics of authoritarian systems, critical security studies, and international relations.

Este libro se terminó
de imprimir en España
en diciembre de 2023.

En entornos democráticos, donde los Gobiernos la perciben como aliada, la sociedad civil colabora con las autoridades en beneficio de la ciudadanía. Bajo regímenes autoritarios, el activismo es empujado a una posición defensiva, que amenazan su propia existencia. Desde la confluencia del saber académico y la experiencia personal, este libro aborda la problemática del espacio cívico en cuatro países con contextos políticos restrictivos —Bielorrusia, Egipto, Nicaragua y Venezuela.

In democratic environments, where governments perceive it as an ally, civil society collaborates with the authorities for the benefit of citizens. Under authoritarian regimes, activism is pushed into a defensive position, threatening its very existence. From the confluence of academic knowledge and personal experience, this book addresses the problem of civic space in four countries— with restrictive political contexts — Belarus, Egypt, Nicaragua and Venezuela.

